



Glosario de términos jurídico-agrarios

GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICO-AGRARIOS

DIRECTORIO

Florencio Salazar Adame
SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA
Isaías Rivera Rodríguez
PROCURADOR AGRARIO

Rogelio Parra Silva
SUBPROCURADOR GENERAL
Erick Raúl Peón Ruiz
COORDINADOR GENERAL
DE PROGRAMAS INTERINSTITUCIONALES
Roberto Sánchez Olguín
COORDINADOR DE ASESORES
José Manuel López Valero
DIRECTOR GENERAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS
Jaime Rafael Morfín Corona
DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN AGRARIA
Alejandra de María y Campos Orrico
DIRECTORA GENERAL DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES
Germán Campero López
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Cuauhtémoc Saavedra Méndez
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Morelos Vargas Gómez
SECRETARIO GENERAL
Carlos Nuño Robles
COORDINADOR GENERAL DE DELEGACIONES
Juan Manuel Madrigal Ibarra
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE REPRESENTACIÓN AGRARIA
Ricardo Cruz Rodríguez
DIRECTOR GENERAL DE CONCILIACIÓN,
ARBITRAJE Y SERVICIOS PERICIALES
Francisco Hugo Santiago Ramírez
DIRECTOR GENERAL DE APOYO AL
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD RURAL
Víctor Manuel Navarrete Ruiz
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Leonardo Riveros Frago
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

Alejandra de María y Campos Orrico
Directora General de Estudios y Publicaciones

ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Coordinación General de Programas Interinstitucionales, Coordinación General de Delegaciones, Dirección General de Organización Agraria, Dirección General de Estudios y Publicaciones, Dirección General Jurídica y de Representación Agraria, Coordinación de Asesores, y las delegaciones Baja California Sur, Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán

REDACCIÓN Y REVISIÓN

Juan Manuel Madrigal Ibarra, Fernando Aguilera Hernández y Rubén Gallardo Zúñiga

APOYO

Manuel Morales Jurado, Artemio Colín Salgado, Gabriela Cortés Ruiz, Gabriela González Mendoza, Marco Antonio Pérez Martín del Campo

EDICIÓN

Alberto Mc Lean

PRODUCCIÓN EDITORIAL

Perspectiva Digital, S.A. de C.V.

La correspondencia debe dirigirse a:

Dirección General de Estudios y Publicaciones
Procuraduría Agraria
Motolinía 11, cuarto piso
Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.
Teléfonos: 1500 3300, 1500 3900, exts. 1228, 1121
Fax: 1500 3314

E-mail: dgep@pa.gob.mx
Consúltenos en Internet:
<http://www.pa.gob.mx>

ISBN 968 7579 2 7

DR 2005 Procuraduría Agraria

Motolinía 11, Col. Centro, C.P. 06000, México, D.F.

Conforme apuntamos en la presentación respectiva, la primera edición de ésta compilación fue solo el inicio del compromiso que hacía la Procuraduría Agraria de ofrecer a los estudiosos e interesados de la materia jurídica agraria, un marco de referencia conceptual, para posteriormente dar paso a la continuidad mediante su permanente corrección y actualización.

Con la presente segunda edición, damos cumplimiento a esa continuidad en el compromiso, en la que, primeramente, hemos corregido y perfeccionado el contenido de los vocablos incluidos, y, por otro lado, el glosario se ha enriquecido con la incorporación de nuevas voces, que amplían los alcances de las anteriores o que por sí mismos, incrementan el acervo semántico de la cuestión agraria.

Agradecemos muy especialmente a quienes nos han aportado su conocimiento y experiencia, servidores públicos, académicos e interesados en general; su apoyo ha sido invaluable, lo que nos permite presentar orgullosamente este trabajo. Sin embargo, seguirá siendo necesaria su desinteresada cooperación para continuar con el compromiso institucional de su actualización.

Dr. Isaías Rivera Rodríguez
Procurador Agrario

La motivación que llevó a la Procuraduría Agraria a realizar la presente compilación de términos jurídico-agrarios fue poder ofrecer un marco de referencia conceptual para todos aquellos estudiosos e interesados en la materia jurídica agraria, que aclara o al menos marca un punto de vista de uno o varios de los significados o aplicaciones en relación con los distintos contextos en que se presentan.

Como tal, un glosario, cualquiera que sea su naturaleza, siempre será perfectible, abierto a nuevos caminos y posibilidades; en ese sentido, el *Glosario de términos jurídico-agrarios* sólo pretende ser una invitación a su enriquecimiento, pues quienes utilizan dichos conceptos saben que respecto al tema agrario en específico, nada es absoluto, sino que son conceptos con múltiples interpretaciones, tan variadas y ricas como lo es la vida de los hombres y mujeres del campo.

Este catálogo se concibe también como una guía, un acercamiento a la riqueza que representa el tema agrario; por ende, no refleja la opinión institucional sino que más bien representa un crisol del quehacer jurídico en su relación directa con el agro. En ese sentido, no es un fin en sí mismo, sino el principio, esperamos prometededor, de un proceso de interacción y retroalimentación entre investigadores, académicos y servidores públicos, interesados todos en los temas agrarios, con el propósito de crear una obra que pueda ser útil en más de un sentido para la reflexión y mejor comprensión del campo mexicano en su dimensión jurídica.

Dr. Isaías Rivera Rodríguez
Procurador Agrario

Abreviaturas

Art. 27	Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	LGSM	Ley General de Sociedades Mercantiles
C	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	LGTOC	Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
CCF	Código Civil Federal	LOAPF	Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
CFPC	Código Federal de Procedimientos Civiles	LOFR	Ley Orgánica de la Financiera Rural
CORETT	Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra	LOTA	Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios
DOF	Diario Oficial de la Federación	PA	Procuraduría Agraria
DRA 27	Decreto publicado en el DOF el 6 de enero de 1992, por el que se reforma el Art. 27	PROCEDE	Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
FIFONAFE	Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal	RAN	Registro Agrario Nacional
INEGI	Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática	RIRAN	Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional
LA	Ley Agraria	RIPA	Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria
LAN	Ley de Aguas Nacionales	RISRA	Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria
LDA	Ley de Amparo	RITA	Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios
LDRS	Ley de Desarrollo Rural Sustentable	RLA	Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
LFPA	Ley Federal de Procedimientos Administrativos	RLAMOPR	Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural
LFRA	Ley Federal de la Reforma Agraria	RPP	Registro Público de la Propiedad
LGAH	Ley General de Asentamientos Humanos	SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
LGBN	Ley General de Bienes Nacionales		
LGEEPA	Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente		

A

Abigeato. (Del latín *abigeatus*, derivado de *ab* y *agere*, arrear echar por delante.) Se entiende al abigeato en derecho penal, como el robo de ganado, de animales que requieren de arreo o de acarreo. Es una especie del delito de robo que algunas legislaciones estatales, por sus características, lo tipifican de manera específica y en su caso, tomando en cuenta su recurrencia, lo sancionan con mayor severidad.

En la materia, los sujetos agrarios propietarios de ganado mayor o menor, en ocasiones pueden verse afectados por la comisión de este delito y en este supuesto, deben presentar la denuncia correspondiente ante el ministerio público del fuero común.

Abogado agrario. Profesionista que desarrolla su actividad principalmente en el ámbito agrario y ante los tribunales en esta materia.

Para el ejercicio de sus atribuciones, la PA cuenta entre otros servidores públicos, con abogados agrarios. Se denomina así al servidor público de la Institución que tiene una formación profesional como licenciado en derecho y que ha sido seleccionado, capacitado y evaluado por el organismo, con el fin de proporcionar los servicios que la LA y el RIPA le confieren; pertenece y es evaluado en el servicio profesional de carrera.

Está acreditado para representar a los sujetos agrarios ante los tribunales agrarios y coadyuvar a la presentación por escrito, de sus demandas, contestaciones y contrademandas.

Otra función principal es la de orientar y asesorar a dichos sujetos. La estructura orgánica de la PA prevé la presencia de abogados agrarios en sus delegaciones y residencias, con el fin de contar con los profesionistas necesarios para el buen desempeño de las actividades de la Institución, en la procuración

de justicia. (Véase LA arts. 136, fraccs. I, II y IX, 170 y 178 y RIPA arts. 4º, fraccs. I, IV, VIII y X, 30, fracc. II y 34 y “Procuraduría Agraria”, “Estatuto del Servicio Profesional Agrario”.)

Absolución de posiciones. Acto procesal en el que una de las partes contesta las preguntas contenidas en el pliego de posiciones, formulado por su contraparte durante el desahogo de la prueba confesional. En el juicio agrario, se ofrece y desahoga esta prueba; calificando el magistrado del tribunal unitario agrario que las preguntas contenidas en el pliego correspondiente tengan relación con la *litis* planteada y que no sean contrarias a la ley. (Véase LA arts. 185 y 186 y CFPC arts. 343 y 344 y “Prueba”.)

Acaparamiento de tierras ejidales. Se presenta cuando un ejidatario es titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor a 5% del total de las tierras del núcleo o del límite de la pequeña propiedad.

La PA tiene atribuciones para recibir las denuncias, iniciar la investigación y turnar el expediente a la SRA para su resolución correspondiente. (Véase LA art. 47 y RLAMOPR arts. 7-10 y 25-30.)

Accesión. (Del latín *accessio-onis*, agregación de una cosa a otra.) Modo de adquirir la propiedad, por el cual el propietario de una cosa principal hace suyo lo que ella produce, lo que se le incorpora por obra de la naturaleza o por la mano del hombre.

De acuerdo con la doctrina, la accesión comprende, además de la adquisición de las cosas accesorias, la adquisición de frutos, de una nueva especie u obra y la formación de copropiedad por confusión.

Accesión de aguas. Se denomina accesión el derecho al uso de las aguas que proporcionalmente corresponden a los terrenos concedidos por dotación, ampliación de ejidos o creación de nuevos centros de población ejidal. De acuerdo con la anterior legislación en la materia, se emitía el acuerdo correspondiente para formalizar el uso del agua.

La LA dispone que el aprovechamiento de las aguas del ejido corresponde al propio núcleo y a los ejidatarios; la distribución, servidumbres de uso y de paso y demás aspectos relativos se regularán por lo dispuesto en la normatividad en esta materia. (Véase LFRA art.324 y LA arts. 52-55 y “Servidumbre”.)

Acción agraria. Es el ejercicio de un derecho, en esta materia lo ejercitaban, principalmente, los núcleos agrarios y los grupos campesinos carentes de tierras,

la LFRA establecía 64 acciones dentro de las que destacaban la restitución, dotación de tierras, ampliación de ejido, creación de nuevos centros de población y reconocimiento y titulación de bienes comunales.

La referida ley sigue aplicándose en materia de rezago agrario, respecto de las acciones agrarias pendientes de resolución. La ley vigente en la materia mantiene los procedimientos de reconocimiento como comunidad a los núcleos agrarios, derivado de las acciones de restitución de sus tierras comunales, de un acto de jurisdicción voluntaria para acreditar la posesión que detentan, de una resolución en juicio cuando exista litigio respecto de las tierras y la conversión de ejido a comunidad.

Actualmente, diversas acciones que eran resueltas por las autoridades agrarias respecto de núcleos constituidos y derechos de sus integrantes, son acordadas por la asamblea del núcleo ejidal o comunal, siguiendo las formalidades previstas en la normatividad. Otras son resueltas en vía de conflicto o jurisdicción voluntaria por los tribunales agrarios. (Véase LFRA libro V “Procedimientos agrarios” y LA arts. 23, 98-100 y LOTA art. 18 y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)

Acción social. Impulso coherente dirigido a la transformación de las instituciones políticas, económicas, sociales, culturales o de cualquier naturaleza similar, que signifiquen un valor o interés general. Los programas que lleva a cabo el Sector Agrario tienen como finalidad ejercitar acciones a favor de la sociedad campesina, tendentes a elevar su bienestar.

Acciones serie “T”. El capital social de una sociedad propietaria de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, se divide en partes que se denominan acciones, en este caso los títulos que representan una parte del capital social, correspondiente a una serie especial denominada “T”, equivalente al capital aportado en tierras o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con su valor al momento de la aportación o adquisición.

Ningún individuo podrá detentar más acciones de esta naturaleza que las que equivalen a la extensión de la pequeña propiedad. Estas acciones garantizan a sus titulares el derecho a recibir tierras en pago de lo que les corresponda en el haber social, al momento de la liquidación de la sociedad. (Véase LA arts. 125-133 y “Sociedades civiles”, “Sociedades mercantiles” y “Sociedades de producción rural”.)

Acta de asamblea. En materia agraria, es el documento levantado con motivo de la celebración de una asamblea de ejidatarios o comuneros; deberá formularse

al término de la reunión y firmarse por quienes en ella participaron y que así deseen hacerlo e incluso podrán firmar bajo protesta. Las actas de asamblea que creen, modifiquen o extingan derechos de sus integrantes, deberán inscribirse en el RAN para que surtan efectos frente a terceros.

En el acta debe asentarse lugar, fecha y hora de su celebración, quiénes participan, el orden del día y su desahogo, así como los acuerdos tomados. Para las asambleas de formalidades especiales, el acta deberá ser firmada por el fedatario público que intervenga en la reunión y por el representante de la PA.

Igualmente, se elaboran actas de asamblea de las reuniones de las diferentes sociedades y figuras asociativas de las que son integrantes los sujetos agrarios, con las formalidades establecidas en la normatividad aplicable y de acuerdo con sus estatutos o documento que norme su funcionamiento. (Véase LA arts. 28 y 31 y “Asamblea del núcleo”.)

Acta de audiencia conciliatoria. Es el documento que formulan los servidores públicos de la PA, para registrar los hechos acontecidos durante la audiencia conciliatoria, insertando los acuerdos a que hayan llegado las partes; se asienta en el acta lugar, día y hora de su celebración, los nombres y demás generales de los comparecientes y los documentos con que acreditaron su personalidad e interés jurídico. (Véase RIPA arts. 37-40 y 43-44 y “Audiencia conciliatoria” y “Conciliación agraria”.)

Acta constitutiva de una sociedad. Documento jurídico que crea una persona moral. En materia agraria, puede ser una sociedad mercantil o civil propietaria de tierras, o bien una sociedad rural. El acta constitutiva debe contener los estatutos de la figura asociativa y otorgarse ante fedatario público e inscribirse en el RAN, así como en el registro público de la propiedad correspondiente. A partir de la inscripción, las sociedades contarán con personalidad jurídica. (Véase LA, arts. 108-113 y 125-133 y LGSM art. 6 y “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”.)

Acta notarial. La Ley Notarial del Distrito Federal define al acta notarial como el instrumento original autorizado, en el que se relacione un hecho o acto jurídico que el notario público asiente en el protocolo bajo su fe, a solicitud de parte interesada. (Véase “Prueba Plena”.)

Acta de posesión y deslinde. Documento que se levanta con motivo del cumplimiento de resoluciones presidenciales o sentencias del Tribunal Superior Agrario, respecto de procedimientos dotatorios y de reconocimiento de bienes comunales

entre otras acciones. También este documento se elaboraba con motivo de la ejecución de mandamientos del gobernador del Estado en acciones biinstanciales.

Dicho documento forma parte de la carpeta básica de los núcleos ejidales y comunales y en él se determinan los terrenos entregados a los grupos solicitantes de tierras, su localización y la conformidad del núcleo con los terrenos concedidos. (Véase LFRA arts. 299, 307 y 308, LA art. 3º transitorio “Resoluciones presidenciales en materia agraria”).

Acto de autoridad. Son los que ejecutan las autoridades por medio de facultades decisorias y en ocasiones mediante el uso de la fuerza pública y que con base en disposiciones *de facto* pretenden crear obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. Los actos de autoridad son impugnables en juicio de amparo.

Son impugnables en juicios de amparo, cuando es emitido por el órgano del Estado, de manera unilateral, imperativa y coercitiva. (Véase LDA arts. 1, 11 y 114 y “Juicio de amparo”).

Actor. Es la persona que ejercita acción procesal mediante la interposición de la demanda ante un órgano jurisdiccional. También al actor se le llama demandante.

En materia agraria, el actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia, en este supuesto se requiere a la PA para que coadyuve en su formulación e interposición ante los tribunales agrarios. (Véase LA arts. 170 y 182 y “Juicio agrario”).

Actuación de oficio. Facultades establecidas legalmente por las que una dependencia o entidad ejercita acciones sin necesidad de promoción de parte interesada.

La PA interviene de oficio, cuando se presume que la asignación de tierras de ejidos o comunidades se realizó con vicios, defectos graves o que se pueda perturbar el orden público; designando comisario representante de los ejidatarios en la constitución de una sociedad mercantil o civil, y denunciando el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y empleados de la administración de justicia agraria, así como los hechos que lleguen a su conocimiento y que puedan ser constitutivos de delito o faltas administrativas. (Véase LA arts. 61, 75, fracc. V, 135-136, fraccs. VI y X y RIPA art. 2º y “Procuraduría agraria”).

Actuaciones judiciales. Alude a la actividad de los órganos del Poder Judicial Federal en el desempeño de sus funciones. Desde el punto de vista objetivo, se

entiende por actuaciones judiciales las constancias escritas y fehacientes de los actos realizados en un procedimiento judicial. En la materia, en juicio agrario estas actuaciones se desarrollan dentro de los procedimientos instaurados ante los tribunales agrarios. (Véase LA art. 164, 166, 171, 18 y 191 y LOTA art. 18 y “Juicio agrario”).)

Acuerdos agrarios. Convenios suscritos entre la Secretaría de la Reforma Agraria y las organizaciones campesinas, que tenían como objetivo, con motivo del rezago agrario jurídico o administrativo, establecer vías alternas de solución a los núcleos afectados por dichos rezagos, mediante apoyos para proyectos productivos, compra de tierras, compensaciones económicas, expropiación de terrenos, regularización de posesiones precarias, etc. Actualmente, son atendidos los planteamientos de las referidas organizaciones por dicha dependencia, en el marco del Programa Nacional para el Campo de abril de 2003, formalizado por las centrales campesinas, productores rurales y el Gobierno Federal.

Acuerdo de radicación (auto de admisión). Acto procesal mediante el cual el juez del conocimiento admite una demanda a trámite y ordena inicie el juicio o procedimiento correspondiente.

En materia agraria, el magistrado ordena la radicación del juicio si la demanda cumple con los requisitos establecidos en la ley.

La PA, de manera administrativa, emite acuerdos de radicación en los procedimientos de quejas y denuncias, conciliación, arbitraje, entre otros. (Véase LA art. 178; RIPA arts. 39 y 40 y CFPC art. 325 y “Juicio agrario”).)

Acuerdo Nacional para el Campo. Instrumento formalizado el 28 de abril de 2003, entre el Ejecutivo Federal y las organizaciones campesinas y de productores de México, por virtud del cual se establecen diversos compromisos y las condiciones para que la soberanía y seguridad alimentaria y el desarrollo de la sociedad rural, sean alcanzados mediante una política de Estado. Dicho Acuerdo contiene 30 considerandos, 16 principios rectores y 282 compromisos.

El numeral 254 del referido acuerdo determina fortalecer a la PA como *ombudsman agrario*, ajustando sus funciones a las asignadas en la C y LA, mediante su reingeniería organizacional y la reasignación de funciones dentro del Sector Agrario.

Acumulación. Se presenta cuando la decisión de dos o más litigios exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas derivadas, en todo o en parte del mismo hecho, o tienden en todo o en parte, al

mismo efecto, o cuando dos o más juicios deben resolver total o parcialmente, una misma controversia.

De aplicación supletoria la legislación federal civil adjetiva en materia agraria, de presentarse las hipótesis señaladas, los tribunales agrarios por sí o a petición de parte, acuerdan la acumulación de demandas o expedientes. (Véase CFPC art. 72.)

Adjudicación. (Del latín *adjudicatio-onis*, acción y efecto de adjudicar, de *ad*, a, y *judicare*, juzgar.) Declarar que una cosa corresponde a una persona o conferírsele en satisfacción de algún derecho. Se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial.

En la legislación anterior en materia agraria, la adjudicación principalmente se dio como consecuencia de la privación de derechos agrarios respecto de la unidad de dotación.

En términos de la normatividad vigente, los tribunales unitarios agrarios, al resolver las acciones ejercitadas pueden, como consecuencia, determinar la adjudicación (o reconocimiento) de derechos individuales a sujetos agrarios sobre terrenos en ejidos y comunidades. (Véase LFRA arts. 64, 72, 85, LA art. 48 y “Prescripción”).

Administración pública. La administración pública es la organización especial del Estado, creada con el objeto de cumplir la función de satisfacer los intereses colectivos. No tiene personalidad jurídica propia ya que constituye uno de los conductos por los cuales se manifiesta el Estado. Suele identificársele como la prestación de servicios públicos que atienden las necesidades de la colectividad.

Adopción del dominio pleno. Es la acción que ejercita el ejidatario con autorización previa de la asamblea de formalidades especiales, por virtud de la cual la parcela sobre la cual tiene derechos cambia de régimen a propiedad plena del ejidatario titular y se sustrae del patrimonio del ejido; para formalizar esta figura, el ejidatario deberá solicitar al RAN la expedición del título de propiedad correspondiente y la cancelación de la inscripción de la parcela como propiedad del ejido; el referido título deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. Cubiertas estas formalidades la parcela se rige por el derecho común.

Cabe mencionar que es requisito para que la asamblea autorice el dominio pleno, que las parcelas objeto del acuerdo hayan sido delimitadas y asignadas de conformidad con la normatividad. La adquisición del dominio pleno es po-

testativa de cada ejidatario. (Véase LA arts. 23, fracc. IX, 56, 81-83 y “Derecho del tanto”.)

Adquisición de derechos agrarios. De conformidad con la Ley Agraria, la adquisición de derechos en la materia puede ser mediante la sucesión, cesión de derechos, acuerdo de asamblea o resolución de los tribunales agrarios en juicios de prescripción. (Véase LA arts. 17,18, 48 y 80, y “Cesión de derechos”, “Prescripción” y “Testamento”.)

Afectación agraria. Durante la etapa política del reparto agrario, así se designó al conjunto de medidas que la Federación o los estados realizaban dentro de la competencia que les otorgaba la legislación agraria aplicable, para imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público; en tales circunstancias, se satisfacían necesidades agrarias a favor de los grupos de campesinos solicitantes de tierras. Actualmente los asuntos considerados de rezago agrario relacionados con expropiación (afectación de tierras), a partir de la modificación constitucional del año de 1992 y en términos de la LA vigente, son resueltos por el tribunal superior agrario. (Véase Art. 27 antes de la reforma de 1992; LFRA arts. 249-251 y LA 3º transitorio y “Resoluciones presidenciales en materia agraria” y “Reforma agraria”.)

Agostadero. Terreno donde pasta el ganado. Lugar cuya vegetación consumen los animales como alimento, junto con otros elementos que encuentren y que necesitan para subsistir.

El coeficiente de agostadero es el número de hectáreas suficientes para sostener una unidad animal y varía según las condiciones de clima, suelo y vegetación de la región. Dicho coeficiente sirve para determinar los límites de la pequeña propiedad ganadera, de acuerdo con la normatividad, es decir, la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor. (Véase LA arts. 116, fracc. II, 117, último párrafo y 120-122 “Cerril”, “Propiedad privada”.)

Agravio. En términos generales, se entiende como la afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, comúnmente a través de una resolución judicial o acto de autoridad. También cada uno de los motivos de impugnación expresados en las demandas de amparo y recursos de apelación o de revisión contra una resolución emitida en primera instancia. (Véase LDA art. 88 y “Juicio de amparo”.)

Alegatos. (Del latín *allegatio*, alegación en justicia.) Es la exposición oral o escrita de los argumentos de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones una vez agotada la etapa probatoria y con anterioridad a la emisión de la sentencia de fondo en las diversas instancias del proceso. Los alegatos también se presentan en el juicio de amparo a favor de los terceros perjudicados o con interés en el juicio. (Véase “Tercero perjudicado”.)

Ámbito de competencia. Espacio dentro del cual una autoridad jurisdiccional, de conformidad con la normatividad aplicable, ejerce sus facultades para conocer y resolver los conflictos que le son planteados.

En la materia, el Tribunal Superior Agrario determina el ámbito de competencia de los tribunales unitarios agrarios, mediante la emisión de los acuerdos de competencia territorial correspondientes. (Véase LOTA art. 8º fraccs. I y II y “Tribunales Agrarios”.)

Amigable composición. (Del latín *amicabilis*, lo amistoso, propio de amigos.) Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros, amigos de ambas, sin sujetar sus procedimientos a normas de derecho vigentes y apearse para la decisión a la equidad y buena fe.

En materia agraria, es la invitación que realiza el magistrado del tribunal unitario agrario a las partes en el juicio antes de dictar sentencia, para que lleguen a un acuerdo que, en su caso, resuelva el conflicto. (Véase LA art. 185, fracc. VI y “Conciliación en materia agraria”.)

Ampliación de ejido. Acción que ejercitaba un grupo de campesinos carentes de tierras en un ejido constituido, de conformidad a la normatividad aplicable.

En la legislación agraria vigente no existe esta acción de ampliación; sin embargo, está contemplada en los casos de rezago agrario. (Véase arts. 3º transitorio del DRA 27, LFRA arts. 272 y 325 y LA 3º transitorio y “Acciones agrarias” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”.)

Aparcería. Explotación agrícola con base en un contrato entre el propietario de la tierra y el campesino que la trabaja, por virtud del cual este último toma el nombre de aparcerero y se compromete a pagar al titular, en concepto de arriendo, una parte de los productos de la explotación.

En la vigencia de la LA los ejidatarios y comuneros tienen el derecho de celebrar este tipo de contratos, con integrantes del núcleo o con terceros. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Contrato”.)

Apeo y deslinde. (Apear, del latín *appedare*, de *pedare*, sostener; deslindar, y *delimitare*, señalar y distinguir los términos de un lugar, provincia o heredad.) Acción de medir, delimitar, amojonar y delimitar un inmueble.

Estos trabajos de campo han sido utilizados para la ejecución de resoluciones presidenciales y de sentencias de los tribunales agrarios, principalmente en acciones dotatorias de tierras y de reconocimiento de bienes comunales.

Actualmente, en el juicio agrario previsto por la legislación vigente, las diligencias o trabajos de apeo y deslinde (pericial topográfica) son una prueba comúnmente ofrecida por las partes, en los litigios originados por la restitución y posesión de parcelas o de terrenos del núcleo. (Véase LFRA arts. 307, 342 y LA art. 186 y “Servicios periciales”.)

Aplicación supletoria. La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades.

Los requisitos para hacerla valer son: que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale la normatividad supletoria; la previsión de la institución jurídica en el ordenamiento objeto de supletoriedad; que las normas existentes en dicho cuerpo jurídico no sean suficientes, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y que las disposiciones supletorias no contraríen las bases legales de la institución suplida.

En lo no previsto por la LA se aplica supletoriamente la legislación civil federal y en su caso la mercantil, según el asunto de que se trate. En materia adjetiva se aplica supletoriamente el CFPC y respecto de medidas precautorias la LDA. (Véase LA arts. 2º, 166 y 167 y “Suspensión”.)

Aportación de tierras. La LA faculta a la asamblea de ejidos y comunidades para aportar tierras de uso común para la constitución de sociedades civiles o mercantiles. En dicha ley se prevén las formalidades y requisitos para la celebración de estas asambleas. (Véase, LA arts. 23 fracc. IX, 75, fracc. I y 100 y “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”.)

Aprovechamiento de recursos naturales. Es el uso y disfrute de las tierras, aguas, bosques, fauna, y de todos aquellos recursos naturales renovables y no renovables, propiedad de la nación o de los particulares que se efectúa conforme a las condiciones o requisitos que previene y ordena la legislación administrativa aplicable.

El régimen legal vigente para el aprovechamiento de los recursos naturales propiedad de la nación, hace posible que los particulares puedan explotar, be-

neficiarse o aprovecharse en general de dichos recursos, a través de los procedimientos administrativos de la concesión y permiso. (Véase “Concesionario en zona federal” y “Propiedad pública”.)

Aprovechamiento sustentable. Es la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. (Véase LGEEPA art. 3º, fracc. III.)

Arbitraje. Facultad conferida por las partes en conflicto a una persona o institución para conocer y resolver sus diferencias en un asunto determinado, sin ajustarse a las reglas estrictas de un procedimiento jurisdiccional, atendiendo los principios de la equidad y buena fe. Es uno de los medios para resolver los conflictos entre sujetos agrarios en el ejercicio de sus derechos. (Véase RIPA arts. 5º, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III, 41, inciso a, y 45 y “Procuraduría agraria”.)

Áreas naturales protegidas. Extensiones de tierra que por los recursos naturales que en ellas se encuentran, sean minerales, boscosos, acuíferos, de fauna, etcétera, se hallan bajo protección legal con el fin de conservarlas.

Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas; están sujetas al régimen previsto en la ley de la materia. (Véase LGEEPA arts. 3º,44-77 y LA arts. 59 y 88 y “Aprovechamiento sustentable”.)

Arrendamiento. Contrato mediante el cual una persona llamada arrendador transfiere temporalmente el uso o goce de una cosa, a otra denominada arrendatario, quien paga por ello un precio cierto.

La LA permite la celebración de este contrato a los núcleos respecto de sus tierras de uso común y a los ejidatarios y comuneros sobre sus parcelas. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Contrato” y “Tierras ejidales”.)

Artículo 27 constitucional. En esta disposición se contienen las bases generales que regulan las formas de tenencia en el medio rural; en específico, las referentes a la propiedad social. En él se establece el reconocimiento y personalidad jurídica de los ejidos y comunidades; la protección especial de sus tierras; su libertad para el aprovechamiento de sus recursos productivos, el derecho de los núcleos

y sus integrantes para asociarse entre sí y con terceros; la aportación de tierras de uso común a sociedades mercantiles; la posibilidad de que los ejidatarios y comuneros puedan ceder sus derechos parcelarios, entre las más importantes. Asimismo, el referido artículo de nuestra Carta Magna determina el límite de la pequeña propiedad y prevé la creación de las instituciones competentes para la administración y procuración de justicia agraria. (Véase DRA 27.)

Asamblea del núcleo. En materia agraria es el órgano supremo del ejido o comunidad, con la organización y funciones que la LA y su reglamento o estatuto señalan, en la que participan todos los ejidatarios o comuneros legalmente reconocidos; sus resoluciones son obligatorias para todos los integrantes del núcleo. Los asuntos de competencia exclusiva de la asamblea están contenidos en el artículo 23 de la LA.

Cabe mencionar, que contrario a lo previsto por la legislación derogada, en la ley vigente no se prevé la existencia de asambleas ordinaria mensual, de balance y programación y la general extraordinaria, por lo que, únicamente se establece la asamblea de ejidatarios o comuneros, la cual se podrá celebrar con formalidades simples o especiales tomando en cuenta los asuntos a tratar. Al efecto, deberán cubrirse diferentes requisitos en cuanto a los plazos señalados en la convocatoria, quórum legal para su verificativo, mayorías establecidas para los acuerdos tomados y, en su caso, la participación de un fedatario público y un representante de la Procuraduría Agraria. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA arts. 22 a 31 y “Acta de asamblea”.)

Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras (ADDAT). Asamblea que se verifica en ejidos y comunidades, con las formalidades especiales previstas en la LA, en la cual los integrantes del núcleo determinan el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas, reconocen el parcelamiento económico o de hecho, regularizan la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes. Igualmente, destina los terrenos al asentamiento humano, al uso común o al área parcelada a favor de los ejidatarios, comuneros, posesionarios y vecindados; dentro del PROCEDE es la culminación operativa del Programa. (Véase LA arts. 23, fracc. VII-VIII, 56-62 y RLA art. 8°, 9° y 10-58 y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”.)

Asamblea de información y anuencia. Dentro del PROCEDE es la asamblea en la cual la PA y el INEGI informan la naturaleza, objetivos y características de los trabajos a realizar en el Programa. En ella los integrantes del núcleo determinan su conformidad para incorporarse a él; esta asamblea es de formalidades simples

y requiere para su validez el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad. (Véase LA arts. 23, fracc. XV y 26-27 y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”.)

Asamblea de informe de la comisión auxiliar. Dentro del PROCEDE, es la asamblea en ejidos y comunidades en la que se les comunica el resultado de los trabajos preliminares en el desarrollo del Programa; generalmente se presenta a su consideración el croquis a mano alzada del plano interno del ejido, en el que se ubique en su caso la zona parcelada, la identificación de los sujetos de derecho y de los diferentes conflictos existentes entre ejidatarios y colindantes. Esta asamblea no requiere de formalidades especiales. (Véase LA arts. 23 fracc. XV y 26 y 27 y RLA arts. 26 y 27 y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”.)

Asentamiento humano. Es el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

En materia agraria es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido o comunidad; es facultad de la asamblea señalar, delimitar y reservar las áreas necesarias para el asentamiento humano. Estas tierras son inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten al municipio o entidad para dedicarlas a los servicios públicos. Para el ejercicio de estas acciones, la asamblea deberá respetar la normatividad aplicable y los planes correspondientes a nivel federal, estatal y municipal en materia de desarrollo urbano. (Véase LGAH art. 2º, fracc. II; LA arts. 23, fracc. VII, 56 y 63-65 y “Reserva de crecimiento”, “Solares urbanos” y “Zona urbana”.)

Asesoría legal a los sujetos agrarios. Es una de las atribuciones de la PA, que tiene como objeto informar, orientar y aconsejar a los sujetos agrarios respecto de sus derechos en la materia y la manera de ejercitarlos. (Véase, LA art. 136, RIPA art. 5º, fracs. II, VI y VII y “Abogado agrario”, “Procuraduría agraria” y “Representación”.)

Asociación en participación. Es un contrato por el cual una persona concede a otras, que le aportan bienes o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio; no tiene personalidad jurídica ni razón social o denominación. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a

registro. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan, a falta de estipulaciones especiales, por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo. Este tipo de contrato lo pueden formalizar los sujetos agrarios cuando el bien aportado sea una parcela. (Véase LGSM arts. 252-259 y LA arts. 45 y 79 y “Contrato”.)

Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC). Personas morales constituidas por dos o más ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural, que tienen como finalidad la integración de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros para el establecimiento de industrias, aprovechamiento, sistemas de comercialización y, en general, cualquier actividad económica. (Véase LA arts. 108-110 y “Figuras asociativas”.)

Audiencia. En materia agraria se le conoce, comúnmente, como el acto en el que comparecen sujetos agrarios y representantes de los mismos, ante la PA o alguna institución del Sector Agrario en el que plantean, exponen o denuncian problemas o irregularidades relacionadas con sus derechos; generalmente se levanta un acta de comparecencia en la que se hace constar los datos generales del interesado, su planteamiento y la atención al asunto por el servidor público responsable. (Véase RIPA arts. 13 fracc. IX, 20 fracc. I, 30 fracc. VI y 31 y “Sector Agrario”.)

Audiencia arbitral. Acción pública del arbitraje, en la cual se escucha a las partes en conflicto y el árbitro nombrado examina las pruebas presentadas, con el fin de resolver el problema planteado mediante la emisión de un laudo arbitral.

En materia agraria cuando un servidor público de la PA es designado como árbitro, en la audiencia las partes exponen los hechos materia de la controversia, sus pretensiones y aportan las pruebas en que funden su dicho, previo a la emisión del laudo correspondiente. (Véase RIPA arts. 5°, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III y 50 y “Procuraduría Agraria”.)

Audiencia conciliatoria. Reunión en el procedimiento conciliatorio, en que las partes deliberan y, en su caso, realizan concesiones mutuas sobre el conflicto, a efecto de que lleguen a un arreglo, siendo moderadas y exhortadas por el conciliador.

En materia agraria de manera administrativa, la PA efectúa audiencias conciliatorias entre las partes en litigio, para que de ser procedente, sensibilizarlos con el objeto de formalizar un convenio que dirima su controversia; de estimarlo, el

servidor público responsable de la conciliación programa las audiencias conciliatorias que estime necesarias. (Véase LA art. 136, fracc. III y RIPA, 21, fraccs. I-II, 30, fracc. III y 42-45 y “Conciliación” y “Procuraduría Agraria”.)

Audiencia de Ley. Se le conoce con este nombre a la audiencia establecida en el artículo 185 de la ley de la materia dentro del juicio agrario, en la cual las partes expresan oralmente sus pretensiones y ofrecen las pruebas que estimen conducentes a su defensa, presentando, en su caso, a los testigos y peritos; asimismo hacen valer en este acto todas las acciones, excepciones o defensas; en la audiencia el magistrado del tribunal unitario agrario que invariablemente deberá presidirla, podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a los interesados y en cualquier momento del acto, antes de pronunciar el fallo, exhortará a las partes a una amigable composición. (Véase LA art. 185 y “Juicio agrario”.)

Auditorías contables a fondos comunes de ejidos y comunidades. Es el proceso de revisión documental, que tiene por objeto evaluar y brindar una opinión profesional acerca de la administración y aplicación de los fondos comunes ejidales y comunales, que fueron creados al amparo de lo dispuesto por el artículo 164 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En su caso, es un servicio que puede proporcionar la PA de acuerdo con sus atribuciones. (Véase RIPA art. 21, fracc. IX y “Servicios periciales”.)

Avalúo. Operación de tasación o justiprecio (determinación del valor) de bienes, realizada con el objeto de servir de base para su venta y división, o para la liquidación de ciertos impuestos relacionados con el bien. Se genera un documento que contiene el valor determinado en el avalúo.

En la legislación agraria, se establece la emisión de un avalúo en los siguientes casos: previo a la expropiación de tierras ejidales y comunales; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales con fines turísticos, industriales o de cualquier índole no agropecuaria; cuando se realice la primera enajenación de las parcelas sobre las que se hubiese adoptado el dominio pleno; cuando un núcleo agrario acuerde transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles; tratándose de la enajenación de terrenos nacionales destinados a actividades agropecuarias.

En los dos primeros supuestos el avalúo lo debe realizar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN antes CABIN); en los dos siguientes, lo puede formular el referido Instituto o cualquier institución de crédito, y en el último, lo realiza el Comité Técnico de Valuación de la SRA. (Véase LA arts. 75 fracc. IV, 86, 94, y 161 y “Comité técnico de valuación”.)

Avecindado. Mexicano, mayor de edad, que haya residido por un año o más en las tierras del ejido y que haya sido reconocido con ese carácter por la asamblea del núcleo o por el tribunal agrario competente.

Los avecindados tendrán derecho, en su caso, a la asignación de derechos sobre tierras ejidales; a participar en la venta de los derechos correspondientes cuando no exista sucesor del sujeto agrario; a adquirir derechos parcelarios por enajenación; al derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas con dominio pleno, y a ser integrantes de la junta de pobladores.

Los avecindados son considerados sujetos agrarios y por ello les son proporcionados los servicios de la PA. (Véase LA arts. 13, 19, 41, 57 fracc. II, 80, 84 y 135 y RIPA art. 1º y “Sujeto agrario”).

Avenencia. Ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí. Jurídicamente se estima como la voluntad espontánea de cualquiera de las partes en un litigio para ponerle fin.

En materia agraria, dentro de la audiencia de ley, exhortadas las partes por el magistrado del tribunal unitario agrario a una composición amigable, podrán avenirse y dar por terminado el juicio, suscribiendo el convenio respectivo. (Véase LA art. 185, fracc. VI y “Conciliación” y “Amigable composición”).

Aviso de deslinde. Medio para notificar la delimitación de una superficie determinada. En materia agraria, se establece que para los terrenos baldíos la SRA llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias. El responsable de los trabajos formulará aviso de deslinde en el que señalará el lugar en el cual los interesados podrán consultar los planos relativos a los terrenos que se deslindarán. (Véase, LA art. 160 y RLAMOPR art. 108 y “Baldío” y “Terrenos nacionales”).

B

Baldío. En materia agraria un terreno baldío es aquel que no se encuentra inscrito a nombre de persona alguna por título legalmente expedido, ni delimitado o deslindado; se considera propiedad de la nación, por tanto, inembargable e imprescriptible. La SRA está facultada para investigar la existencia de terrenos baldíos, su delimitación y resolución para declararlos nacionales. (Véase LA arts. 157-160 y RLAMOPR arts. 99-101 y 104-110 y “Terrenos baldíos”).

Becario campesino. Campesino joven radicado en su núcleo agrario (generalmente descendiente de sujetos agrarios), con educación básica o técnico espe-

cializado, seleccionado, capacitado y evaluado por la PA en los aspectos de la legislación en la materia y atribuciones de la Institución; a efecto de que difunda dentro de su núcleo estos conocimientos. Durante su instrucción y como apoyo al servicio social que realiza recibe una beca. (Véase “Sistema de capacitación campesina”.)

Beneficiario. Es el campesino integrante de un núcleo o grupo peticionario de tierras que fue favorecido por una resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, por la que adquiere la calidad de ejidatario o comunero. Es el sujeto agrario que disfruta de los bienes ejidales o comunales. (Véase “Comunero”.)

Bienes comunales. Se llama así al conjunto de tierras, bosques y aguas, patrimonio de los núcleos de población que de hecho o por derecho guardan el estado comunal. Este régimen de propiedad se caracteriza porque la titularidad de dichos bienes corresponde a la comunidad; su aprovechamiento es derecho de todos los miembros de manera colectiva, a menos que la propia asamblea decida asignar porciones de terreno en forma individual. (Véase LA art. 99 y “Comunidad”.)

Bienes ejidales. Son las tierras, bosques y aguas concedidas mediante resolución presidencial, sentencia del Tribunal Superior Agrario o mediante la aportación de terrenos para la constitución de nuevos ejidos, con las modalidades y regulaciones que prevé la ley en la materia.

Los bienes ejidales son susceptibles de uso y aprovechamiento de manera individualizada, de acuerdo con la propia resolución o sentencia, o de conformidad a las decisiones tomadas por la asamblea del núcleo. (Véase LA arts. 9 y 23 y 56 y “Terrenos ejidales”.)

Bosques y selvas. En materia agraria se prohíbe la asignación de derechos parcelarios respecto de tierras con esta vocación en la delimitación, destino y asignación de tierras o con motivo de la terminación del régimen ejidal; además de la acción de prescripción de las tierras consideradas como bosques y selvas tropicales. (Véase LA arts. 29, 48 y 59.)

C

Caducidad. Es la conclusión de un procedimiento jurisdiccional sin resolver el fondo del asunto, por inactividad procesal de las partes. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo

de cuatro meses producirá la caducidad. El magistrado del tribunal unitario agrario decreta la caducidad por sí o a petición de parte interesada. (Véase LA art. 190.)

Calificación registral. Acto del registrador, servidor público del RAN, investido de fe pública registral, que consiste en el examen de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de fondo y forma exigidos por la norma que los rige, con el propósito de garantizar el principio de legalidad, a efecto de autorizar o negar la inscripción solicitada. (Véase LA art. 52, RIRAN arts. 37-38 y 55-58 y “Sistema registral”).

Cancelación de inscripción. En el ámbito agrario se presenta cuando se da de baja de los asientos en los folios del RAN los derechos parcelarios como resultado de que el titular haya adquirido el dominio pleno respecto de la parcela inscrita. A partir de la cancelación de la inscripción, las tierras dejan de ser ejidales y quedan sujetas a las disposiciones del derecho común. (Véase LA art. 82 y “Registro Agrario Nacional”).

Cancelación del régimen de explotación colectiva. Es la facultad de la asamblea de los núcleos ejidales, celebrada con formalidades especiales, para determinar la modificación del régimen de explotación colectiva. (Véase LA art. 23 fracc. XIV y “Explotación colectiva”).

Capacidad jurídica. Es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones (capacidad de goce) o la facultad para ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones (capacidad de ejercicio).

En la materia, la capacidad jurídica la tienen los sujetos agrarios que acreditan su personalidad e interés jurídico para ejercitar los derechos establecidos en la normatividad aplicable, así como para efectuar actos jurídicos previstos en dicha normatividad. (Véase LA arts. 12, 13, 16 y 135 y “Sujeto agrario”).

Capital social. (Del latín *capitalis*, de *caput*, *is*, cabeza.) Conjunto de bienes propios de una sociedad. Originalmente se constituye por el valor en dinero o en aportaciones en especie de los accionistas que la forman.

En materia agraria se establece que el capital social de las sociedades mercantiles o civiles, distinguirá acciones serie “T” en caso de ser propietarias de tierras. (Véase LA, art. 126, fracc. III y “Acciones serie T”, “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”).

Carpeta básica. Conjunto de documentos del núcleo inscritos en el RAN, en los que se establece la creación, constitución y reconocimiento de ejidos y comunidades. Está integrada por la resolución presidencial o sentencia de los tribunales agrarios, acta de posesión y deslinde y plano definitivo. Actualmente se le denomina carpeta agraria y se integra con los documentos y planos resultantes de los trabajos del PROCEDE. (Véase LA art. 152 fraccs. I-VI.)

Catastro. Es el inventario técnico-analítico de los predios rústicos ubicados dentro del territorio nacional. El RAN opera el sistema de Catastro Rural Nacional que es un inventario de la propiedad rural en sus diversas modalidades, que tiene por objeto la adecuada identificación de inmuebles, de sus titulares, poseedores o usufructuarios, mediante el archivo de la información a través de los documentos informáticos cartográficos y documentales. (Véase LA art. 148 y RIRAN 98-101 y “Registro Agrario Nacional”.)

Causa de utilidad pública. Es la que directa o indirectamente aprovecha la generalidad de las personas que integran una colectividad, representa un bien común de naturaleza material o social. Es requisito legal de las expropiaciones que realiza el Estado en sus tres niveles de gobierno.

En materia agraria, los bienes ejidales o comunales sólo podrán ser expropiados por alguna de las causas de utilidad pública que son: el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; acciones para la ordenación y conservación de los recursos forestales y pesqueros; explotación del petróleo y sus acciones derivadas; regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; creación, fomento y conservación de unidades de producción de bienes o servicios; construcción de obras que faciliten el transporte, líneas de conducción de energía, obras hidráulicas y otras relacionadas, y las demás previstas en la Ley de Expropiación y otras leyes. (Véase Art. 27 segundo párrafo y LA art. 93 y “Expropiación”.)

Cédula de Notificación. Medio de comunicación procesal. Instrumento que sirve para informar y ordenar a los sujetos que intervienen en un conflicto de intereses.

Por regla general, esta cédula se utiliza, cumpliendo con las formalidades legales para su emisión, para hacer del conocimiento de parte interesada una resolución o acuerdo judicial o administrativo para que acate o cumpla la determinación de la autoridad que la haya pronunciado.

En materia agraria, dentro del juicio si el actuario que hace el emplazamiento no encontrare al demandado en su domicilio, finca o principal asiento de

negocios señalados por el actor, procederá a dejar la cédula para emplazamiento a juicio con la persona de mayor confianza que se encuentre en dicho lugar. (Véase LA art. 172 y “Notificación”.)

Cerril. Se aplica al terreno pedregoso, accidentado y desigual. Superficie de monte en la que puede pastar el ganado. Esta característica de la tierra se equipara al agostadero en terrenos áridos y sirve para fijar el límite de la pequeña propiedad de los predios con esta vocación. (Véase Art. 27, fracc. XV y LA 115-117 y “Agostadero”, “Pequeña propiedad”.)

Certificado de derechos agrarios. Documento expedido por las autoridades agrarias, por medio del cual una persona acredita su calidad de ejidatario y los derechos inherentes a esa categoría.

Actualmente, el certificado de derechos agrarios es sustituido por los certificados de derechos parcelarios o de uso común emitidos por el RAN, como resultado de las determinaciones de la asamblea para delimitar, destinar y asignar las tierras del núcleo generalmente dentro del PROCEDE. (Véase LA art. 16, fracc. I y 56 último párrafo y LFRA art. 69 y “Registro Agrario Nacional”.)

Certificado de derechos sobre tierras de uso común. Documento que acredita el derecho que tiene el ejidatario o comunero a usar y disfrutar de las tierras de uso común del núcleo. Este certificado lo emite el RAN y es decisión de la asamblea determinar el porcentaje que le corresponde a cada uno de sus integrantes; generalmente es en partes iguales, a menos que tome en cuenta las aportaciones financieras o materiales de trabajo del ejidatario o comunero, en cuyo supuesto el porcentaje podrá ser mayor. (Véase LA arts. 16, fracc. II, 23, fracc. X, 56, fracc. III, 57 y 74 y RLA arts. 19-28 y 41-46 y “Tierras de uso común”.)

Certificado de inafectabilidad. Documento expedido a los propietarios de los predios rústicos, como consecuencia del acuerdo dictado por la autoridad agraria competente con base en la legislación anterior, por el que declaraba que un predio agrícola, ganadero o agropecuario era inafectable para resolver las acciones de dotación de tierras, tomando en cuenta la extensión de su propiedad, el fin para el que estaba destinada y la explotación de la misma.

Generalmente se establecía que el certificado de inafectabilidad era requisito de procedencia para que los propietarios promovieran juicio de amparo en contra de las acciones agrarias señaladas. Actualmente al no existir afectación de tierras, el artículo cuarto transitorio de la LA establece que dichos certificados podrán ofrecerse como prueba en los procedimientos previstos por la citada ley

y tendrán validez para efecto de determinar la calidad de las tierras. En las acciones agrarias en trámite (rezago agrario), podrán ser tomados en cuenta por los tribunales agrarios para determinar, en su caso, la afectación de terrenos. (Véase LFRA arts. 249-264 y LA art. 4º transitorio y “Prueba plena”.)

Certificado parcelario. Documento por el que se acredita el derecho que tiene el ejidatario, comunero o posesionario, a usar y disfrutar de una parcela determinada al interior del núcleo. El certificado lo emite el RAN con base en una determinación de la asamblea y en él se especifica el nombre de su titular, la superficie que lo compone y su localización. Con el certificado parcelario se comprueba la calidad de ejidatario o comunero. (Véase LA arts. 16, 56, 78 y 101 y RLA 19-35 y 60-68 y “Tierras parceladas”.)

Cesión de derechos. Es el acto jurídico por virtud del cual una persona llamada cedente transfiere a otra denominada cesionaria los derechos de los que es titular.

En materia agraria, los ejidatarios o comuneros podrán enajenar sus derechos sobre las tierras de uso común y de sus parcelas a sus familiares, a otros ejidatarios o avecindados del propio núcleo. Para la validez de la enajenación bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la inscripción del documento ante el RAN. El cónyuge y los hijos del enajenante podrán ejercitar el derecho del tanto para adquirir la titularidad sobre la parcela o de las tierras de uso común. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA arts. 20, fracc. I, 60, 80 y 101 y “Derecho del tanto”.)

Coadyuvancia de la Procuraduría Agraria. Intervención de un tercero para colaborar en la causa del actor o del demandado.

En materia agraria, tomando en cuenta la naturaleza y funciones de la Procuraduría Agraria, esta Institución coadyuva con los sujetos agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias, realizando funciones de asesoramiento y gestión. Dentro del juicio agrario el tribunal unitario agrario puede solicitar la coadyuvancia de este organismo para que formule por escrito la demanda del actor, o bien elabore la contestación en el caso de que el demandado acuda al procedimiento sin representante legal, en el supuesto de que la presente por comparecencia ante dicho tribunal. (Véase LA art. 136 fracc. I, 170, 178 y 179 y “Abogado agrario”, “Asesoría legal a los sujetos agrarios y “Procuraduría Agraria”.)

Colonias agrícolas y ganaderas. Régimen de propiedad rural establecido por legislaciones anteriores, que tenía como finalidad la colonización de tierras y

su aprovechamiento, mediante la creación de colonias y el incremento de la producción agrícola y ganadera.

Generalmente se expedía un decreto de colonización y con posterioridad los interesados adquirirían los lotes sujetos a este régimen para formar la colonia, la cual contaba con una protección especial respecto de las acciones de dotación de tierras; constituidas como personas morales, cuentan con un órgano de decisión denominado asamblea general y otro de representación, que es el consejo de administración.

Actualmente, la LA dispone que las colonias agrícolas y ganaderas podrán optar por continuar sujetas a este régimen o adquirir el dominio pleno de sus tierras, en cuyo caso se registrarán por la legislación civil en el fuero común; en este último supuesto el RAN expedirá los títulos de propiedad correspondientes que deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad. El RLAMOPR establece las disposiciones aplicables a este tipo de propiedad. (Véase LA art. octavo transitorio y RLAMOPR arts. 134-158 y sexto y séptimo transitorios.)

Colono. Sujeto agrario titular de derechos en colonias agrícolas o ganaderas; dicha calidad se acredita con el título respectivo, constancia del registro como colono emitida por la SRA o el documento que compruebe la adquisición de derechos por cualquier medio legal establecido en el derecho común, sin perjuicio de terceros.

Podrán ser titulares de lotes de colonias los campesinos que hubieren poseído y explotado las tierras de que se trate, de manera pacífica, continua y pública durante un periodo de cinco años si la posesión es de buena fe, o de diez si fuera de mala fe. (Véase RLAMOPR art. 140 y “Sujeto agrario”.)

Comisariado de bienes comunales. Órgano de representación y gestión administrativa de la comunidad, encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea de comuneros. Está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietario y sus respectivos suplentes, electos por la asamblea; en su función duran tres años y no pueden ser reelectos durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio. Su actuación se rige según lo establecido en la LA, su estatuto comunal y, en su caso, los usos y costumbres del núcleo. (Véase LA arts. 21, 32-34, 37-39, 99, fracc. II y 107 y “Estatuto comunal”.)

Comisariado ejidal. Órgano de representación y gestión administrativa del ejido, encargado, entre otras atribuciones, de la ejecución de los acuerdos de la asamblea; actúa como un apoderado general para actos de administración.

Está constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios y sus respectivos suplentes electos por la asamblea; en su función duran tres años

y no pueden ser reelectos durante un lapso igual al que estuvieron en ejercicio; dentro de sus obligaciones se encuentran la de procurar que se respeten los derechos de los ejidatarios, convocar a asamblea y dar cuenta a este órgano supremo del núcleo, de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, además del aprovechamiento de la tierra común. Otras atribuciones y obligaciones se establecen en el reglamento interno del ejido. (Véase LA arts. 21, 32-34, 37-39 y 92 y “Reglamento interno del ejido”).

Comisario. Es la persona u órgano encargado de realizar funciones de vigilancia a las actividades desarrolladas en ciertas clases de sociedades, con independencia de quién ejerce la administración.

En materia agraria, cuando en una sociedad participan socios ajenos al ejido, los ejidatarios tienen el derecho de nombrar al comisario que los represente en defensa de sus intereses, de lo contrario, será nombrado por el Procurador Agrario. (Véase LA arts. 75, fracc. V.)

Comisión auxiliar. Dentro de los trabajos del PROCEDE la asamblea podrá determinar su constitución, con el número de personas que estime necesarias, así como la designación de un presidente y su respectivo suplente, para que coordine los trabajos de dicha comisión.

Las funciones generales de esta comisión son:

- Atender las recomendaciones de la asamblea para los trabajos de reconocimiento de derechos y medición de los terrenos del núcleo;
- Organizar y verificar los trabajos de medición;
- Informar a la asamblea del núcleo sobre los avances de los trabajos;
- Mantener coordinación con los representantes de la PA, durante el desarrollo de sus actividades. (Véase RLA art. 26 y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”).

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Organismo público descentralizado de carácter técnico y social, sectorizado actualmente de la Secretaría de Desarrollo Social, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

La CORETT tiene como objetivo principal la regularización de la tenencia de la tierra, en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en ejidos y comunidades; adquirir y enajenar reservas territoriales para el desarrollo urbano, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, estatales y municipales y promover, en su caso, las expropiaciones correspondientes para la desincorporación del patrimonio de los núcleos, a efecto de ordenar dichos

asentamientos, con la expedición del título o escritura correspondiente. (Véase LA art. 93 fracc. V y Estatuto Orgánico de CORETT arts. 1 y 3 y “Expropiación”).

Comisión vecinal. Grupo de ejidatarios y avecindados hasta un límite de diez, que a propuesta de la PA se constituyen para coadyuvar en los procedimientos para la delimitación y destino de las tierras para el asentamiento humano y la asignación y titulación de derechos sobre solares urbanos.

La referida comisión vecinal, generalmente dentro del PROCEDE, coadyuva en los trabajos de orientación a los legítimos poseedores de solares; en la realización de los trabajos de medición y en la integración de la documentación para acreditar la posesión de los inmuebles.

Cuando exista junta de pobladores, ésta deberá designar a los avecindados que formarán parte de la comisión, y en caso contrario, una reunión vecinal podrá elegirlos; los ejidatarios por su parte nombrarán a quienes de sus integrantes formarán parte de este grupo de trabajo. En el supuesto de que no existieren avecindados la comisión auxiliar desarrollará las actividades señaladas. (Véase RLA arts. 54-56 y “Solares urbanos”).

Comités operativos estatales del PROCEDE. Instancia creada por convenio celebrado entre las instituciones del Sector Agrario, el INEGI y el Gobierno del Estado correspondiente, que tiene como objetivo planear y coordinar los trabajos y acciones dentro del Programa en la entidad. Órgano de decisión en el ámbito estatal, que de manera colegiada establece los criterios necesarios para cumplir las metas establecidas en la certificación de las tierras de ejidos y comunidades.

Son representantes ante el referido Comité, los delegados de la PA, RAN e INEGI, así como los representantes de la SRA y del Gobierno del Estado.

Comité Operativo Nacional del PROCEDE. Órgano colegiado interinstitucional, conformado por RAN, PA e INEGI, creado para emitir circulares, reglas generales y criterios para el desarrollo y conclusión del Programa; emite lineamientos generales a los integrantes de los comités operativos estatales y dentro de sus actividades destacan las determinaciones que toma respecto de la viabilidad para incorporar núcleos o suspender los trabajos en los mismos, atendiendo la problemática jurídica, técnica o de conflicto social.

Las instituciones participantes son representadas por las direcciones generales de Apoyo al Ordenamiento de la Propiedad Rural de la PA, de Titulación y Control Documental del RAN y de Registro Nacional de Información Geográfica del INEGI, contando con un Secretario Técnico que es el Director General de Catastro del RAN.

Comité Permanente de Control y Seguimiento. Instancia creada en la PA, que tiene por objeto la interlocución y participación de las organizaciones campesinas, para el análisis de temas agrarios trascendentes, el análisis y seguimiento de asuntos específicos planteados ante dicha instancia.

Las actividades de este Comité se realizan a través de una unidad administrativa denominada Secretaría Técnica del Comité Permanente de Control y Seguimiento. En las delegaciones de este organismo, se establecen Comités Estatales de Control y Seguimiento en los que participan las organizaciones campesinas de la entidad y son atendidas por los servidores públicos de la Delegación de la PA correspondiente.

Está integrado en cada una de las entidades federativas por el mayor número posible de las organizaciones campesinas con presencia en el estado. (Véase RIPA arts. 11 fracc. XVII y 34-35.)

Comité Técnico de Valuación. Instancia técnica de la SRA, responsable de la emisión de avalúos de terrenos nacionales con fines agropecuarios, de excedentes de tierras ejidales y de lotes de colonias. Está integrado por cinco peritos en la materia, que son designados por el titular de dicha Secretaría, quien emite los lineamientos para el funcionamiento de este Comité, así como las normas generales conforme a las cuales se realizarán las valuaciones. (Véase LA art. 161, RLAMOPR arts. 163-167 y “Avalúo”, “Colonias” y “Terrenos nacionales”).)

Competencia. (Del latín *competentia*, a *competens*, *entis*, relación, proposición, apto y competente.) Idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Conjunto de facultades o atribuciones legales con que está investido un órgano jurisdiccional para conocer y resolver los asuntos que le plantean.

En materia agraria, de conformidad con el Artículo 27 constitucional, se dispone la creación de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, competentes para la administración de la justicia en esta materia, dichos tribunales denominados Superior y Unitarios Agrarios, en términos de su Ley Orgánica, son los que cuentan con facultades y atribuciones para conocer y resolver las controversias de derechos establecidos en la normatividad agraria. (Véase Art. 27, fracc. IX y 19, LA 163-169 y LOTA arts. 1, 9 y 18 y “Tribunal Superior Agrario” y “Tribunales Unitarios Agrarios”).)

Compromiso arbitral. Acuerdo de voluntades entre las partes en litigio por el que se obligan a someter su controversia a la decisión de un tercero, fijando las reglas procedimentales que se deben observar.

En materia agraria, generalmente, este compromiso se formaliza cuando los sujetos agrarios con intereses controvertidos, de común acuerdo solicitan a la PA que dirima el conflicto a través del arbitraje; con el documento correspondiente firmado por las partes en el que se fijan las cuestiones objeto del laudo, esa Institución designa al servidor público que funja como arbitro. (Véase RIPA arts. 5 fracc. V, 13, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III y 46-52.)

Comunero. Titular de derechos en una comunidad agraria legalmente reconocida, establecidos en la LA y el estatuto comunal; esta calidad le permite, en su caso, el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común. (Véase LA arts. 101-102 y “Bienes comunales”.)

Comunidad. En sentido amplio es el conjunto de personas que viven en el medio rural y comparten tradiciones, usos y costumbres; está conformada por el conjunto de tierras, bosques y aguas. Por regla general en el ámbito agrario, la comunidad y sus bienes fueron reconocidos con base en la legislación anterior mediante acciones restitutorias, confirmatorias o de titulación de sus tierras.

La comunidad cuenta constitucionalmente con un reconocimiento a su personalidad jurídica y una protección especial de sus bienes y recursos; los terrenos comunales son inalienables, imprescriptibles e inembargables, excepto que se aporten para la constitución de sociedades civiles o mercantiles. La comunidad, mediante acuerdo de asamblea podrá cambiar al régimen ejidal. (Véase LA arts. 99 y 100 y “Bienes comunales”, “Tierras comunales” y “Tierras de grupos indígenas”.)

Comunidad indígena. Grupo indígena ocupante de un territorio común, cuyos miembros participan de una forma colectiva de vida y de un sistema propio de relaciones sociales directas. Este concepto relaciona dos términos cuya definición está orientada más al ámbito sociológico que al del derecho agrario y designa a un grupo humano que se ha conservado históricamente como tal, reproduciendo sus condiciones étnicas, lingüísticas, de organización social y política, sus costumbres, usos y tradiciones que le pertenecen de manera común; también el concepto define al vínculo que este grupo mantiene con la tierra que posee de manera colectiva desde tiempo inmemorial. (Véase c Art. 2º y Art. 27, fracc. VII segundo párrafo, y “Tierras de grupos indígenas”.)

Concesión. Es al acto administrativo a través del cual la administración pública federal o estatal otorga a los particulares, en términos de la normatividad

aplicable, el derecho para explotar un bien propiedad del Estado o un servicio público.

Concesión de agua. Título que otorga la Comisión Nacional del Agua conforme a su competencia, para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, a las personas físicas o morales de carácter público y privado. (Véase LAN art. 3 fracc. XIII.)

Concesión en zona federal. Es el permiso o autorización otorgado por la autoridad competente que le otorga a una persona el derecho de uso, aprovechamiento o explotación de terrenos considerados como zona federal patrimonio de la nación, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes aplicables y en términos de títulos de la concesión, permiso o autorización correspondiente. Al beneficiario con dicha autorización se le conoce como concesionario. (Véase Art. 27, párrafo sexto y C Art. 32; LGBN arts. 16-19 y 72-77 bis y LGEEPA arts. 22, 29-30.)

Conciliación. Acuerdo o avenencia de partes, por las que mediante renuncia, allanamiento o transacción resuelven un litigio o evitan un eventual conflicto.

Conciliación agraria. Procedimiento por el que los sujetos agrarios en conflicto de común acuerdo, dirimen su controversia. La conciliación constituye la vía administrativa preferente para resolver los litigios sobre derechos agrarios que le son planteados a la PA.

En juicio agrario, dentro de cualquier fase del procedimiento y en todo caso antes de emitir sentencia, el Tribunal Unitario Agrario exhortará a las partes a la conciliación y, de lograrse su avenencia, se dará por terminado el procedimiento y se suscribirá el convenio respectivo, el cual, aprobado por dicho tribunal, tendrá el carácter de sentencia. (Véase LA art. 136, fracc. III y RIPA arts. 13, fracc. VIII, 21, fracc. II, 30 fracc. III y 41 y “Amigable composición”, “Acta de audiencia conciliatoria”.)

Concubina o concubinario. Respectivamente, es la mujer o el hombre, solteros, que cohabitan de manera habitual y permanente en concubinato; a su vez, es el acuerdo mediante el cual un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio, deciden hacer vida conyugal. Es un hecho lícito que produce efectos jurídicos a partir de los cinco años.

En materia agraria se establece el derecho de sucesión de la concubina o del concubinario, dentro del orden de preferencia, cuando el titular de los derechos

no haya hecho designación de sucesores. (Véase LA arts. 17-18, fracc. II, y CCF art. 1368, fracc. V y “Derecho de preferencia” y “Derecho del tanto”).)

Consejo de administración de las sociedades rurales. Órgano de dirección de este tipo de sociedades, nombrado por la asamblea de la persona moral; se constituye por un presidente, un secretario, un tesorero y los vocales previstos en los estatutos, propietarios y sus respectivos suplentes, que permanecen en sus funciones tres años. El consejo tiene la representación de la sociedad rural ante terceros y las funciones que los propios estatutos le confieren. (Véase LA art. 109, párrafo tercero.)

Consejo de vigilancia. Órgano del ejido o de la comunidad encargado de vigilar que los actos del comisariado ejidal o de bienes comunales, se ajusten a la legislación aplicable y cumpla con los acuerdos de asamblea. Dentro de sus funciones están revisar las cuentas y operaciones que realice el comisariado y, en su caso, denunciar ante la asamblea las irregularidades detectadas, así como convocar a asamblea cuando no lo realice el comisariado. Está constituido por un presidente y dos secretarios y sus respectivos suplentes; son electos por la asamblea y ejercen su función por tres años. Al igual que el comisariado, sus miembros pueden ser removidos por acuerdo de la asamblea, en términos de la normatividad aplicable. (Véase LA arts. 21, 24, 31, 35-40 y “Remoción de órganos ejidales y comunales”).)

Consejo de vigilancia de las sociedades rurales. Órgano encargado de la vigilancia de las sociedades rurales conforme a los estatutos de la sociedad, nombrado por la asamblea de la persona moral; lo integra un presidente, un secretario y un vocal propietarios y sus respectivos suplentes, que ejercen en sus funciones tres años. (Véase LA arts. 109, párrafo cuarto.)

Consejo técnico estatal. Es el órgano interno constituido en las delegaciones de la PA, en el cual se definen, orientan y evalúan los programas de trabajo de las delegaciones. Su funcionamiento es de carácter obligatorio.

En el referido consejo participan: el delegado quien lo preside, los subdelegados, los jefes de departamento, los jefes de residencia y en su caso los visitadores y abogados agrarios. Cuando los temas a tratar así lo requieren, se podrá invitar a otros servidores públicos de la propia institución, o de otras dependencias y entidades del Sector Agrario.

Constitución de ejido. En términos de la LA, un grupo de 20 o más individuos tienen derecho a crear un ejido, con personalidad jurídica y patrimonio propio;

para ello es necesario que aporten tierras para su constitución, que elaboren un proyecto de reglamento interno del ejido y que tanto dicha aportación como el citado reglamento consten en escritura pública, solicitando su inscripción en el RAN. (Véase LA arts. 9-10 y 90-92 y “Ejido”, “Fedatario público”).

Contestación de demanda. Acto por el cual el demandado en juicio, responde a las pretensiones solicitadas por el actor, ya sea negándolas, confirmándolas u oponiendo excepciones.

En materia agraria instaurado el juicio, el demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia de ley, pudiendo hacerlo por escrito o mediante comparecencia, en cuyo caso el tribunal solicitará el auxilio de la PA para que la formule por escrito.

En el supuesto de que el demandado al contestar la demanda o en la audiencia de ley confiese expresamente la demanda en todas sus partes y dicha confesión sea verosímil, apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, se pronunciará sentencia de inmediato; en caso de negarla o reconvenirla al momento de la contestación, el procedimiento continuará su trámite. (Véase LA art. 178, 180 y 182 y CFPC art. 329 y “Prueba Plena”, “Reconvención”).

Contradicción de tesis de los tribunales agrarios. Constituye la existencia, sustentación y, en su caso, la aplicación de criterios contrapuestos en sentencias emitidas por los tribunales unitarios agrarios. La PA, a través del Procurador, podrá hacer del conocimiento del Pleno del Tribunal Superior Agrario la contradicción existente, a fin de que resuelva qué tesis debe prevalecer. (Véase LOTA art. 9º, fracc. V, párrafo tercero y RIPA art. 11, fracc. X y “Procuraduría Agraria”).

Contrato. (Del latín *contractus*, derivado del verbo *contrahere*, reunión, lograr, concertar.) Es un acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas y que produce consecuencias jurídicas; convenio o acuerdo para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones y derechos.

En materia agraria los núcleos de población ejidal y comunal y los ejidatarios o comuneros, podrán celebrar contratos que impliquen el uso de tierras, de uso común o parceladas, según sea el caso, por un tercero; en el supuesto de integrantes de núcleos en lo particular, que celebren este tipo de contratos, no requerirán autorización de la asamblea, cuando se encuentren sus tierras formalmente parceladas. (Véase LA arts. 23, fracc. V, 45 y 79 y CCF arts. 1792-1793.)

Contrato de arrendamiento. Acuerdo de voluntades mediante el cual el ejidatario concede el uso o goce temporal de su parcela a un tercero, a cambio de

una retribución periódica; en caso de tierras de uso común, el contrato debe ser autorizado por la asamblea del núcleo y su vigencia deberá ser acorde al proyecto productivo que se pretenda desarrollar, sin que en ningún caso el instrumento estipule un aprovechamiento para el arrendatario mayor a 30 años. (Véase LA arts. 45 y 79 y “Arrendamiento”.)

Convenio conciliatorio agrario. Es el documento que contiene el acuerdo de voluntades, que resuelve una controversia; instrumento que concluye el procedimiento conciliatorio en vía administrativa. El referido documento deberá contener como mínimo: a) la manifestación de las partes en el sentido de que en la suscripción del convenio no hubo error, dolo ni mala fe y que, por tanto, habrán de cumplirlo en todos sus términos y b) asentar en el convenio la necesaria ratificación por la asamblea del núcleo, para el caso de que se pudieran afectar derechos colectivos.

Suscrito el convenio conciliatorio se promoverá su ratificación ante el tribunal unitario que corresponda y su inscripción en el RAN. (Véase LA arts. 136 fracc. III y RIPA 5º fracc. IV, 21 fracc. II y 44 y “Acta de audiencia conciliatoria” y “Conciliación”.)

Conversión de régimen en propiedad social. Facultad de las asambleas celebradas con formalidades especiales en ejidos y comunidades en las que se adopta el cambio de régimen de ejidal a comunal o viceversa; en ambos casos, la decisión de la asamblea surtirá efectos legales a partir de la inscripción del acta correspondiente en el RAN.

En el supuesto de los ejidos convertidos a comunidad, la asignación parcelaria que se hubiere efectuado será reconocida como legítima; cuando los inconformes con esta determinación formen un número mínimo de 20, podrán mantener el régimen ejidal con las tierras que en su caso les correspondan.

Igualmente, cuando los comuneros inconformes con la conversión al régimen ejidal sean 20 o más, podrán continuar como comunidad con las tierras que en su caso les correspondan. (Véase LA arts. 23, fracc. XIII, 24-28, 103 y 104.)

Convocatoria a asamblea de núcleo agrario. Documento mediante el cual el comisariado ejidal, consejo de vigilancia o PA cita formalmente a los ejidatarios o comuneros, con el fin de que concurran a la celebración de la asamblea ejidal o comunal, para tratar los asuntos señalados en dicho documento y el lugar y fecha de la reunión; el comisariado ejidal será responsable de la permanencia de las convocatorias en los lugares más visibles del núcleo hasta el día en que se verifique la asamblea.

La convocatoria a asamblea podrá ser solicitada por al menos veinte ejidatarios o 20% del total de los que integran el núcleo; si el comisariado o consejo no emitieren la convocatoria requerida en un plazo de cinco días, los citados sujetos agrarios podrán solicitar a la PA que convoque a la reunión.

En asamblea de formalidades simples, la convocatoria deberá expedirse con no menos de ocho ni más de quince días anteriores a la celebración de la asamblea. Para asambleas de formalidades especiales, en primera convocatoria, deberá emitirse por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la reunión.

La segunda convocatoria se lanza de inmediato, por cualquiera de los órganos del ejido o la PA según sea el caso, cuando el día señalado para la asamblea en primera convocatoria no se cumplió la mayoría de asistencia requeridas para su validez, programando la verificación de la reunión en un plazo no mayor a ocho días para asambleas con formalidades simples o de treinta para la de formalidades especiales.

La LA prevé la emisión de una ulterior (tercera, cuarta, etc.), cuando por causas de fuerza mayor, iniciada la asamblea en segunda convocatoria, no sea posible culminar la sesión y se tenga que citar de nueva cuenta. (Véase LA arts. 24-26, 28 y 107 y “Asamblea”, “Acta de asamblea”).

Cónyuge en materia agraria. Es la persona que unida en matrimonio con un sujeto de derechos agrarios, tiene derecho de prelación en la sucesión del ejidatario, comunero o posesionario, para el caso que no haya elaborado y depositado la lista respectiva; así como al derecho del tanto, en el caso de la enajenación de sus derechos como integrante del núcleo de población ejidal o comunal. (Véase LA arts. 17, 18 y 80 y “Derecho del tanto”, “Derecho de prelación”).

Copropiedad. En el derecho civil, derecho real por virtud del cual una cosa o derecho pertenece *proindiviso* a varias personas.

Esta figura se aplica de manera supletoria cuando la asamblea asigna una parcela a un grupo de ejidatarios que gozan de los derechos sobre la misma en partes iguales, salvo que los coderechos determinen una forma de participación diferente; quienes además precisarán el ejercicio de sus derechos, o bien según lo disponga el reglamento interno del núcleo. (Véase LA art. 62 y CCF art. 938 y “Reglamento interno del ejido”).

Cosa juzgada. Se entiende como tal la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias o resoluciones firmes. Cuestión que ha sido resuelta en juicio por sentencia de los tribunales judiciales o administrativos. De acuerdo con el CFFC

hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria por ministerio de ley o declaración judicial.

La cosa juzgada en materia de amparo es una causal de improcedencia. (Véase LDA art. 73 fracc. XIII y CFPC arts. 354-356 y “Sobreseimiento”).

Costumbre. Es la observancia en un grupo social de ciertas conductas que, sin incluirse en la legislación, las considera obligatorias, por su repetición constante se deben cumplir y la convicción de la colectividad; las conductas son obligatorias.

En las comunidades indígenas, la C protege sus usos y costumbres respecto de la elección de sus autoridades, formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural y sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos dentro de la propia comunidad; siempre y cuando no sean contrarios a la Carta Magna y leyes reglamentarias.

En los juicios agrarios en que se involucren tierras de los grupos indígenas, para su resolución, los tribunales agrarios deberán considerar las costumbres y usos de la comunidad indígena, mientras no contravenga lo dispuesto por la LA ni se afecten derechos de terceros. (Véase C Art. 2º y LA art. 164 y “Comunidad indígena”, “Tierras de grupos indígenas”).

D

Daño en propiedad ajena. En materia penal, se establece como el atentado contra el patrimonio, consistente en la destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero.

Deber jurídico. (Del latín *debere*, a su vez de *habere*, tener que, ser necesario, tener la obligación, deber.) Indica el comportamiento al que un individuo está obligado, de conformidad con una regla o precepto; se entiende como lo correcto, lo bueno, lo justo, lo lícito.

Decreto. (Del latín *decernere*, *decevi*, *decretum*.) En general, acuerdo o resolución, decisión o determinación del Ejecutivo Federal, de un gobierno estatal o de un tribunal. En el ámbito administrativo, es la expresión jurídica de la voluntad del Poder Ejecutivo, mediante resoluciones en el ejercicio de sus atribuciones, sobre alguna especie particular de sus actividades públicas.

Decreto expropiatorio. Acto del Poder Ejecutivo por el cual, impone atendiendo al interés público, a los particulares la cesión de su propiedad para realizar obras a favor de la colectividad o de beneficio social.

En materia agraria, los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las causas de utilidad pública establecidas en la LA; el procedimiento deberá tramitarse ante la SRA y previo a la emisión del decreto correspondiente, se deberá cubrir la indemnización a los núcleos o a sus integrantes afectados. (Véase LA arts. 93-97 y RLAMOPR arts. 76-79 y “Causa de utilidad pública”, “Expropiación” e “Indemnización”).)

Delegación de facultades. Es el acto jurídico por el cual un órgano administrativo transmite parte de sus poderes o facultades a otra unidad administrativa. La LOAPF establece en el artículo 16 que los titulares de las secretarías de estado pueden delegar facultades en sus subordinados, siempre y cuando se determine el cargo del servidor público en que se delegarán la totalidad o una parte de sus atribuciones.

Según lo previsto por el artículo 12 del RIPA, el Procurador Agrario podrá delegar algunas de las facultades precisadas en el artículo 11 de dicho ordenamiento a sus subalternos y, para tal efecto, emitirá el acuerdo correspondiente que deberá ser publicado en el DOF. (Véase LOAPF arts. 14-16 y RIPA art. 12.)

Delegación de la Procuraduría Agraria. Unidad administrativa de la PA establecida en las entidades federativas de la República, con domicilio en la capital del Estado, creada por determinación del Procurador Agrario.

Las delegaciones ejercen dentro del ámbito territorial del Estado las atribuciones señaladas en el RIPA y es la representante de la Institución en la entidad federativa correspondiente. Está a cargo de un delegado, auxiliado por subdelegados, residentes, jefes de departamento, visitadores, abogados agrarios y demás personal que se requiera. (Véase LA art. 144 fracc. IV y RIPA arts. 29-30 y “Residencia”).)

Demanda. Acto procesal por el cual una persona se constituye en parte actora o demandante, expresando la causa y su fundamento ante el órgano jurisdiccional, con el cual inicia el proceso y solicita una sentencia favorable a sus pretensiones. También se conoce como demanda al escrito que contiene lo precisado anteriormente.

En juicio agrario el actor puede presentar su demanda por escrito o por comparecencia; en este último caso, el tribunal unitario agrario solicitará la coadyuvancia de la PA, para que formule la demanda por escrito; el tribunal del conocimiento analizará la demanda y si hubiere irregularidades o no cumple con los requisitos previstos legalmente prevendrá al promovente para que lo subsane, en el término de ocho días. (Véase LA arts. 170, 178, 180-182, 185, fracc. I y “Juicio agrario”).)

Demandado. Persona contra la cual se endereza una demanda judicial, exigiéndole alguna cosa o prestación determinada.

En materia agraria, el demandado debe contestar la demanda a más tardar el día de la audiencia y podrá reconvenir o contrademandar las pretensiones del actor; en este caso, se notificará a este último para que en un término no mayor a diez días conteste dicha reconvencción. (Véase LA arts. 170, 178, 180, 182-185, fraccs. I y V y “Contestación de demanda”, “Reconvencción”.)

Demasías. En derecho civil es aquella superficie que excede el terreno amparado por el título de propiedad; en este ámbito, el propietario del inmueble puede realizar una denuncia de las demasías ante el registro público de la propiedad correspondiente o en vía de jurisdicción voluntaria, a efecto de regularizar las referidas excedencias.

En la legislación anterior, los terrenos propiedad de la nación en materia agraria, se dividían en baldíos, nacionales y demasías, estas últimas de acuerdo con la definición anterior, eran susceptibles de afectación en las acciones de dotación de tierras al no haber salido del dominio de la nación por título legalmente expedido.

En la LA vigente, el término demasías se equipara al excedente del límite de la pequeña propiedad de personas físicas o morales o de aquel a que tiene derecho un ejidatario o comunero. (Véase LFRA art. 204 y LA art. 115-124 y “Denuncia de excedentes”.)

Denuncia. (Del latín *denuntiare*, hacer saber, remitir un mensaje.) Acto por el cual una persona hace del conocimiento de un órgano de autoridad, la verificación o comisión de determinados hechos, con el objeto de que dicho órgano aplique las consecuencias jurídicas o sanciones previstas en la normatividad como consecuencia de los actos denunciados.

La PA tiene facultades para denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias, para hacer respetar los derechos de los sujetos agrarios; así como denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos agrarios y los hechos que puedan ser constitutivos de delitos, infracciones o faltas administrativas en materia agraria. (Véase LA art. 136, fraccs. IV, VI, VIII y X y RIPA arts. 5º, fracc. X y 20, fraccs. II, III, V y X.)

Denuncia de excedentes. Acto por medio del cual se hace del conocimiento de la SRA o PA que una persona física o moral posee una superficie mayor de tierras a la permitida legalmente; este acto inicia el procedimiento correspondiente para determinar y, en su caso, enajenar los terrenos excedentes de las personas físicas

o morales. (Véase LA arts. 132-133 y 136, fracc. VIII y RLAMOPR arts. 43-58 y “Demasías”.)

Derecho agrario. Conjunto de normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia de carácter social tendentes a regular las diversas formas de propiedad y de tenencia de la tierra en el medio rural, así como las actividades que se vinculan con la explotación y aprovechamiento agrícola, ganadero o forestal; esta disciplina surge de manera formal a partir de 1915 y su orientación social se establece en el Artículo 27 constitucional del año de 1917.

Actualmente, el derecho agrario tiene su fundamento en el referido Artículo constitucional, modificado en el año de 1992, y en la LA, los reglamentos que la norman y diferentes legislaciones relacionadas (ecológica, de aguas, forestal, de asentamientos humanos, entre otras).

Derechos colectivos. Son facultades que se ejercitan en mancomún por los integrantes de una persona moral. En materia agraria, los derechos colectivos pueden ser los que tiene un ejido o comunidad respecto de sus tierras y a través de la asamblea determina y regula el aprovechamiento de esos bienes. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA art. 23 y “Bienes ejidales”, “Bienes comunales” y “Tierras de uso común”.)

Derechos ejidales. En términos generales, son las facultades con que cuenta el ejido o los ejidatarios, el primero en relación con las tierras de uso común del núcleo y otras que no han sido asignadas de manera individual y el segundo respecto de su parcela o parcelas. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA arts. 9º, 10 y 14.)

Derecho de preferencia. Es la primacía que confiere la ley o la voluntad de las partes, a una persona o a un derecho, real o personal, en relación con otros. En materia agraria, tendrán derecho de preferencia, en este orden, cuando el ejidatario o comunero no haya hecho designación de sucesores, su cónyuge, concubina o concubinario, uno de sus hijos, uno de sus ascendientes o cualquier persona que dependa económicamente de él.

Asimismo, en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras, tendrán derecho de preferencia respecto de las tierras de uso común los posesionarios reconocidos, ejidatarios y vecindados, hijos de ejidatarios y vecindados que hayan trabajado las tierras por más de dos años y otros individuos a juicio de la propia asamblea. (Véase LA arts. 18 y 57 y “Vecindados”, “Cónyuge” y “Concubina o concubinario”.)

Derecho del tanto. Facultad que tiene una persona para adquirir determinados derechos con preferencia a otra en igualdad de condiciones; en caso de incumplimiento de los requisitos de ley el contrato puede ser anulado.

En materia agraria, tendrán el derecho del tanto, en caso de cesión de derechos parcelarios el cónyuge o los hijos del ejidatario o comunero enajenante; el ejercicio de este derecho se deberá efectuar en un término de 30 días naturales contados a partir de la notificación.

Igualmente, tendrán el derecho del tanto en la primera enajenación de parcelas, sobre las que se hubiera adoptado el dominio pleno, los familiares del vendedor, las personas que hayan trabajado la parcela por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población en ese orden; dicho derecho lo deberán ejercitar también en un término de 30 días naturales. (Véase LA arts. 80 y 84 y “Cónyuge”, “Avecindado”).)

Desahogo de pruebas. Actividad judicial para apreciar el grado de convencimiento del juzgador respecto de la veracidad de los hechos objeto de prueba, determinando el valor que deben tener los medios probatorios en el procedimiento.

En el juicio agrario, el desahogo de pruebas se efectúa dentro de la audiencia de ley y serán admisibles toda clase de ellas mientras no sean contrarias a la normatividad; el tribunal agrario podrá acordar en todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de los puntos cuestionados. Dentro del procedimiento, las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. (Véase LA arts. 184-187 y “Prueba”).)

Desarrollo rural sustentable. Mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas, en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos, de acuerdo con las disposiciones aplicables; asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales. (Véase LDRS art. 3, fracc. XIV.)

Deslinde. Señalar y distinguir a través de trabajos técnicos de campo una superficie determinada. Poner los límites o linderos a un lugar.

En materia agraria se establece esta acción para deslindar la superficie necesaria o para el establecimiento de parcelas con destino específico, la zona de urbanización y los terrenos baldíos y nacionales. (Véase LA arts. 66, 70 y 160 y RLAOPR art. 108 y “Zona de urbanización”, “Terrenos Baldíos” y “Terrenos nacionales”).)

Desposesión. (Del latín *possessio-onis*.) Fin de la relación de posesión del sujeto con el objeto material o con un derecho. Puede producirse por acto voluntario del titular, o contra de su voluntad; en este último caso puede ser por un acto lícito y pacífico o por uno delictivo, violento o fraudulento denominado despojo.

En materia agraria la denuncia presentada ante el ministerio público por el delito de despojo interrumpe los plazos señalados para que opere la prescripción de terrenos ejidales. (Véase LA art. 48 y “Prescripción”.)

Diario Oficial de la Federación. Publicación del Poder Ejecutivo Federal, a través de la cual se difunden leyes, decretos, circulares y demás disposiciones emitidas por los tres poderes de la Unión, con el objeto de darlos a conocer a fin de que sean observados y aplicados debidamente. Orgánica y administrativamente la unidad administrativa responsable de esta actividad depende de la Secretaría de Gobernación.

En el DOF se publican en términos de la LA los acuerdos respectivos para la terminación del régimen ejidal, los decretos expropiatorios sobre bienes ejidales y comunales y las resoluciones de la SRA respecto de la titulación de terrenos nacionales; además se difunden en este medio las resoluciones dictadas por los tribunales agrarios. (Véase C art. 89, fracc. I y LOAPF art. 27, fraccs. II-III y LA arts. 29, 94 y 160.)

Dictamen. Opinión y juicio de un perito en cualquier ciencia o artes acerca de una cuestión de su especialidad, a requerimiento de parte interesada o de una autoridad.

En materia agraria la PA emite dictamen previo a la terminación del régimen ejidal en el que determina que ya no existen las condiciones para su permanencia; asimismo, formula opinión o dictamen del proyecto de desarrollo y de escritura social de aportación de tierras de uso común, propiedad de ejidos y comunidades a sociedades mercantiles o civiles. (Véase LA art. 23, fracc. XII, 75 fracc. II y 100 y “Aportación de tierras”, “Terminación del régimen ejidal”.)

Dictamen de improcedencia. Acuerdo que dentro del procedimiento de queja emite la PA mediante el cual califica el planteamiento presentado cuando el asunto de que se trate no se relacione con violaciones a leyes agrarias; el referido acuerdo o dictamen debe notificarse de manera oportuna al quejoso en forma oficial. (Véase RIPA arts. 57 y 58 y “Queja”.)

Dictamen pericial. Es el informe que rinde un perito o experto en cualquier profesión o actividad, en el que da a conocer sus puntos de vista o resultados

respecto del examen o análisis que haya hecho de una cuestión sometida a sus conocimientos.

Dentro del juicio agrario se concederá el tiempo necesario cuando se requiera que un perito emita el dictamen correspondiente. (Véase LA art. 194 y “Servicios periciales”).)

Diferir. Dilatar, retardar o suspender la ejecución de un acto determinado a fin de realizarlo posteriormente. En los procedimientos jurisdiccionales el juez del conocimiento determina el diferimiento de los actos procesales cuando así lo permite la normatividad o de manera discrecional por la naturaleza del asunto o la complejidad para el desahogo de las pruebas.

En juicio agrario, es procedente se difiera la audiencia de ley cuando fuere necesario esperar a alguna persona a quien se hubiere llamado al procedimiento o para conceder tiempo a los peritos que hayan de emitir dictamen, o por cualquier otra circunstancia que así lo exija a juicio del magistrado del tribunal agrario. (Véase LA art. 194.)

Diligencia de deslinde. Estudio técnico y topográfico de un terreno rústico que la SRA realiza por sí o mediante terceros, en presencia de sus propietarios, poseedores, colindantes o afectados por el deslinde, a fin de resolver si el terreno es o no nacional. (Véase LA art. 160 y “Deslinde”, “Terrenos nacionales”).)

Diligencias precautorias. Aquellos actos que emite el juez con el objeto de proteger los intereses de una o ambas partes dentro de un juicio. Son diligencias previas a la iniciación del proceso; ejemplo: embargo precautorio.

En el juicio agrario, los tribunales competentes proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger los derechos de los interesados que se dirimen dentro del procedimiento. (Véase LA art. 166 y “suspensión”).)

División de ejidos. Acción por virtud de la cual se segregan parte de los bienes ejidales concedidos a un núcleo para conformar otro u otros ejidos, conservando ambos su naturaleza como propiedad social respecto de sus tierras, debiendo quedar integrados con no menos de 20 ejidatarios; en la legislación anterior el procedimiento concluía cubiertos los requisitos establecidos con la emisión de la resolución presidencial correspondiente.

Actualmente, la asamblea de un núcleo ejidal, de acuerdo con las formalidades y requisitos previstos en la LA, está facultada para dividir sus tierras en dos o más partes. Estas partes pueden ser agregadas a otro u otros ejidos constituidos o bien pasar a constituir nuevos. (Véase LFRA arts. 109, 110, 339- 342 y LA art. 23, fracc. XI.)

Dotación de tierras y aguas. Acciones previstas en la legislación anterior que tenían por finalidad otorgar a los grupos solicitantes de tierras, bosques y aguas suficientes para constituir ejidos e irrigar las tierras de riego concedidas, a través de la correspondiente resolución presidencial.

En la legislación agraria vigente se resuelve este procedimiento por el Tribunal Superior Agrario en los asuntos considerados de rezago agrario. (Véase DRA 27, art. 3º transitorio, LFRA arts. 195-240, 272-279 y 286-324 y LA 3º transitorio y “Acciones agrarias”, “Resoluciones presidenciales en materia agraria”).)

E

Ejecución de sentencia. (Del verbo *exsequor*, significa cumplimiento, ejecución o administración.) En términos legales se entiende por ejecución el cumplimiento o satisfacción de una obligación, cualquiera que sea la fuente de que proceda, ya sea contractual, legal o judicial.

En materia agraria, los tribunales están obligados a proveer la inmediata ejecución de sus sentencias; para tal efecto, podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio. (Véase LA art. 191 y “Cosa juzgada”, “Sentencia”).)

Ejido. Tiene dos connotaciones, en la primera es considerado como el núcleo de población o persona moral con personalidad jurídica y patrimonio propios; la segunda, se refiere a las tierras sujetas a un régimen especial de propiedad social en la tenencia de la tierra; constitucionalmente se reconoce dicha personalidad y se protege de manera especial su patrimonio. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 9-10 y “Bienes ejidales”, “Tierras ejidales”).)

Ejido colectivo. Conformado por un grupo de individuos titulares de derechos agrarios que explotan sus tierras en forma conjunta; la legislación anterior, a partir de 1984, determinaba que en la propia resolución presidencial dotatoria se precisara que la explotación en los ejidos creados fuera preferentemente colectiva, atendiendo principalmente, la imposibilidad de entregar unidades mínimas de dotación de manera individual y para un mejor aprovechamiento de los terrenos.

Actualmente, la ley de la materia faculta a la asamblea del núcleo para resolver la instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. (Véase LFRA arts. 130 y 131 y LA arts. 11 y 23, fracc. XIV y “Cancelación del régimen de explotación colectiva”).)

Elección de órganos de representación y vigilancia. (Del latín *electio-onis*.)

La acción y efecto de elegir a través del voto a personas que habrán de ocupar un cargo o representación.

En materia agraria la asamblea está facultada para elegir a los miembros titulares y suplentes del comisariado ejidal, de bienes comunales y del consejo de vigilancia. El voto de los integrantes de los núcleos será secreto y el escrutinio público e inmediato. (Véase LA arts. 23 fracc. III y 37 y “Comisariado de bienes comunales”, “Comisariado ejidal”, “Consejo de vigilancia” y “Convocatoria a asamblea de núcleo agrario”.)

Emplazamiento a juicio. Constituye una forma especial de notificación que se hace al demandado llamándolo a juicio. Acto formal por virtud del cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de la demanda entablada en su contra por el actor y el acuerdo del juez de admitirla.

En juicio agrario se emplaza al demandado mediante notificación personal efectuada por el secretario o actuario del tribunal agrario, en el lugar que señale el actor o, en su caso, por edictos. El emplazamiento debe contener como mínimo, el nombre del actor, sus pretensiones, la causa de la demanda y la fecha y hora para la celebración de la audiencia; generalmente se le hará la prevención al demandado a que conteste a más tardar durante la audiencia de ley. (Véase LA arts. 170, 171 y 173 y “Contestación de demanda” “Demanda” y “Demandado”.)

Emplazamiento por edictos en juicio agrario. Notificación que realiza el tribunal competente al demandado en un juicio agrario cuando se desconoce su domicilio legal, a través de dos publicaciones en uno de los diarios de mayor circulación de la región en que esté ubicado el inmueble relacionado con el procedimiento y en el Periódico Oficial del Estado en que se encuentra localizado el bien. Por esta vía se le comunica la síntesis de la demanda en su contra y del emplazamiento. (Véase LA art. 173.)

Enajenación de derechos agrarios. (Véase “Cesión de derechos”.)

Escritura pública. (Del latín *scriptura*.) Es el documento público otorgado en presencia de un notario o fedatario público; la normatividad establece los actos que se deben realizar en escritura pública.

La LA establece que para la constitución de ejidos, la aportación de tierras para este fin y el reglamento interno del núcleo deberán constar en escritura pública. (Véase LA art. 90.)

Escrito de agravios. (Véase “Agravio”.)

Escrutinio. (Véase “Elección de órganos de representación y vigilancia”.)

Estatuto comunal. Ordenamiento que tiene por objeto regular la organización, explotación y aprovechamiento de los recursos de la comunidad; así como los derechos y obligaciones de sus integrantes. Para su elaboración, deberán tomarse en cuenta las tradiciones, usos y costumbres del núcleo comunal, siempre y cuando no contravengan la normatividad agraria. (Véase LA arts. 10, 99, 101 y 107 y “Costumbre”, “Reglamento interno del ejido”.)

Estatuto del Servicio Profesional Agrario. Documento normativo que establece las normas para la organización, operación y desarrollo del servicio profesional en la PA; determina los derechos y obligaciones de sus integrantes; es aplicable desde los niveles de visitadores y abogados agrarios hasta los de delegados y directores generales; su objetivo es formar servidores públicos capacitados permanentemente y su ascenso dentro del servicio con base en el mérito, experiencia y capacidad. (Véase *Estatuto del Servicio Profesional Agrario*.)

Excitativa de justicia. Institución del proceso contencioso administrativo que tiene por objeto la promoción que efectúan las partes en un procedimiento ante el órgano de mayor jerarquía, a fin de que requiera al magistrado que conoce del asunto, para que formule el proyecto o emita la resolución o sentencia correspondiente, cuando no lo ha efectuado dentro de los plazos establecidos por los ordenamientos respectivos.

En materia agraria esta acción tiene por objeto que el Tribunal Superior Agrario ordene, a pedimento de parte legítima, que los magistrados cumplan con las obligaciones procesales en los plazos y términos que marca la normatividad, sea para dictar sentencia o formular proyecto de la misma, o para la substanciación oportuna del procedimiento del juicio agrario. (Véase RITA arts. 21-24 y “Ejecución de sentencia”.)

Explotación colectiva. Es la que emplean los ejidatarios o comuneros que trabajan en forma conjunta los terrenos del núcleo; en esta figura no existe un parcelamiento de las tierras de cultivo; se distribuyen las faenas agrícolas entre sus integrantes y las utilidades obtenidas se dividen proporcionalmente al trabajo aportado personalmente. (Véase LA art. 11 y “Ejido colectivo”.)

Expropiación. Es el acto por el cual se priva a una persona de su propiedad y supone por lo mismo una determinación de autoridad con poder para esa priva-

ción. La expropiación de las tierras y aguas se fundamenta en el Art. 27, el cual establece que la propiedad de éstas corresponde originariamente a la nación, por lo que tiene la facultad de imponer las modalidades que dicte el interés público. (Véase LA arts. 93-97 y “Causa de utilidad pública”, “decreto expropiatorio”).

F

Facultad. Aptitud o potestad de una persona para modificar su situación jurídica o de otro. En derecho agrario, es el poder o la capacidad del sujeto agrario para ejercer los derechos establecidos en la legislación de la materia. (Véase “Sujeto agrario”).

Fedatario público. Persona que por disposición de la ley está facultada para realizar una función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es verdad oficial; su intervención otorga certeza jurídica al contenido de documentos o a los actos en los que interviene. La fe pública puede ser judicial, mercantil, registral y notarial.

En la LA se establece la intervención del fedatario público en los siguientes casos: formalización de la lista de sucesión cuando no se deposita ante el RAN; en las asambleas de formalidades especiales; cuando se otorga en garantía el usufructo de las tierras de uso común o parceladas; asignación de parcelas que lleve a cabo la asamblea por sorteo; en la primera enajenación sobre parcelas en las que se haya adoptado el dominio pleno; en el sorteo para determinar la preferencia del derecho del tanto con posturas iguales respecto de la primera enajenación con parcelas de dominio pleno; en la creación de ejidos y en la constitución de sociedades rurales.

El fedatario público está obligado a dar aviso al RAN cuando autorice actos relativos a la creación de ejidos y de la adquisición y enajenación de tierras por sociedades mercantiles o civiles. En la participación del fedatario público en asambleas de formalidades especiales, se entenderá además de notario público, el que ejerza dicha función en la localidad, de conformidad con la legislación aplicable.

Para el ejercicio de sus funciones, el Director en Jefe del RAN habilitará servidores públicos del citado Registro, como depositarios de la fe pública registral. (Véase LA arts. 17, 23 fraccs. VII a XIV, 28, 31, 46, 58, 84, 85, 90, 108 y 156; RLA art. 6º y RIRAN art. 38 y “Prueba Plena”).

Fianza. Obligación que tiene una persona de pagar al acreedor si el deudor no cumple; contrato gratuito u oneroso, por el cual el fiador se obliga con tal carácter.

En materia agraria, el vencido en juicio podrá proponer fianza de institución autorizada o persona arraigada en el lugar, para garantizar la obligación que se le impone; por su parte el tribunal deberá calificar la fianza o garantía según su arbitrio y si la acepta podrá conceder un término de 15 días para el cumplimiento. Si transcurrido el plazo no se hubiere cumplido, se hará efectiva la referida fianza. (Véase LA art. 191 y “Diligencias precautorias”, “Suspensión”.)

Fideicomiso. Contrato por el cual una persona física o moral transfiere la propiedad sobre parte de sus bienes, a una institución fiduciaria, para que con ellos se realice un fin lícito, que la propia persona señala en el contrato respectivo. Son partes en este contrato, el fideicomitente titular de los bienes y derechos aportados al fideicomiso; el fiduciario institución de crédito que administra dichos bienes y derechos, y el fideicomisario que es quien recibe el beneficio.

El fideicomiso público, nueva categoría jurídica del derecho administrativo, puede ser constituido por disposición de ley o por actos del Ejecutivo Federal en la esfera de sus atribuciones; generalmente se destina un patrimonio público autónomo al financiamiento de proyectos, programas y actividades que beneficien a la colectividad o se apoyen acciones de fomento económico.

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Fideicomiso público auxiliar del Ejecutivo Federal, sectorizado en la SRA que cuenta con autonomía financiera. Dentro de sus objetivos destacan: captar, promover y entregar los fondos comunes de los núcleos agrarios; verificar el cumplimiento de la causa de utilidad pública en los decretos expropiatorios de tierras ejidales y comunales y, en su caso, ejercitar la acción de reversión; financiar la constitución de sociedades mercantiles inmobiliarias, en terrenos de propiedad social, con fines urbanos, turísticos e industriales, con el propósito de coadyuvar en el desarrollo socioeconómico de los núcleos y sus integrantes, y promover y financiar los proyectos productivos de grupos de mujeres y jóvenes campesinos. (Véase LA arts. 94 y 97, *Contrato Constitutivo del FIFONAFE y sus modificaciones* y “Reversión”.)

Figuras asociativas. Las tierras ejidales y comunales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado por el núcleo o sus integrantes, según se trate de tierras de uso común o parceladas; para un mejor aprovechamiento y beneficio se podrán constituir figuras asociativas en las diversas modalidades que la ley prevé.

Asimismo, las figuras asociativas son las asociaciones y sociedades integradas por sujetos agrarios, sus familiares y campesinos en general, con el objeto de realizar actividades productivas para mejorar su nivel de vida, conformando

el patrimonio de estas figuras, aportaciones y financiamientos, en su caso, del gobierno en sus tres niveles y de los sectores social y privado. (Véase LA arts. 45, 108-113, 125-131 y “Asociaciones rurales de interés colectivo”, “Sociedades civiles” y “Sociedades mercantiles”).)

Financiar. Aportación de los recursos económicos necesarios para la creación de una empresa, el desarrollo de un proyecto productivo, el objetivo de una figura asociativa o el desarrollo de una operación comercial. Puede ser con recursos propios o externos, con fondos de créditos bancarios, empréstitos, crédito de proveedores, etcétera.

Financiera Rural. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, supervisado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido conforme a su Ley Orgánica, el 1º de julio de 2003.

Dicho organismo tiene como atribución principal el otorgamiento de créditos primordialmente a los sujetos agrarios, mediante financiamiento y garantías, operaciones de factoraje y manejo de inversiones y valores; también está facultada para brindar capacitación y asesoría en materia de proyectos productivos. (Véase LOFR arts. 1-2.)

Fondos comunes de ejidos y comunidades. La legislación anterior determinaba que en cada ejido o comunidad se constituiría un fondo común con los recursos provenientes de la explotación de sus bienes, de prestaciones derivadas de contratos, de indemnizaciones por expropiación, de cuotas acordadas por la asamblea para obras; por venta o arrendamiento de solares y en general cualquier ingreso que no correspondiera a los ejidatarios en particular. Dicho fondo se destinaría prioritariamente para la realización de obras en beneficio de la colectividad y adquisición de bienes y servicios para fomentar la productividad del núcleo y sus recursos debían ser depositados en el FIFONAFE.

La LA no recoge en sus términos esta figura y sólo hace alusión a ella cuando la asamblea así lo disponga con un fin determinado o el propio reglamento interno o estatuto comunal lo determinen. En este supuesto, la PA podrá proporcionar el servicio de auditoría, relativas a la captación, administración y aplicación de los referidos fondos, a petición expresa de cualquiera de sus órganos. (Véase LFRA arts. 164-166; LA art. 11 y RIPA art. 21 fracc. IX y “Auditorías contables a fondos comunes de ejidos y comunidades”, “Servicios periciales”).)

Fondos de garantía. Reserva económica establecida por los ejidatarios o comuneros para cubrir las obligaciones crediticias que contraiga el núcleo; se crea y organiza de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La asamblea del ejido o comunidad tiene facultades para determinar la aplicación de recursos económicos, y por ello deberá ser este órgano el que en su caso establezca la constitución de dichos fondos. (Véase LA arts. 23 fracc. IV, 51 y 107 y “Garantía”.)

Formalidades esenciales del procedimiento. Son los principios fundamentales del procedimiento judicial, necesarios para que las partes tengan la posibilidad real de lograr una decisión justa de la controversia planteada; por lo mismo, son un aspecto fundamental de defensa procesal. Es una garantía individual establecida en la C por la que a nadie se le puede privar de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio ante los tribunales establecidos en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas previamente. (Véase C art. 14 y LA Título X “De la justicia agraria”.)

Formato Único de Trámite (FUT). Documento interno de la PA por el cual se registran los asuntos planteados por los sujetos agrarios. Con el FUT se establece el control y seguimiento ordenado y sistemático de todos los casos en los que interviene dicha Institución. (Véase “Sistema Único de Información”.)

Fundo legal. Porción de suelo destinada para la fundación y edificación de un poblado. En la actualidad se regula por la normatividad agraria, así como por disposiciones de carácter federal o estatal, relativas a asentamientos humanos.

En la LA constituye parte de las tierras del asentamiento humano y está especialmente protegido, siendo inalienable, imprescriptible e inembargable. Es atribución de la PA la protección y vigilancia del fundo legal. Ésta también se llevará a cabo por las autoridades federales, estatales y municipales. (Véase LA arts. 63-64 y “Asentamiento humano”.)

Fusión de ejidos. Facultad de la asamblea del núcleo de formalidades especiales, para que dos o más ejidos se integren total o parcialmente conformando un nuevo ejido.

En la derogada LFRA la fusión se determinaba mediante resolución presidencial, siempre y cuando fuera benéfica económicamente para ambos núcleos, como resultado de la realización de estudios técnicos y económicos. (Véase LFRA arts. 111 y 339-342; LA art. 23 fracc. XI.)

G

Garantía. Es un contrato para asegurar el cumplimiento de una obligación, ya sea por tercera persona (garantía personal) o mediante una cosa (garantía real).

La LA concede a los núcleos agrarios o a sus integrantes, la facultad de otorgar en garantía el usufructo de tierras de uso común o de parcelas, sólo en favor de instituciones de crédito o de aquellas personas con las que tengan relaciones de asociación o comerciales. Esta garantía deberá constituirse ante fedatario público e inscribirse en el RAN. Cabe mencionar que en caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor podrá hacer efectiva la garantía, mediante resolución del tribunal unitario agrario. (Véase LA art. 46 y “Fondo de garantía”.)

Gestión administrativa de la Procuraduría Agraria. Para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios y su ejercicio, es la actividad realizada por la Institución que tiene como finalidad la atención de los diversos asuntos planteados por sus asistidos, que estén en trámite o deban resolver autoridades o instancias administrativas.

Para proporcionar este servicio, se recaba información, orienta al promoviente y finalmente se requiere a la instancia competente para que, en su caso, determine lo procedente respecto de la petición del interesado. (Véase LA art. 136 fracc. IX y RIPA ART. 4º y “Procuraduría Agraria”.)

Grupo comunal o subcomunidad. Anexos o grupos que perteneciendo formalmente a una comunidad debidamente reconocida, ocupan una porción territorial determinada, con una administración independiente, en razón de las condiciones que guardan las tierras del núcleo original.

La LA establece que para su administración, la asamblea de la comunidad puede establecer la existencia de grupos comunales o subcomunidades, que cuenten con órganos de representación y gestión administrativa, así como sus regímenes de organización interna y, en su caso, adoptar formas organizativas sin perjuicio de las facultades establecidas de sus órganos de representación y vigilancia. (Véase LA art. 105.)

Grupo étnico. (Véase “Comunidad indígena”.)

H

Hectárea. Medida equivalente a cien áreas o a diez mil metros cuadrados; en materia agraria, los terrenos son delimitados con base en esta unidad de medida,

tomando en cuenta las extensiones de la propiedad privada y social en el medio rural.

Herencia. (*Del latín Hereditas-tatis, heredero o bien.*) Se refiere a la masa o conjunto de bienes que en su caso pueden ser transmitidos a una persona por muerte del titular.

De esta figura jurídica propiamente del derecho civil, algunas de sus reglas se han incorporado a la materia agraria en la sucesión de derechos ejidales o comunales, aplicando supletoriamente el derecho común federal. (Véase LA arts. 17-18 y “Aplicación supletoria”).)

Heredero. Persona que por testamento o por ley adquiere a título universal en todo o en parte una herencia.

En materia agraria al heredero se le conoce comúnmente como sucesor, aun y cuando la disposición relativa contempla como derecho del ejidatario la elaboración de una “lista de herederos” y se refiere con este carácter a las personas que tienen derecho de preferencia en el supuesto de que el titular no hubiere efectuado la designación correspondiente. (Véase LA arts. 17 y 18 y “Derecho de preferencia”).)

I

Impedimento y excusa. En términos generales, es la prohibición legal para que un juez o magistrado conozca de determinado asunto y con motivo de ello se debe excusar para tramitarlo.

En el ámbito de la administración de la justicia agraria, se presenta cuando los magistrados y secretarios de acuerdos están impedidos para conocer de los asuntos, por las causas establecidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en estos supuestos, los referidos funcionarios deben excusarse inmediatamente, expresando el fundamento de su decisión.

Cuando el magistrado o secretario no se excuse debiendo hacerlo, cualquiera de las partes puede acudir en queja ante el Tribunal Superior Agrario.

Por otra parte, los referidos funcionarios de los tribunales agrarios, con excepción de los de carácter docente, están impedidos para desempeñar otro cargo, empleo público o en carácter de particulares en el ejercicio de su profesión, salvo en causa propia. (Véase LOPJF art. 146, LOTA 27- 29 y RITA arts. 66-68.)

Inactividad procesal. (Véase “Caducidad”).)

Incidente. (Del latín *incidere*, sobrevivir, interrumpir, producirse.) Procesalmente, los incidentes son procedimientos que, resueltos, dirimen controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal.

En el juicio agrario, las cuestiones incidentales que se susciten ante los tribunales agrarios, se resolverán conjuntamente con lo principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso decidir las antes, o que se refieran a la ejecución de la sentencia; en ningún caso se formará artículo de previo y especial pronunciamiento, sino que se decidirán de plano. (Véase LA art. 192.)

Inconformidad. En términos gramaticales es estar no conforme u oponerse a un acto o hecho. En la LA, es el derecho que tienen los integrantes de los ejidos y comunidades, respecto de los acuerdos emitidos en asamblea, quienes podrán firmar bajo protesta haciendo constar dicha inconformidad.

De igual forma en conversión del régimen de tierras ejidales a comunales y viceversa, si el grupo inconforme con estas decisiones lo integra un número mayor de 20 sujetos, podrá continuar en el régimen original.

Por otra parte, en materia de terrenos baldíos y nacionales, dentro de los trabajos de deslinde que realiza la SRA, se levantará acta de las diligencias en las que los propietarios, poseedores, colindantes e interesados harán constar en su caso, su inconformidad con las referidas diligencias.

Finalmente, en la ejecución de sentencias por los tribunales agrarios, en caso de inconformidad por la parte que obtuvo sentencia favorable con la ejecución, presentará al actuario los alegatos correspondientes, mismos que se asentarán en el acta circunstanciada levantada dentro de este procedimiento. (Véase LA art. 31, 103, 104, 160 y 191 y “Conversión de régimen en propiedad social”, “Deslinde” y “Ejecución de sentencia”).

Incorporación de tierras al régimen ejidal. Gramaticalmente incorporar es unir dos o más cosas para formar un todo, es sinónimo de anexas.

En la legislación agraria anterior se determinaba que cuando el núcleo adquiriera terrenos con recursos propios, créditos o por cualquier medio legal, podría por acuerdo de asamblea solicitar su incorporación al régimen ejidal, siguiendo el procedimiento establecido para la acción de ampliación de ejido, por lo que dicha incorporación culminaba con la resolución presidencial correspondiente.

En la LA no se precisa y reglamenta el ejercicio de esta acción, aun y cuando se determina que son propiedad del ejido las tierras dotadas o las que hubieren adquirido por cualquier otro título; por lo que de una interpretación integral y tomando en cuenta las atribuciones de la asamblea, se advierte que es su facultad incorporar terrenos al patrimonio del ejido que hubiere adquirido, cumpliendo

con los requisitos establecidos en lo que fuera aplicable para la constitución de ejidos. (Véase LFRA art. 241 LA arts. 9, 43 y 92 y “Constitución de ejido”).

Indemnización por afectación agraria. En términos de la legislación anterior es el derecho que tenía el propietario a recibir un pago por sus terrenos afectados, con motivo de una resolución presidencial dotatoria de tierras. Este derecho debía ejercitarse dentro del término de un año contado a partir de la publicación del fallo presidencial en el DOF.

Con motivo de la reforma al Art. 27 del año de 1992, se derogó la fracción correspondiente al darse por concluido el reparto agrario; por lo que sólo en los asuntos de rezago agrario podrían, en su caso, los propietarios afectados por la sentencia del Tribunal Superior Agrario solicitar esta indemnización. (Véase Art. 27 fracc. XIV derogada, LFRA art. 219 y LA 3º Transitorio.)

Indemnización por expropiación en ejidos y comunidades. Pago o contraprestación que se efectúa a los núcleos por la expropiación de sus bienes ejidales o comunales. La LA determina que dichos bienes podrán ser expropiados por causas de utilidad pública y mediante indemnización, establecidas en el decreto presidencial correspondiente. El monto de la indemnización será determinado por el INDABIN (antes CABIN), atendiendo su valor comercial. En el caso de la regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural como causa de utilidad pública, la indemnización se fijará atendiendo a la cantidad que se cobrará a los poseedores por la regularización.

Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización de preferencia en el FIFONAFE, o en su defecto, mediante garantía suficiente.

Cuando se trate de tierras de uso común la indemnización se cubrirá a nombre del núcleo. Si existiere duda sobre el porcentaje que corresponda a cada ejidatario, la PA intentará la conciliación de intereses, y si ello no fuera posible, se acudiría ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva en definitiva. Si la expropiación sólo afecta parcelas asignadas en lo individual, sus titulares recibirán la indemnización correspondiente. (Véase Art. 27, segundo párrafo y LA arts. 93-97 y “Avalúo”, “Decreto expropiatorio” y “Expropiación”).

Indivisibilidad. Aquellos bienes u obligaciones que no pueden ser divididos; esta calidad puede establecerse por disposición de la ley, por acuerdo de voluntades o por disposición testamentaria.

La LA en materia de sucesiones establece que el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos inherentes a dicha calidad,

elaborando la lista de sucesión correspondiente en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia, para lo cual al momento de su fallecimiento, únicamente podrán transmitirse esos derechos y tal carácter a una sola persona, sin que se considere la posibilidad de su división, ya que los derechos que tiene el sujeto agrario son indivisibles.

Refuerza lo anterior el hecho de que cuando el ejidatario no haya designado sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista correspondiente pueda heredar, los derechos se transmitirán a uno de los familiares en el orden de preferencia establecido.

Respecto a la cesión de derechos de parcelas, ha sido criterio institucional limitar su división, ya que se considera de una interpretación integral de la LA, que los derechos sobre la parcela son indivisibles, además de que permitir su fraccionamiento fomenta su pulverización, no garantiza el sustento de la familia y es económicamente inviable. (Véase LA art. 16 fracc. II, 17, 18, 78 y 80.)

Industrias rurales. La LFRA establecía un capítulo relativo al fomento de dichas industrias en el rubro de organización económica del ejido; en dicho capítulo principalmente se señalaban los apoyos y subsidios otorgados por las diversas dependencias competentes; asimismo, se preveía la posibilidad de que los ejidatarios pudieran asociarse con particulares para la explotación de recursos que no pudieran destinarse a las actividades agrícolas y ganaderas.

La LA permite la creación de sociedades rurales por los sujetos agrarios, personas morales que en su caso, pueden contemplar a las que anteriormente fueron denominadas industrias rurales; asimismo, la referida ley contiene un título de desarrollo y fomento agropecuarios, que en términos generales precisa la actuación de la Administración Pública Federal en la promoción y fomento de las actividades productivas; finalmente, este ordenamiento, con base en la Constitución, permite la creación de sociedades civiles y mercantiles con la aportación de tierras de ejidos y comunidades. (Véase Art. 27 fracc. VII, LFRA arts. 178-186 y LA arts. 4-8, 75, 100, 108-111 y 125-133 y “Figuras asociativas”.)

Información y sensibilización al ejido dentro del PROCEDE. (Véase “Asamblea de información y anuencia”.)

Inhibitoria. Solicitud fundada y motivada, que se formula a un juez para que acepte conocer un litigio y se dirija a otro o a cualquier autoridad judicial ante quien se encuentre en trámite un juicio, señalándole que dicho asunto no es de su competencia y por tanto, debe abstenerse de continuar conociéndolo y remita lo actuado a una autoridad superior, a efecto de que determine el órgano competente.

En materia agraria, cuando el tribunal se percate en cualquier fase del procedimiento, que el asunto no es de su competencia por corresponder a otro tribunal en virtud de la materia, grado y territorio, suspenderá el procedimiento y remitirá el expediente al competente; lo actuado por el tribunal incompetente será nulo, salvo cuando la causa sea por razón de territorio.

Cuando el tribunal recibiere inhibitoria de otro que promueva su competencia y considere que debe seguir conociendo del asunto, lo comunicará al tribunal promovente y remitirá el expediente al Tribunal Superior Agrario, para que decida la competencia. (Véase LA arts. 168 y 169 y LOTA art. 9º fracc. IV.)

Inmediatez. Característica del juicio agrario que se refiere a la comunicación directa entre las partes, sus representantes legales y los tribunales agrarios (Magistrado, encargado o secretarios). (Véase LA art. 185 y “Audiencia de ley”).

Inscripción registral. Genéricamente es toda anotación, inscripción o asiento que se realiza de los documentos o títulos sujetos a registro; para el registro debe acreditarse la causa jurídica, el acto o contrato contenido en el documento. Dicha inscripción puede practicarse a través de diversos sistemas fundamentales: el de transcripción en los libros de registro; el de archivo del registro y el de la anotación o extracto del folio de que se trate, en el libro correspondiente.

En materia agraria, de toda asamblea ejidal o comunal que se realice deberá levantarse el acta correspondiente, la que una vez cubiertas las formalidades que la LA prevé deberá inscribirse; de igual forma, serán inscritos los certificados que se otorguen como resultado de los trabajos del PROCEDE; la escritura de constitución de un ejido; las resoluciones por las que se incorporen tierras al régimen ejidal serán inscritas en el RAN y los títulos de propiedad cuando se adopte el dominio pleno de tierras ejidales, deberán inscribirse en el RPP. Las inscripciones que obren en el RAN y las constancias que él expida, hacen prueba plena dentro y fuera de juicio, salvo prueba en contrario. (Véase LA arts. 31, 56, 69, 82, 90, 92 y 150 y “Prueba plena”, “Registro Agrario Nacional”).

Inspección judicial. Examen o comprobación directa que realiza el juez o tribunal, respecto a hechos o circunstancias de un juicio, debiendo consignarse tal hecho en autos, para dar fe de su existencia, así como de personas, cosas o lugares que deban ser analizados a petición de parte interesada. Es la observación de algo o alguien, así como la descripción que se hace de lo observado.

En el juicio agrario, cualquiera que sea el estado de trámite del asunto, el tribunal unitario agrario podrá acordar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, incluida la inspección judicial, siempre que

sea conducente para conocer la verdad, respecto de la controversia puesta a su consideración. (Véase LA art. 186 y “Prueba”).)

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como propósito proporcionar el servicio de información, estadística y geográfica de manera eficiente, oportuna y confiable, para satisfacer las necesidades de los usuarios del sector público, social y privado.

El INEGI define, en materia de informática, las acciones de las dependencias gubernamentales relacionadas con actividades estadísticas y geográficas; presenta y difunde dicha información.

Respecto a las acciones dentro del PROCEDE, el INEGI identifica, ubica y mide los linderos y superficies de las tierras de los núcleos ejidales y comunales bajo las normas técnicas emitidas por el RAN. Es, en consecuencia, el ejecutor de los trabajos técnico-operativos del Programa, en apoyo a dicho Registro. Además, participa en actividades relacionadas en el procedimiento de denuncia de excedencias en tierras ejidales o pequeña propiedad. (Véase LA art. 149 y LOAPF art. 31 fracc. XIX y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”).)

Interés jurídico. Conjunto de expectativas o derechos tutelados por la norma jurídica. En materia procesal, es la pretensión que se tiene para acudir a los tribunales y hacer valer un derecho sustantivo que será materia del litigio.

En el juicio agrario por regla general, cuentan con interés jurídico el actor, que tiene el ánimo y convencimiento de hacer valer un derecho ante el tribunal agrario, para prevenir un daño o perjuicio o para corregir y cesar los efectos con motivo de un acto contrario a sus intereses; así como el demandado que cuenta con el mismo interés por haber sido beneficiado con los actos o documentos que se impugnan en el procedimiento. Es requisito esencial del procedimiento acreditar el interés jurídico de quienes participen en el juicio. (Véase LA arts. 170 y 178 y “Formalidades esenciales del procedimiento”).)

J

Jornalero agrícola. Es la persona que percibe un salario, por su fuerza de trabajo, en una actividad propia del campo, dentro de un proceso productivo. En la mayoría de los casos, el salario otorgado es por día y se denomina jornal.

En materia laboral no se distingue entre el trabajador del campo o la ciudad, ya que la connotación jurídica ha quedado inserta en el concepto de salario. Al

respecto, el artículo 279 de la Ley Federal del Trabajo, determina las actividades desarrolladas por los jornaleros agrícolas, bajo el rubro de trabajos especiales.

En materia agraria, la LA y el RIPA, consideran al jornalero agrícola como sujeto agrario, cuando este cuenta con derechos establecidos en la referida ley; en este supuesto la PA proporciona los servicios respectivos, con independencia del apoyo de representación legal que en su caso le pudieran proporcionar las procuradurías de la Defensa del Trabajo en los diversos Estados y los programas de la Secretaría de Desarrollo Social. (Véase LA art. 135 y RIPA art. 1º.)

Juicio. (Del latín *iudicium*, acto de decir o mostrar el derecho.) En forma genérica, se entiende como sinónimo de proceso o procedimiento; este último a través de una secuencia ordenada de actos por los cuales se realiza el juicio, que culmina con la emisión de una sentencia o resolución. (Véase “Sentencia”.)

Juicio agrario. Procedimiento jurisdiccional resuelto por tribunal administrativo que tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de las disposiciones de la LA; generalmente por esta vía son resueltos los conflictos que se presentan entre los sujetos agrarios o con terceros.

En los juicios agrarios los tribunales competentes se sujetarán al procedimiento previsto por la LA y quedará constancia por escrito. Las características de este juicio serán la oralidad, inmediatez, economía procesal e igualdad formal entre las partes.

Los tribunales suplirán la deficiencia de los planteamientos de derecho, cuando se trate de núcleos de población ejidales o comunales así como ejidatarios o comuneros y considerarán las costumbres y usos cuando se trate de tierras de grupos indígenas. (Véase LA 163-164, 178-190 y LOTA art. 18 y “Competencia”, “Audiencia de ley”, “Suplencia de la queja”, “Tierras de grupos indígenas” y “tribunales agrarios”.)

Juicio de amparo. Tiene por objeto resolver las controversias que se presenten por actos de autoridad que violen las garantías individuales; por leyes o actos de autoridad federal, que restrinja la soberanía de los estados o por leyes o actos de autoridad local que invada la esfera de competencia de la autoridad federal. Es el recurso extraordinario, por virtud del cual se podrán impugnar los procedimientos judiciales o administrativos, por violaciones realizadas por cualquier autoridad, siempre que se traduzcan en una afectación actual, personal y directa de los derechos de una persona en lo individual o colectiva. En general, el juicio de amparo deberá promoverse por escrito.

Se contempla como el medio de control de constitucionalidad, ejercitado por órganos jurisdiccionales, en vía de acción, que tiende a proteger al quejoso o agraviado, en los casos señalados previstos en la C siendo procedente cuando se hayan agotado todas las instancias o recursos ordinarios previstos en la ley aplicable. Son partes en este juicio: el agraviado(s), la autoridad(es) responsable(s) y el tercero perjudicado.

En materia agraria, está referido a las demandas de amparo en que se reclaman actos de autoridad que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o posesión y disfrute de las tierras, aguas pastos y montes a los ejidos y a los núcleos de población, que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros.

La LA determina que se podrá promover el juicio de amparo contra sentencias definitivas de los tribunales unitarios agrarios o del Tribunal Superior Agrario, ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Tratándose de otros actos de los tribunales unitarios, que por su naturaleza proceda el amparo, conocerá el juez de distrito que corresponda.

Podrán promover el amparo: el comisariado ejidal o de bienes comunales, alguno de sus integrantes o cualquier ejidatario o comunero del núcleo perjudicado, si después de transcurrido el término de 15 días de la notificación del acto reclamado, el comisariado no interpuso la demanda de amparo; en este supuesto lo podrá presentar cualquier integrante del núcleo en representación sustituta. La demanda podrá interponerse en cualquier tiempo, contra actos que tengan por efecto privar total o parcialmente de las tierras o disfrute de sus derechos a los ejidos o comunidades.

En el juicio de garantías en materia agraria, deberá suplirse la deficiencia de la queja, cuando el quejoso o tercero perjudicado sean: los ejidos, comunidades o sus integrantes. (Véase C arts. 103 y 107; LA art. 200, párrafo segundo y LDA arts. 114, 158, 212-233 y “Suplencia de la queja”.)

Junta de pobladores. Órgano de participación integrado por los ejidatarios y vecindados del núcleo de población. Su finalidad es hacer propuestas sobre cuestiones relativas al poblado, los servicios públicos, los trabajos comunitarios en la zona de urbanización y, en general, sobre los asuntos referentes a las tierras del asentamiento humano.

Constituida, deberá informar conjuntamente con el comisariado ejidal a las autoridades municipales sobre el estado que guarden las escuelas, mercados, hospitales o clínicas; sobre problemas de vivienda y sanidad, entre otros, con el propósito de plantear las necesidades de los vecindados del poblado, para mejorar, entre otros, aspectos de vivienda y sanidad. Dentro de la junta se podrán

conformar las comisiones que se estimen necesarias, de acuerdo con el reglamento respectivo. (Véase LA arts. 41-42 y “Asentamiento humano”, “Reserva de crecimiento” y “Zona urbana”).)

Jurisdicción. (Proviene del latín *jurisdictio-onis*, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner en ejecución las leyes.) Potestad para administrar justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas jurídicas a los casos concretos sobre los que deben decidir.

En materia agraria, constitucionalmente se estableció la creación de los tribunales agrarios, con plena autonomía y jurisdicción para la solución de controversias con motivo de los derechos establecidos en la LA que sean sometidos a su consideración. La LOTA y la normatividad emitida con base en ella, precisa la jurisdicción atendiendo la materia y territorio. (Véase Art. 27, fracc. XIX; LA art. 168 y LOTA arts. 1º y 18 y RITA art. 46 y “Competencia”, “Tribunales agrarios”, “Tribunal unitario agrario”).)

Jurisdicción voluntaria. Procedimiento no contencioso que se instaura ante un tribunal para que reconozca o declare un derecho, sin que se promueva conflicto entre partes. Con dicha expresión se ha buscado designar aquellos actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, con el objeto de que verifiquen la existencia de ciertas situaciones jurídicas o la satisfacción de determinados requisitos legales, sin que exista litigio o que las resoluciones en estos procedimientos adquirieran el carácter de la cosa juzgada.

La LA dispone que quien hubiere poseído tierras en carácter de titular de derechos de ejidatario, siempre que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas tropicales, podrá acudir ante el tribunal unitario agrario competente, para que en vía de jurisdicción voluntaria adquiera los derechos sobre la parcela de que se trate. De igual forma, quienes guarden el estado comunal podrán promover su reconocimiento ante el órgano jurisdiccional, respecto de la posesión y propiedad de las tierras de carácter comunal.

Además, los tribunales agrarios conocerán en esta vía de los asuntos no litigiosos que les sean planteados que requiera la intervención judicial, y proveerán lo necesario para proteger los intereses de los solicitantes. (Véase LA art. 48, 98, fracc. II y 165 y LOTA art. 18, fracc. X y “Cosa juzgada”, “Competencia”).)

Jurisprudencia. Interpretación que efectúan los jueces de los preceptos legales en casos concretos. Se considera como una norma que colma omisiones y lagunas de la ley y que se funda en las prácticas seguidas por los tribunales, en casos iguales o análogos.

Por ser un criterio interpretativo de la normatividad, se encuentra establecida en la C, la cual dispone que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación, acerca de la interpretación de la Ley Fundamental, leyes, reglamentos federales o locales y los tratados internacionales.

En materia agraria, el Tribunal Superior Agrario tiene competencia para conocer del establecimiento de jurisprudencia; para ello, se requerirá de cinco sentencias en un mismo sentido sin ninguna en contrario, las que deberán ser aprobadas por el Pleno del citado tribunal al menos por cuatro de sus cinco magistrados. Dicha jurisprudencia será obligatoria para los tribunales unitarios, a partir de su publicación en el *Boletín Judicial Agrario*. (Véase C art. 94, párrafo octavo, LOTA art. 9º, fracc. V y RITA art. 19 y “Suprema Corte de Justicia de la Nación”).

Justicia agraria. (Del latín *justitia*, que a su vez proviene de *jus*, que significa lo justo.) Doctrinariamente se entiende como la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. A la justicia se le vincula con la aplicación e interpretación de la ley. Se habla de justicia social, incorporada al derecho agrario, laboral y la seguridad social, como concepto de protección de la clase campesina y laboral.

En la LA, se establece que quien imparte justicia agraria son los tribunales agrarios, dotados de plena autonomía y jurisdicción, quienes conocen de las controversias que les son planteadas, a través del juicio agrario; igualmente se establece que la PA es el órgano de procuración de justicia en este ámbito. (Véase “Juicio agrario”, “Procuraduría Agraria” y “Tribunales Agrarios”).

Justipreciación de bienes ejidales y comunales. (Véase “Avalúo”).

L

Latifundio. Es el acaparamiento o concentración de tierras de propiedad particular por individuos o de alguna sociedad, siempre y cuando excedan los límites establecidos en la C o la LA.

El Art. 27 determina que las propiedades agrícolas o ganaderas que excedan el límite establecido, serán fraccionadas y enajenadas, de acuerdo con los procedimientos precisados en las leyes estatales que se promulguen para tal efecto. El reglamento correspondiente de la LA precisa las acciones y procedimiento previo a la enajenación de los excedentes, en el que participan la SRA y PA. (Véase Art. 27 fracc. IV, XV y XVII, LA arts. 115-124 y RLAMOPR art. 11, 43-58 y “Denuncia de excedentes”).

Laudo arbitral. Decisión emitida por el árbitro designado por las partes para resolver una controversia que haya sido sometida a su análisis y estudio. El laudo deberá ser preciso y congruente con los hechos materia del conflicto, definir las pretensiones y su estructura formal es la de una sentencia (hechos, consideraciones y conclusiones). Dicha resolución se ajustará a reglas jurídicas cuando la naturaleza de las cuestiones controvertidas lo permitan.

En materia agraria, es emitido por el árbitro que haya sido designado por la PA y aceptado por las partes en el compromiso arbitral. El laudo deberá presentarse ante el tribunal unitario agrario para su homologación, en cuyo caso traerá aparejada ejecución. (Véase RIPA arts. 5° fracc. V, 13, fracc. V, 21, fracc. V, 30, fracc. III, 53 y 54 y “Arbitraje”, “Audencia Arbitral”, “Compromiso arbitral”.)

Legítimo poseedor de solar. Persona a quien la asamblea del núcleo haya asignado un solar en la zona urbana de los ejidos y comunidades. La asignación que se haga a favor de sus integrantes será en forma gratuita; dicho solar podrá formar parte del patrimonio familiar. Para el caso de los avecindados la asignación comúnmente es de manera onerosa, siempre que existan solares excedentes o vacantes.

En la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras que se lleve a cabo, la adjudicación de solares a ejidatarios, comuneros y posesionarios se realizará en presencia de un representante de la PA, el acta correspondiente deberá inscribirse en el RAN. Los certificados que al efecto sean expedidos constituyen los títulos de propiedad respectivos y deberán registrarse en el Registro Público de la Propiedad, quedando el solar a partir de ese momento sujeto a la legislación común. (Véase LA arts. 68-69 y RLA arts. 51 y 52 y “Solares Urbanos”.)

Ley Agraria. Conjunto de normas jurídicas reglamentarias del Art. 27 en materia agraria; regula las cuestiones relativas a la propiedad de ejidos y comunidades, su organización, personalidad jurídica y derechos sobre su patrimonio; así como el ejercicio de los derechos en lo individual de sus integrantes. Este ordenamiento establece los procedimientos por los cuales los núcleos y los ejidatarios o comuneros podrán asociarse y otorgar el uso de sus tierras.

La LA norma la expropiación de bienes ejidales y comunales, así como el procedimiento para la denuncia de excedencias de la pequeña propiedad individual y de las sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales; así como las disposiciones referentes a terrenos baldíos o nacionales.

La LA establece las atribuciones de la PA y del RAN y prevé en su articulado las relativas a la justicia agraria, normando el procedimiento del juicio agrario. (Véase Art. 27 fraccs. VII, XV, XVII y XIX y LA.)

Libertad de asociación. Es el derecho de toda persona para poder asociarse con otras para la realización de determinadas actividades o la protección de intereses comunes.

En materia agraria, es la libertad que se otorga a los núcleos de población ejidal o comunal, a sus integrantes en lo individual, respecto al aprovechamiento de sus tierras de uso común o parceladas según sea el caso, para conceder a terceros su uso o usufructo, mediante la celebración de contratos. Asimismo, podrán aportar sus tierras de uso común o sus derechos de usufructo a la formación de sociedades, tanto mercantiles como civiles, en los caso de manifiesta utilidad. (Véase Art. 27, fraccs. IV y VII; LA arts. 23, fraccs. V y IX, y 45, 75, 79 y 100 y “Aportación de tierras”, “Contrato”).

Libro de registro. En el marco de la organización agraria básica, es el documento de registros a cargo del comisariado ejidal o de bienes comunales, en el que se asientan los datos básicos de identificación de los ejidatarios o comuneros que integran el núcleo agrario, los derechos respecto de las parcelas, solares y tierras de uso común y lo relativo a las enajenaciones y los actos jurídicos que se lleven a cabo sobre derechos ejidales. La asamblea del núcleo tiene facultades para revisar los asientos que el comisariado realice en el libro de registro. (Véase LA art. 22 y RLA art. 17.)

Lindero. Es el señalamiento de una línea que divide dos o más propiedades; en el medio rural se utiliza para delimitar y definir las superficies de los sujetos agrarios, tanto de núcleos como de sus integrantes; el señalamiento de lindero se realiza por diversos medios visibles para proteger la propiedad.

Dentro de los trabajos del PROCEDE, la comisión auxiliar debe notificar a los colindantes del núcleo para que asistan al recorrido y delimitación del perímetro del patrimonio ejidal o comunal, a efecto que de ser procedente se firmen las actas de conformidad de linderos correspondientes. (Véase RLA art. 24 y “Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares”).

Liquidación de sociedades. Es el procedimiento establecido para la disolución de una sociedad civil o mercantil; tiene como finalidad concluir la vida jurídica de la persona moral, por el cumplimiento de su objeto, porque haya transcurrido el plazo de su duración, voluntad de sus socios, mandato de ley o por declaración judicial.

La LA dispone que en caso de liquidación de una sociedad en la que se hayan aportado tierras de uso común, el núcleo y los ejidatarios o comuneros, de acuerdo con la participación en el capital social y bajo la estricta vigilancia de

la PA, tendrán preferencia para recibir tierras en pago de lo que les corresponda en su carácter de socios.

Asimismo, quienes sean titulares de acciones o partes sociales con serie “T” sean sujetos agrarios o no, al momento de la liquidación de la sociedad tendrán derecho a recibir terrenos en pago de lo que les corresponda por sus derechos en el haber social. (Véase LA arts. 75 y 127 y “Acciones serie T”, “Sociedades civiles”, “Sociedades mercantiles”).)

Litigio. Se identifica con juicio o con procedimiento judicial; también se considera como el conflicto de intereses por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia de la contraparte.

En materia agraria, los litigios se dirimen y resuelven a través del juicio agrario, la conciliación o el arbitraje, esto es, de manera judicial o administrativa, según convenga a los intereses de las partes. (Véase “Arbitraje”, “Conciliación” “Juicio agrario”).)

Lotificación. Son trabajos técnicos para fraccionar en lotes la totalidad o parte de la superficie que compone la zona urbana, para destinarlos como solares en los que ejidatarios, comuneros y vecindados edificarán su vivienda.

Para realizar los trabajos de lotificación se deben observar la legislación en materia de desarrollo urbano y los planes respectivos del estado y municipios. (Véase LA art. 87 y “Solares urbanos” y “Zona de urbanización”).)

M

Magistrado. Funcionario judicial que, integrado a una Sala, forma parte de un tribunal colegiado o unitario. Se le conoce de manera genérica como el juez encargado de un tribunal o juzgado.

En materia de justicia agraria, los tribunales unitarios agrarios están a cargo de un magistrado numerario, quien deberá reunir los siguientes requisitos:

- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y tener por lo menos 30 años cumplidos;
- Ser licenciado en derecho, con título, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación;
- Comprobar una práctica profesional mínima de cinco años y,
- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional.

El magistrado es designado por la Cámara de Senadores y en los recesos de ésta por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo

Federal. El Tribunal Superior Agrario está integrado por cinco magistrados numera- rios, cumpliendo con los mismos requisitos y forma de designación establecida para los magistrados de los tribunales unitarios agrarios.

Los magistrados son responsables por las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos y por ello sujetos a los procedimientos y sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. (Véase LOTA arts. 3º, 12-18 y 30; RITA arts. 2º, 4º y 5º.)

Mandato. Contrato por virtud del cual una persona llamada mandatario, se obli- ga a ejecutar por cuenta de otra denominada mandante, los actos que le son encomendados.

En la LA se establece que para la asistencia válida de un mandatario a asamblea, bastará una carta-poder suscrita ante dos testigos, ejidatarios o ave- cindados del propio núcleo ejidal o comunal. Para el caso de que el mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que la firme y asiente el nombre de ambos. Dicha ley dispone que no se podrá designar mandatario para asistir a asamblea de formalidades especiales. (Véase LA arts. 23, fraccs. VII-XIV y 30.)

Masa hereditaria. Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte y constituyen el patrimonio que podrá ser transmitido por sucesión.

En materia agraria, se constituye con los derechos parcelarios, de uso común y los demás que correspondan al ejidatario o comunero, quien tiene la facul- tad de designar a la persona que deba sucederle en los mencionados derechos. (Véase LA arts. 17 y 18.)

Medidas cautelares. Son las providencias que decreta el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas, con motivo de la tramitación de un proceso.

En juicio agrario, los tribunales competentes proveerán las diligencias pre- cautorias necesarias para proteger los intereses de las partes; asimismo, podrá acordar la suspensión del acto de autoridad que pudiera afectarlos en tanto re- suelve en definitiva. Igualmente, deberán considerarse las condiciones socioeco- nómicas de los interesados para fijar la garantía inherente a la reparación del daño o la indemnización que pueda causarse con la suspensión, en caso de una sentencia desfavorable para el quejoso. (Véase LA art. 166 y “Suspensión”.)

Medidas de apremio. Es el conjunto de medidas dictadas por el juez o tribunal para hacer cumplir coactivamente sus sentencias o resoluciones.

La LA dispone que los tribunales agrarios están obligados a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y, para tal efecto, podrán dictar todas las medidas necesarias incluidas las de apremio en la forma y términos que a su juicio fueren procedentes. (Véase LA art. 191 y “Ejecución de sentencia”, “Sentencia”).)

Medios de impugnación. Son las acciones jurídicas previstas en las leyes, que tienen como finalidad corregir, modificar, revocar o anular los actos y resoluciones emitidas por la autoridad judicial, cuando el promovente considere que existen inconsistencias jurídicas, errores, ilegalidad o injusticia en el acto impugnado.

En la LA, se establecen como medios de impugnación el recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, en contra de determinadas sentencias emitidas por los tribunales unitarios agrarios (litigios relacionados con los límites de los núcleos ejidales o comunales, restitución de tierras de ejidos y comunidades y nulidades de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria); así como el juicio de amparo directo en contra de las sentencias definitivas de dichos tribunales y del Tribunal Superior Agrario.

En contra de otras resoluciones y actos emitidos por los tribunales unitarios agrarios durante el procedimiento, procede el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito competente. (Véase LA arts. 198-200; LOTA art. 9º fraccs. I-III y “Juicio de amparo”, “Recurso de revisión”).)

Método topográfico directo. Trabajos de levantamiento técnico-específico de medición en campo, con el propósito de recabar datos geográficos y particularidades de una superficie terrestre (ángulos, rumbos y distancias), efectuándolo directamente en el terreno.

Método topográfico indirecto. Trabajos de delimitación que se realizan a partir de la utilización de materiales fotográficos, fotogramétricos, cartas topográficas, planos informativos y definitivos u otros elementos técnicos con que se cuente, para lograr la identificación de determinadas superficies.

Minifundio. Son pequeñas superficies de propiedad ejidal, comunal o particular, con dimensiones menores a cinco hectáreas, en usufructo de integrantes del núcleo, posesionarios o propietarios privados; esta forma de tenencia de la tierra es considerada como una limitante a la viabilidad de la unidad pro-

ductiva que impide el desarrollo rural y bienestar de las familias campesinas; además conlleva a la pulverización de las tierras de los núcleos y de la pequeña propiedad.

N

Nacionaleros. Son los poseedores de terrenos baldíos o nacionales, que tienen su uso y usufructo. La LA señala que estos poseedores tendrán preferencia para adquirir dichos terrenos en forma onerosa, siempre que los hayan explotado durante un periodo de al menos tres años, anteriores a la presentación de la solicitud de regularización a la SRA. Se les considera sujetos agrarios para recibir algunos de los servicios que proporciona la PA.

Una vez que el nacionalero recibe su título de propiedad pierde esta categoría y se convierte en pequeño propietario. (Véase LA art. 162 y RIPA arts. 1° y “Terrenos baldíos”, “Terrenos nacionales”).)

Notificación. Acto mediante el cual se hace del conocimiento de los interesados una resolución judicial o administrativa, con el objeto de que se cumpla un acto procesal.

En juicio agrario, el demandado debe ser notificado de manera personal del emplazamiento, lo que podrá hacerse en el domicilio que al efecto se haya señalado, en el lugar de su principal asiento de negocios o en el que se le encuentre.

En el supuesto que no sea posible la notificación personal, el tribunal acordará la notificación por edictos en los que se contenga la resolución que se notifica, una breve síntesis de la demanda y del emplazamiento y se publicarán por dos veces dentro de un plazo de diez días en alguno de los diarios de mayor circulación en la región y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la oficina de la presidencia municipal y en los estrados del tribunal. Esta notificación surtirá efectos una vez transcurridos 15 días, a partir de la fecha de la última publicación. (Véase LA arts. 170-178, 180, 182 y 184 y “Cédula de notificación”).)

Núcleo agrario. Término genérico por el cual se identifica a los núcleos ejidales o comunales que han sido beneficiados por una resolución presidencial dotatoria o sentencia de los tribunales agrarios, a través de la cual les fueron concedidas tierras, bosques y aguas. (Véase Art. 27 fracc. VII; y LA arts. noveno, 43 y 98 y “Acciones agrarias”, “Bienes comunales”, “Bienes ejidales”).)

Nulidad de asignación de parcelas. La LA establece en forma categórica que será nula de pleno derecho, por parte de la asamblea, la asignación individual de parcelas en bosques o selvas tropicales de ejidos y comunidades. (Véase LA art. 59 y 107.)

Nulidad de actos. En términos generales, es la acción que se ejercita para dejar sin efectos o invalidar un acto o documento.

En el ámbito procesal, esta acción se concede a las partes en juicio, contra actuaciones judiciales violatorias de la normatividad dentro del procedimiento; también se conoce como los acuerdos incidentales por virtud de los cuales promociones, acuerdos, diligencias o ratificaciones y cualquier determinación del juez pueden ser revocadas o modificadas por la existencia de un vicio; nulidad que deberá promover la parte interesada y declararla la autoridad judicial competente.

En juicio agrario, dentro del procedimiento, procede la nulidad de lo actuado ante el tribunal unitario agrario, cuando no tenga competencia en razón de territorio o la audiencia de ley no sea presidida por el magistrado; asimismo los sujetos agrarios pueden ejercitar la nulidad ante los referidos tribunales, respecto de resoluciones emitidas por autoridades en materia agraria que vulneren los derechos establecidos en la LA.

Por otra parte, se determina en la LA que podrá promoverse la nulidad de los siguientes asuntos: en materia de asamblea de formalidades especiales en ejidos o comunidades, cuando haya violación al procedimiento; en la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales (en este caso existe la nulidad de pleno derecho); de los actos o contratos por los que se pretenda simular la tenencia de acciones de serie "T"; en la constitución de ejidos, será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores; por la falta de notificación para enajenar un derecho parcelario y en la primera enajenación de parcelas en que se haya adoptado el dominio pleno. (Véase LA arts. 28, 59, 90, 133, 80, 84, 168, 185, 198, fracc. III.)

O

Obligación. En general, está considerada como el vínculo que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa. Para la imposición de una obligación es necesario conocer su fuente, sin ella, no estaríamos en presencia de un acto jurídico; en consecuencia, las obligaciones nacen de un acuerdo de voluntades, por disposición legal o de un ilícito, entre otras causas. El cumplimiento de las obligaciones sólo puede ser de tres tipos: de dar, de hacer y no hacer.

En la LA, es obligación de los notarios públicos y de los registros públicos de la propiedad dar aviso al RAN respecto a las operaciones realizadas sobre parcelas en que se haya adoptado el dominio pleno o de conversión de tierras al régimen ejidal, así como de la adquisición de tierras por las sociedades civiles o mercantiles.

Asimismo, los ejidatarios o comuneros deberán cumplir con las obligaciones establecidas en el reglamento interno y estatuto comunal e integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales y del consejo de vigilancia deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la ley de la materia. (Véase LA arts. 33, 36, 74 y 156 y “Comisariado ejidal”, “Comisariado de bienes comunales”, “Estatuto comunal”, “Reglamento interno”).)

Ocupación previa. Es el acto por virtud del cual la dependencia o entidad promovente de una expropiación toma posesión de un bien ejidal o comunal, para realizar una función propia o para prestar un servicio público, atendiendo causas de fuerza mayor urgentes o prioritarias.

Para la procedencia de esta ocupación, es requisito indispensable que los ejidos o comunidades a través de acuerdo de asamblea o sus integrantes, tratándose de tierras de uso común o parceladas según sea el caso, aprueben dicha ocupación.

Para formalizar este acuerdo de voluntades deberá suscribirse el convenio correspondiente entre la promovente de la expropiación y el titular de los bienes, en el supuesto de tierras de uso común a través del comisariado ejidal con la aprobación de la asamblea; dicho documento deberá contener como mínimo el plano de la superficie a ocupar; la contraprestación por la ocupación y la garantía de cumplimiento; las causas de rescisión del convenio y el pago de daños y perjuicios derivados de la ocupación.

Para la formalización del convenio deberá intervenir la PA, quien además solicitará su inscripción en el RAN. (Véase LA art. 95 y RLAMOPR arts. 66-69 y “Expropiación”).)

Ombudsman. Institución de origen escandinavo; en general, es el encargado de la defensa en vía administrativa de los derechos humanos de los ciudadanos; su función última es solicitar a las autoridades, instancias competentes y servidores públicos la estricta aplicación de la constitución y la ley.

La PA comparte algunos rasgos de *ombudsman* en las facultades determinadas por la LA para instar a las autoridades agrarias a la realización de sus funciones, emitir las recomendaciones que considere pertinentes y denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos.

Esta concepción ha sido confirmada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considerando a la PA como un *ombudsman* especializado para atender las quejas de los sujetos agrarios en contra de autoridades por incumplimiento de sus obligaciones, obstaculización de los trámites efectuados por ellos o desistimientos sin fundamento en sus peticiones.

La característica de *ombudsman* le ha permitido a la PA atender quejas de los campesinos en otros ámbitos no vinculados de manera precisa con la materia agraria, relacionados indirectamente con los derechos sobre sus bienes. (Véase LA art. 136.)

Orden de preferencia. (Véase “Derecho de preferencia”).)

Ordenamiento ecológico. Instrumento de política ambiental que tiene por objeto regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. (Véase LGEEPA art. 3°, fracc. XXIII, y “Aprovechamiento de recursos naturales”, “Aprovechamiento sustentable”).)

Organismo público descentralizado. Entidad de la Administración Pública Federal paraestatal establecida legalmente con el objeto de realizar actividades correspondientes a áreas estratégicas o prioritarias, para la prestación de un servicio público o social, la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.

De conformidad con la ley de la materia, la PA es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que cumple funciones de servicio social, encargado de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, en asuntos y ante autoridades agrarias. (Véase LOAPF art. 45 y LA art. 134 y “Procuraduría Agraria”).)

Órgano desconcentrado. Órganos administrativos constituidos para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos competencia de las Secretarías de Estado, jerárquicamente subordinados a dichas dependencias y con las facultades específicas, de conformidad con las disposiciones aplicables.

La LA, establece que el RAN es un órgano desconcentrado de la SRA, quien estará encargado del control de la tenencia de la tierra en el medio rural y de la seguridad documental correspondiente, debiendo inscribirse en el citado registro los documentos en que consten las operaciones originales y modificaciones de

la propiedad de las tierras y derechos de carácter agrario. (Véase LOAPF art. 17; LA arts. 148-155; y RIRAN art. 1º.)

Órganos ejidales y comunales. De conformidad con la C y la LA tienen este carácter la asamblea como órgano supremo, el comisariado ejidal y de bienes comunales, órgano de representación y el consejo de vigilancia como órgano de supervisión. Dichos órganos cuentan con las facultades y obligaciones previstas en la LA y el reglamento interno o estatuto comunal. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA arts. 21-23 y 32-36 y 107 y “Asamblea del núcleo”, “Comisariado de bienes comunales”, “Comisariado ejidal”.)

P

Parcela ejidal. Superficie asignada por la asamblea a los integrantes de un ejido o comunidad; acto a partir del cual corresponde a los ejidatarios o comuneros su uso y disfrute en términos de la LA, el reglamento interno o estatuto comunal. (Véase LA arts. 14, 56, fracc. II, 62 y 76 y “Tierras parceladas”.)

Parcela escolar. Es la superficie asignada por la asamblea a la escuela del poblado, destinada a la divulgación, investigación, enseñanza y prácticas agrícolas, que permitan un uso eficiente y racional de los bienes del ejido o comunidad. El reglamento interno o estatuto comunal establecerá la normatividad para el funcionamiento de la parcela escolar. Goza de la misma protección que las tierras del asentamiento humano, con las características de inalienable, imprescriptible e inembargable. (Véase LA arts. 63, 64 y 70.)

Parcelamiento económico. Es el fraccionamiento de hecho de las tierras del núcleo, efectuado por los ejidatarios, comuneros y posesionarios, quienes detentan y usufructúan cada una de las parcelas resultado de este fraccionamiento, sin contar con un certificado que legitime de manera precisa su derecho sobre el bien que ocupa.

Actualmente, la LA faculta a la asamblea para reconocer el parcelamiento económico o de hecho y regularizar la tenencia de posesionarios, respetando los derechos adquiridos con anterioridad. Para el ejercicio de esta atribución coadyuva el PROCEDE, con las acciones que realiza dentro de su programa operativo y la emisión de los certificados parcelarios correspondientes. (Véase LA, arts. 23 fracc. VIII, 56-57.)

Parcelamiento formal. (Véase “Tierras parceladas”.)

Partes en juicio. (Véase “Actor”, “demandado”.)

Patrimonio. Suma de bienes que pertenecen a una persona. Conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a su titular.

En materia agraria, constitucionalmente se protege el patrimonio de los ejidos y comunidades respecto de las tierras que les pertenecen, tanto las que fueron dotadas o reconocidas, como las que hubieran adquirido por cualquier título. (Véase Art. 27 fracc. VII y LA art. 9º y “Bienes comunales”, “Bienes ejidales”.)

Pequeña propiedad. (Véase “Propiedad privada”.)

Plan Nacional de Desarrollo. Instrumento rector de la planeación del desarrollo económico, político y social del país; en él se definen las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales que observará el Ejecutivo Federal para orientar la conducción del quehacer público, social y privado. Documento normativo de mediano plazo en el que se precisan los propósitos y criterios políticos para el desarrollo nacional; así como los programas que deben elaborarse e instrumentarse para atender de forma estratégica y prioritaria las cuestiones económicas y sociales del Estado. (Véase LGP arts. 7-9, 14, fracc. II, 16 y 21.)

Plano. En general es la representación gráfica de una superficie determinada, en la que se señalan sus dimensiones, medidas y colindancias, así como otras características y bienes que la conforman.

En materia agraria, el plano definitivo es el documento legal y gráfico que determina la localización, extensión y límites de las tierras, aguas y bosques con que fue dotado, ampliado, restituido o reconocido un núcleo ejidal o comunal. Se elabora generalmente a partir de la ejecución de la resolución presidencial o sentencia del tribunal agrario, tomando como base la ejecución correspondiente; este plano forma parte de la carpeta básica o agraria del núcleo. (Véase LFRA arts. 305 y 308, LA art. 56 y RIRAN art. 21 fraccs. I y II.)

Plano interno. Dentro de los trabajos del PROCEDE, es el plano que resulta de la delimitación de las tierras al interior de los núcleos de población ejidales o comunales, en él se localizan las tres grandes áreas de las tierras del núcleo; parceladas, de uso común y del asentamiento humano. (Véase RLA art. 25.)

Poblado. En términos generales es un asentamiento humano en el que habitan campesinos con su familia, que tienen características e intereses comunes. En

la legislación anterior, con esta figura se vinculaba al grupo gestor o solicitante de tierras en acciones dotatorias de tierras y de reconocimiento de bienes comunales.

En materia agraria se identifica con este nombre a los núcleos ejidales o comunales beneficiados mediante resolución presidencial o sentencia dictada por los tribunales agrarios, por la cual les fueron concedidas o reconocidas tierras, bosques y aguas. (Véase LFRA arts. 195, 196 y 200.)

Polígono ejidal. Trazo geométrico que integra la superficie de tierras que ha sido dotada al ejido, que se representa gráficamente en el plano definitivo o en los diferentes planos, cartas y croquis que se elaboran al respecto. Se señala en él la división en tierras del asentamiento humano, tierras parceladas y tierras de uso común. En el terreno, los ángulos, límites y colindancias de la propiedad del núcleo se marcan con mojoneras. (Véase LA art. 44.)

Poseionario. En términos generales es la persona que ejerce un poder de hecho sobre un bien ejercitando actos de uso y goce como si fuera su propietario.

En materia agraria, es el sujeto que posee tierras ejidales o comunales y que ha sido reconocido con tal carácter por la asamblea del núcleo o el tribunal unitario agrario competente; en términos del RIRAN, quien haya sido reconocido como poseionario podrá solicitar la expedición del certificado parcelario con esta categoría.

El poseionario o poseedor cumpliendo los requisitos establecidos en la LA, puede ejercitar la acción de prescripción respecto de las tierras ejidales que detenta. (Véase LA arts. 23, fracc. VIII, 48, 56 y 57, fracc. I y RIRAN art. 93.)

Postura legal. (Véase “Subasta de derechos agrarios”.)

Precario. Es la posesión de una cosa sin contar con el título legal; poseer algo por tolerancia del dueño o por su inadvertencia. En materia agraria, lo precario representa una irregularidad en la tenencia de la tierra, con frecuencia se confunde con invasión. Una posesión precaria puede representar una cesión del uso de tierras revocable a voluntad del propietario.

Predio. Es la superficie que tiene una persona en propiedad o posesión debidamente delimitada. Genéricamente se denominaban de esta manera las superficies señaladas como de posible afectación en la legislación anterior, cuando reunían ciertas causales establecidas en la LFRA.

Prescripción. Medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo, conforme a las condiciones establecidas por la ley.

En la LA, esta acción la ejerce el campesino que hubiere poseído tierras ejidales en concepto de titular de derechos de ejidatario, siempre que no sean las destinadas al asentamiento humano, ni se trate de bosques o selvas, en forma pacífica, continúa y pública durante un periodo de cinco años, si la posesión es de buena fe o de diez de mala fe, con el objeto de adquirir sobre los terrenos los mismos derechos de cualquier ejidatario sobre su parcela.

En estos supuestos, el poseedor podrá acudir ante el tribunal agrario en la vía de jurisdicción voluntaria o controversia en juicio, para que el referido tribunal emita resolución respecto de la adquisición de los derechos sobre la parcela o tierras de que se trate. La demanda presentada por cualquier interesado ante el tribunal agrario o la denuncia de despojo ante el ministerio público, interrumpirá el plazo para prescribir. (Véase LA arts. 20 fracc. III y 48.)

Prevención en materia agraria. Acuerdo del tribunal agrario dirigido y notificado al promovente, a fin de que subsane alguno de los requisitos legales o irregularidades detectadas en su escrito inicial de demanda, para que la solvante dentro del término de ocho días.

En el procedimiento de queja ante la PA, con motivo de denuncias o irregularidades en contra de servidores públicos o de integrantes del comisariado ejidal, comunal o consejo de vigilancia, la unidad administrativa competente podrá emitir acuerdo para mejor proveer, previniendo al quejoso para que subsane alguna irregularidad en su denuncia o aporte la información necesaria que permita realizar el estudio e investigación correspondientes; en este supuesto, se concederá un término perentorio de treinta días para que cumpla con lo requerido; en caso contrario, se dará por concluido el expediente independientemente de que pueda presentar la queja con posterioridad. (Véase LA art. 181 y RIPA arts. 57.)

Procampo. Programa del Gobierno Federal que proporciona apoyos directos a los productores rurales, otorgándolos de acuerdo con las características agronómicas y comerciales de la región, exclusivamente para quienes se encuentran en el padrón y hayan producido maíz, frijol, trigo, soya, sorgo, arroz y algodón en cualquier ciclo homólogo anterior a 1993.

Dicho Programa tiene como objetivos apoyar el ingreso de los productores rurales mediante la entrega de un subsidio directo que el Gobierno Federal otorga por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; fomentar la reconversión de las tierras para una mayor rentabilidad; estimular la organización de los productores del sector y frenar la

degradación del medio ambiente, propiciando la conservación de los recursos agropecuarios y forestales. (Véase “Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”.)

Procedimiento. En general es la manera de realizar un acto. En materia judicial se ha utilizado como sinónimo de juicio o instrucción de una causa. Asimismo, se considera como la actuación en trámites de naturaleza administrativa.

Procurador Agrario. Titular de la PA, nombrado por el Presidente de la República; quien ocupe el cargo, deberá cubrir los requisitos siguientes: ser mexicano, mayor de edad, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias y gozar de buena reputación.

La LA establece como atribuciones del Procurador Agrario las siguientes:

- Actuar como representante legal de la PA;
- Dirigir y coordinar sus funciones;
- Nombrar y remover a su personal, determinar sus funciones, áreas de responsabilidad y remuneración;
- Establecer las unidades técnicas y administrativas necesarias;
- Expedir la normatividad necesaria para el funcionamiento administrativo de la PA;
- Elaborar el proyecto de presupuesto de la PA;
- Delegar sus facultades en subalternos, y
- Las demás que esta ley y sus reglamentos le señalen.

Por su parte el RIPA, además de las atribuciones señaladas, establece las siguientes:

- Aprobar y coordinar los programas de la PA;
- Celebrar los actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de las facultades de la PA;
- Proponer los anteproyectos de iniciativas de la normatividad aplicable para la adecuada procuración de justicia agraria;
- Aprobar los programas de comunicación social y otros vinculados a ella;
- Emitir opinión sobre los proyectos de desarrollo y constitución de sociedades con la aportación de tierras de uso común de los núcleos;
- Emitir los acuerdos y recomendaciones a las autoridades competentes por violación de las leyes agrarias y a los derechos de los sujetos agrarios;
- Hacer del conocimiento del Tribunal Superior Agrario las contradicciones de tesis;

- Emitir dictamen de la terminación del régimen ejidal;
- Presentar un informe de actividades anual al Ejecutivo Federal;
- Constituir y presidir los comités internos que se requieran, y
- Las demás que la LA y otros ordenamientos le confieran. (Véase LA arts. 139, 140, 142 y 144; RIPA arts. 8º, 11 y 12.)

Procuraduría Agraria. Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; con funciones de servicio social, encargado de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, nacionaleros y campesinos en general).

Son atribuciones de la PA las siguientes:

- Coadyuvar y representar a los sujetos agrarios en asuntos y ante autoridades agrarias;
- Asesorar a los sujetos agrarios en sus relaciones con terceros en la aplicación de la LA;
- Promover y procurar la conciliación de intereses entre los sujetos agrarios;
- Denunciar la violación de la LA e instar a las autoridades a la realización de sus funciones y emitir las recomendaciones pertinentes;
- Proponer medidas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo;
- Denunciar a los servidores públicos agrarios;
- Ejercer las funciones de inspección y vigilancia en la defensa de los derechos de los sujetos agrarios;
- Investigar y denunciar el acaparamiento o concentración de tierras;
- Asesorar y representar a los sujetos agrarios en sus trámites y gestiones para obtener la titulación de sus derechos agrarios;
- Denunciar los hechos constitutivos de delito o faltas administrativas ante la autoridad competente y atender las denuncias sobre irregularidades del comisariado ejidal o de bienes comunales, y
- Las demás que esta ley, sus reglamentos y otras leyes les señalen. (Véase Art. 27, fracc. XIX, LA arts. 134-136 y RIPA arts. 1º, 3º y 9º.)

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal; sectorizado en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; creado con el objeto de representar los intereses

de la población respecto a la protección del ambiente y establecer criterios, mecanismos y acciones para el logro de su objeto. Cuenta además con las facultades de control y atención a las demandas ciudadanas en la prevención y restauración de la contaminación ambiental y preservación del equilibrio ecológico.

Esta Institución tiene relación directa con aquellos núcleos propietarios de selvas, bosques y áreas ecológicamente protegidas. (Véase LGEEPA.)

Productor agrícola. Persona física o moral, que tiene habitualmente y como principal actividad económica la explotación agrícola de las tierras.

Programa Sectorial Agrario. Tiene su fundamento en el Plan Nacional de Desarrollo, con base en este programa se coordinan las acciones y programas derivados que competen a las instituciones que conforman el Sector Agrario; su instrumentación y operación tiene como objetivo culminar proyectos sociales en beneficio de la población rural. Este documento contiene un conjunto de actividades y estrategias, mediante las cuales se enumeran y detallan las acciones a realizar, para lograr las metas y objetivos establecidos en el referido Programa.

Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. Programa del Gobierno Federal cuyo propósito fundamental es otorgar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los ejidos, comunidades y a sus integrantes. El programa es voluntario para los ejidatarios y comuneros, quienes a través de su asamblea determinan y aprueban la delimitación, destino y asignación de derechos de sus tierras.

De acuerdo con lo dispuesto en el RLA, la Secretaría de la Reforma Agraria, la PA y el RAN, establecen dentro de su competencia los mecanismos y acciones de colaboración necesarias para el desarrollo del PROCEDE. Con base en los convenios suscritos para tal efecto participan en el programa el INEGI, encargado de realizar los trabajos técnicos de medición, así como de generar los productos cartográficos, y los gobiernos estatales.

El PROCEDE se instrumenta bajo la dirección, en los estados, de los comités operativos estatales, establecidos en las diferentes entidades federativas y las políticas y normatividad para su desarrollo son emitidas por el comité operativo nacional. (Véase LA arts. 23 fracc. VII y VIII y 56-58; RLA arts. 19-58 y “Comités operativos estatales del PROCEDE”, “Comité operativo nacional del PROCEDE”.)

Programa de Empresas Rurales en Desarrollo (EMPRENDE). Programa del Gobierno Federal, de beneficio social, con el propósito de atraer inversión privada

(interna y externa) al sector rural, para generar fuentes de empleo en el campo, impulsar la capacitación y organización de los campesinos y crear figuras asociativas entre los inversionistas y los sujetos agrarios. Dicho Programa se basa fundamentalmente en la operación de las siguientes líneas estratégicas: recopilación de propuestas susceptibles de convertirse en proyectos, selección de ideas y preparación de perfiles de inversión; presentación de los mismos a inversionistas y cumplimiento de los proyectos presentados.

En el ámbito de sus atribuciones, para el desarrollo de este programa la PA orienta y asesora a los sujetos agrarios respecto de la viabilidad del proyecto de inversión presentado.

Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales. Este Programa representa un modelo integral de ordenamiento territorial, basado en la regulación de las actividades productivas y los usos de suelo garantizando el aprovechamiento sustentable, la protección y conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas costeros, localizados en tierras ejidales y comunales.

Programa de Regularización de la Propiedad Fideicomitida en Chiapas. Este Programa, desde su creación, tiende a contribuir a la reconciliación y paz social en el estado de Chiapas, teniendo como objetivo primordial el atender la demanda de tierra y solucionar los conflictos agrarios en la entidad. Con base en los recursos federales de este programa, se adquirieron vía fideicomiso tierras para beneficiar a grupos campesinos; formalizada la compra de terrenos mediante escritura pública, éstos son incorporados al régimen de los ejidos y comunidades ya constituidos, o bien creando nuevos núcleos con las tierras adquiridas.

Propiedad. Es el poder que una persona física o moral ejerce de manera directa e inmediata sobre bienes muebles, inmuebles y derechos para aprovecharlos en el ámbito jurídico, siendo oponible a terceros. Derecho de goce y disposición que tiene sobre bienes determinados, de acuerdo con lo permitido por las leyes.

Propiedad originaria. Como se establece en la Constitución, es la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, que corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (Véase Art. 27, primer párrafo.)

Propiedad privada. Es el derecho que tiene un particular, persona física o moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones estableci-

das en la normatividad, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la colectividad. De conformidad con nuestra Carta Magna, se determina un régimen triangular de propiedad, integrado por la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social. La propiedad privada está sujeta principalmente a dos tipos distintos de limitaciones: la expropiación por causa de utilidad pública y las modalidades que dicte el interés público.

En materia agraria la propiedad privada tiene límites en cuanto a su extensión, ya que ninguna persona física puede ser propietaria de más de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra (200 de temporal, 400 de agostadero y 800 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos). Asimismo, se considera pequeña propiedad la que no exceda por persona de 150 hectáreas de riego que se destinan al cultivo de algodón y de 300 dedicadas a cultivos de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.

También se considera pequeña propiedad la que no rebase por individuo la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor, de acuerdo con el coeficiente de agostadero de los terrenos.

Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos en la extensión necesaria para el cumplimiento de su objeto, no obstante, en ningún caso serán titulares de tierras dedicadas a la agricultura, ganadería o explotación forestal, en una extensión mayor a 25 veces del límite señalado para las personas físicas.

El RLAMOPR norma el procedimiento para la investigación y enajenación de excedentes de la propiedad rural; en el supuesto de que dichos excedentes sean de una sociedad la SRA resuelve la acción y tratándose de personas físicas, la PA integra el expediente, lo dictamina y remite a la unidad administrativa competente del Gobierno del Estado en que se ubiquen los terrenos; en ambos casos los gobiernos de los estados fraccionarán y enajenarán el excedente si el propietario no lo hiciera en un plazo de un año contado a partir de la notificación de la resolución respectiva. (Véase Art. 27, fracs. IV, XV y XVII; LA arts. 115-124 y RLAMOPR arts. 11-14, 15-24 y 43-58 y “Agostadero”, “Cerril”, y “Denuncia de excedentes”.)

Propiedad pública. Derecho real que ejercen dependencias y entidades públicas con personalidad jurídica sobre bienes de dominio público. El Estado goza de derechos de propiedad que le son otorgados en atención a la naturaleza del titular, a la relación entre el propietario y el bien y por las características del bien en sí mismo.

De acuerdo con nuestra Constitución, la nación se reserva el dominio directo de propiedades y recursos naturales que la misma establece. Esto es, tierras, aguas, mares y recursos que no han sido transmitidos a los particulares, permanecen dentro del patrimonio de la nación, al cual se le denomina propiedad pública. La Carta Magna y algunas de la leyes reglamentarias que de ella emanan autorizan a dependencias y entidades para emitir concesiones y permisos a los particulares o sociedades para la explotación de determinados recursos.

La LGBN establece, entre otras disposiciones, los bienes que constituyen el patrimonio de la nación, su régimen, el sistema de administración inmobiliaria federal y paraestatal y las normas para la adquisición, titulación, administración, control, vigilancia y enajenación de los inmuebles federales. (Véase Art. 27 y LGBN art. 1 y “Concesión” y “Concesión en zona federal”).)

Propiedad rural. Titularidad que tienen diversos sujetos agrarios (ejidos, comunidades, pequeños propietarios, sociedades, colonos) respecto de tierras o predios rústicos que se encuentran en el territorio nacional, dedicados a la agricultura, ganadería o explotación forestal, principalmente. Forma de tenencia de la tierra que se regula en la LA y la legislación civil. (Véase Art. 27 y RLAMOPR art. 3°.)

Propiedad social. Es una modalidad de la propiedad reconocida por la C respecto de la titularidad de derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre sus bienes. La normatividad en la materia tutela de manera especial esta forma de propiedad, la cual tiene su origen en la Ley del 6 de enero de 1915 y se reafirma y reglamenta a través de las diferentes legislaciones promulgadas a partir de esa fecha, orientadas a proteger los referidos derechos.

Por lo general, la propiedad social se creaba o reconocía mediante resoluciones presidenciales dotatorias de tierras o de reconocimiento de bienes comunales; cabe mencionar que a partir de las reformas al Artículo 27 constitucional del año de 1992 y la derogación de la LFRA, las acciones por las que el Estado entrega tierras a poblados carentes de las mismas fueron suprimidas y la LA sólo prevé la constitución de nuevos ejidos mediante la aportación de tierras, aun y cuando conserva el procedimiento de reconocimiento de tierras comunales. (Véase Art. 27, frac. VII, LA arts. noveno, 90-92 y 98-99 y “Acción agraria”, “Afectación agraria”, “Artículo 27 constitucional”, “Bienes comunales” y “Bienes ejidales”).)

Proyectos de desarrollo. De conformidad a las modificaciones al Art. 27 del año de 1992 y la LA, los ejidos y comunidades, a través de asambleas con formalidades especiales, podrán transmitir el dominio de tierras de uso común a

sociedades mercantiles o civiles en las que participen; este concepto se encuentra referido al plan o proyecto que debe ser elaborado previamente para efectuar dicha aportación y en el que se justifique la manifiesta utilidad para el núcleo.

El proyecto de desarrollo y de escritura social respectivos serán sometidos a la opinión de la PA, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre la certeza de la realización de la inversión proyectada, el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales y la equidad en los términos y condiciones que se propongan. Esta opinión deberá ser emitida en un término no mayor a 30 días hábiles para ser considerada por la asamblea al adoptar la resolución correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que el ejido pueda recurrir, además, a los servicios profesionales que considere pertinentes. (Véase Art. 27, fracción VII, LA arts. 23 frac. IX, 75 y 100 y RIPA arts. 5º fracción XVI, 11 fracción VIII, 22 fracción VI y 82-85 y “Aportación de tierras”).)

Proyectos productivos. El estudio que trata de configurar la realización concreta de un determinado programa de inversión, organización, capitalización, comercialización, etcétera.

En la LA, este concepto se relaciona a la duración de los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales o comunales, celebrado por el núcleo o por sus integrantes, según se trate de tierras de uso común o parceladas.

La elaboración de un proyecto productivo también se vincula con la constitución de figuras asociativas y en algunos programas del Gobierno Federal, para que se otorguen los apoyos correspondientes, es necesario contar con dicho proyecto para garantizar en su caso el destino de los recursos.

Dentro de las facultades de la PA se encuentra la de asesorar jurídicamente a los sujetos agrarios en la constitución de figuras asociativas para la realización de proyectos productivos. (Véase LA art. 45, RIPA art. 22 frac. I y “Figuras asociativas”).)

Prueba. Actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto; es la verificación o confirmación de las afirmaciones de los hechos expresados por las partes.

Se designa como prueba al conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr el cercioramiento sobre los hechos discutidos.

En el juicio agrario son admisibles toda clase de pruebas, mientras no sean contrarias a la ley. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos a que se refieran. (Véase LA arts. 186 y 187 y “Audiencia de Ley”).)

Prueba plena. Es aquella que se considera suficiente para demostrar la existencia de un hecho o acto jurídico alegado en el proceso.

En términos del CFPC, de aplicación supletoria en materia agraria, hacen prueba plena la confesión expresa, los hechos propios de las partes, los documentos públicos, las certificaciones judiciales o notariales y el reconocimiento o inspección judicial.

La LA, para efectos de la determinación de la pequeña propiedad, señala que los certificados emitidos por la ahora SAGARPA en los que conste el coeficiente de agostadero de las tierras ganaderas, harán prueba plena, así como las inscripciones realizadas por el RAN y las constancias que de ellas expidan. (Véase LA arts. 121, 150 y 167 y cuarto transitorio y CFPC arts. 199-200, 202 y 212 y “Fedatario público”).

Q

Queja. Se entiende como una denuncia contra la conducta indebida o negligente del juzgador o de algunos funcionarios judiciales; las quejas en contra de los servidores públicos del Poder Judicial Federal con motivo de sus funciones, las resuelve y determina su responsabilidad el Consejo de la Judicatura Federal. (Véase LOPIF art. 81 fracc. XII.)

En materia agraria, es la inconformidad que presenta un sujeto agrario denominado quejoso ante la PA, contra conductas, actos u omisiones que consideran violentan sus derechos, atribuibles a alguna autoridad, dependencia o entidad administrativas que actúan o que tienen relación con el ámbito agrario, de sus servidores públicos o en contra del comisariado ejidal y de bienes comunales.

De conformidad con la LA, la PA tiene como atribuciones prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias para hacer respetar el derecho de sus asistidos e instar a las autoridades correspondientes a la realización de las funciones a su cargo; así como denunciar el incumplimiento de las obligaciones o responsabilidades de los servidores públicos en esta materia y los hechos que puedan ser constitutivos de delitos o faltas administrativas, así como atender las denuncias sobre las irregularidades en que incurran los miembros del comisariado ejidal.

Por su parte, el RIPA establece el procedimiento para que el citado organismo atienda las quejas presentadas por los sujetos agrarios, en contra de autoridades, servidores públicos o integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales; estas quejas no requieren de formalidades especiales y para efectos administrativos se dividen en quejas propiamente dichas las que se dirigen en contra de autoridades o servidores públicos y denuncias las que se plantean en contra

de los integrantes del comisariado ejidal. (Véase LA art. 136, fraccs. IV, VI y X y RIPA arts. 5º, fraccs. IX y X, 20, fraccs. II, III, V y 55-75 y “Denuncia” y “Recomendación”).

Quórum. Fórmula legal que determina el número de miembros de una asamblea, necesario para la validez de un acuerdo. Integrantes de una persona moral que deben estar presentes para que una reunión pueda celebrarse válidamente.

En materia agraria, el quórum se traduce en el número mínimo de ejidatarios o comuneros que deberán estar presentes en la asamblea del núcleo para que ésta se celebre válidamente; la LA precisa los supuestos en los que se requiere de una mayoría simple (mitad más uno en primera convocatoria y cualquiera que sea el número de los asistentes en segunda) o de una calificada (dos terceras partes en primera convocatoria y la mitad más uno en segunda) para la toma legal de acuerdos por parte de la asamblea, tomando en cuenta la importancia y repercusión de los asuntos a tratar, por lo que esta división tiene como objetivo que las decisiones adoptadas y que puedan afectar intereses colectivos los apruebe la mayoría de los integrantes del núcleo en forma democrática. (Véase LA arts. 23 y 26 y RLA art. 8º, fracc. II y “Asamblea del núcleo”).

R

Recomendación. En un sentido amplio es proponer, solicitar o instar a alguna persona para que realice alguna acción. Actualmente en el sistema jurídico mexicano los organismos encargados de la protección de los derechos humanos han adoptado esta figura por la que se dirigen en el ámbito administrativo a autoridades, dependencias y entidades o a sus servidores públicos para señalar que determinado acto u omisión es violatorio de derechos de los ciudadanos y aunque la recomendación no es vinculatoria, se emite una vez concluido un procedimiento de investigación y conlleva una serie de conclusiones de las que se infiere que la actuación de a quien se dirige, no se ajusta a la normatividad y, en su caso, puede ser motivo de responsabilidad; además de que a dicha recomendación se le da publicidad para conocimiento de la sociedad.

Con fundamento en la LA, el Procurador Agrario cuenta con facultades para emitir recomendaciones, cuando de la investigación se desprenda la existencia de violaciones graves a la legislación agraria en perjuicio del quejoso, realizada por autoridad o servidor público; este acto tiene por objeto exhortar a quien haya violado la referidas leyes a respetar los derechos afectados por la referida violación.

Las recomendaciones que emita el Procurador Agrario deberán contener como mínimo los resultados en que se describan los hechos y evidencias que

demuestren la violación; los considerandos en que se relacionen los fundamentos jurídicos en que se soporte el acto y los resolutivos en que se expresen las recomendaciones precisas y los plazos para su cumplimiento. Transcurridos estos plazos el Procurador Agrario resolverá sobre su cumplimiento y lo notificará a la instancia que considere correspondiente y en su caso, lo hará del conocimiento público. (Véase LA art. 136, fracc. IV; RIPA 5°, fracc. XII, 11, fracc. IX, art. 20, fraccs. VI, VII y 66, 71-75 y “ Denuncia”, “Queja”.)

Reconocimiento de comunidad. Acción por la cual a una comunidad de hecho o por derecho se le declara formalmente como propietaria de los terrenos que posee, o a que tiene derecho, se le otorga personalidad jurídica en caso de que no la tuviera reconocida; para el ejercicio de esta acción se pueden seguir y concluir cualquiera de los siguientes procedimientos:

- Restitución por despojo de su propiedad (declarada por autoridad competente).
- Jurisdicción voluntaria (ante los tribunales agrarios) por comuneros que no confrontan conflicto de posesión de propiedad comunal.
- La resolución en un juicio agrario promovido por comuneros cuando exista litigio u oposición de parte interesada respecto a la solicitud del núcleo.
- Cambio de régimen ejidal a comunal. (Véase LA arts. 98, 99 y 103 y “Bienes comunales” y “Comunidad”.)

Reconocimiento de parcelamiento económico. Facultad de las asambleas de ejidos y comunidades, celebradas con formalidades especiales para reconocer el parcelamiento de hecho existente dentro de su patrimonio y regularizar la tenencia de dichas parcelas por parte de quienes las detentan.

Este reconocimiento generalmente lo han efectuado los núcleos a través del PROCEDE, aprovechando los trabajos técnicos de dicho programa y la delimitación que en los planos se realiza de las parcelas existentes. (Véase LA arts. 23 fracc. VIII y 56 y “Asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras”.)

Reconvención. Es la acción que la ley concede al demandado para que en un procedimiento administrativo o jurisdiccional, reconvenga al actor exigiéndole prestaciones que pueden formar parte de la controversia. A la reconvención se le conoce jurídicamente también con el término de contrademanda.

En juicio agrario, la reconvención la puede ejercitar el demandado únicamente en el escrito o comparecencia en que conteste la demanda, ofreciendo las pruebas que se estime pertinentes para fundamentar las prestaciones que exige del actor. En este caso el magistrado del tribunal agrario notificará al actor de

la reconvencción para que conteste lo que a su derecho convenga y diferirá la audiencia para que esté en condiciones de realizarla. (Véase LA art. 182 y “Contestación de demanda”.)

Recurso. Medio de impugnación que se interpone en contra de actos administrativos o judiciales, establecido de manera expresa en la normatividad. El recurso faculta a quien se halle legitimado para ejercerlo impugnando la resolución emitida ante un juez o tribunal de mayor jerarquía y de manera excepcional ante el mismo juzgador, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada.

Recurso administrativo de revisión. En materia agraria, en contra de la denegación de registro por parte del RAN o de su calificación negativa, procede el recurso de revisión establecido en la LFPA, siguiendo el procedimiento establecido en la referida ley; el interesado debe interponerlo dentro de los 15 días contados a partir del siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución que se impugne. En contra de esta denegación de la inscripción también procede su impugnación en vía de juicio de amparo indirecto. (Véase LFPA art. 85; Ley de Amparo art. 114 y RIRAN art. 63.)

Recursos de inversión y crediticios. La LA establece que las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo, la formación de unidades productivas, la asociación entre ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y su organización para elevar la productividad. (Véase LA art. 6°.)

Recurso de queja. La Ley de Amparo establece este recurso que pueden ejercitar las partes en el juicio de garantías; destacando por su importancia: contra los autos de jueces de distrito y tribunales colegiados en que admitan demandas notoriamente improcedentes; contra autoridades responsables por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional o definitiva; contra las autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia; contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y perjuicios; contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo, y contra de las resoluciones del juez de distrito en que concedan o nieguen la suspensión provisional.

La referida Ley de Amparo precisa los términos para la interposición del recurso de queja, su procedimiento y la autoridad que deberá resolverlo. (Véase Ley de Amparo arts. 95-102.)

Recurso de revisión en materia de amparo. La Ley de Amparo establece que procede el recurso de revisión: contra las resoluciones de los jueces de distrito que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo; contra las resoluciones de los jueces de distrito que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; contra los autos de sobreseimiento que se dicten en los incidentes de reposición de autos; contra las sentencias dictadas por los jueces de distrito en la audiencia constitucional en materia penal, y contra las resoluciones en amparo directo que pronuncien los tribunales colegiados cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales; tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República y de gobernadores de los estados. La citada ley establece el procedimiento y competencia para la resolución del aludido recurso. (Véase Ley de Amparo arts. 82-94.)

Recurso de revisión en materia agraria. Es la acción que ejercita la parte afectada en contra de una sentencia de los tribunales unitarios agrarios que resuelven en primera instancia cuestiones relacionadas con los límites o restitución de tierras entre núcleos de población ejidal o comunal, o con pequeños propietarios y sociedades; así como la nulidad de actos emitidos por autoridades en la materia.

De conformidad con la LOTA el recurso debe ser resuelto por el Tribunal Superior Agrario, previa su interposición ante el tribunal de origen, dentro del término de diez días posteriores a la notificación de la sentencia que se impugna.

En contra de las resoluciones de este recurso sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente. (Véase LA arts. 198-200 y LOTA art. 9º fraccs. I-III.)

Reforma agraria. Este concepto se empezó a utilizar con posterioridad a las reformas del año de 1934 al Art. 27, entendido como el conjunto de principios y disposiciones establecidas en la Constitución y demás leyes reglamentarias, relativas a la propiedad social de ejidos y comunidades, su organización y desarrollo a la redistribución de la propiedad agraria mediante los procedimientos del reparto de tierras, bosques y aguas y su restitución.

Con posterioridad, se acuñó el concepto de reforma agraria integral, para lo cual fue adicionado el año de 1984 el referido Artículo constitucional con la fracción XX, por la cual se dispuso que el Estado promovería las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional.

Registro Agrario Nacional. Órgano desconcentrado de la SRA, con autonomía técnica y presupuestal, encargado del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental, con motivo de los actos realizados con base en la LA; en dicho órgano deberán inscribirse los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras, así como los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal o comunal.

Para el logro de los objetivos generales señalados, el RAN tendrá funciones registrales, de asistencia técnica y catastral, de resguardo, acopio, archivo y certificación documental.

El RAN será público y cualquier persona interesada podrá obtener información relativa a sus asientos e inscripciones y obtener las copias que solicite.

Por regla general se inscriben en el RAN:

- Las resoluciones judiciales y administrativas que reconozcan, creen, modifiquen o extingan derechos ejidales o comunales; los certificados o títulos que amparen derechos sobre solares, tierras de uso común o parcelas de ejidatarios o comuneros; los títulos primordiales de las comunidades; los planos y actas aprobados en las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras; los planos y documentos relativos al catastro rural; los documentos relativos a las sociedades en términos de la LA; los decretos de expropiación de bienes ejidales o comunales, y los demás actos y documentos que dispongan la LA, sus reglamentos y otra leyes. (Véase LA arts. 148-156; RIRAN arts. 1-2 y “Prueba plena”).

Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria. Instrumento jurídico de carácter administrativo interno, que tiene por objeto determinar la competencia, estructura y establecer las bases de organización y funcionamiento de la PA.

En el RIPA se precisan las facultades de las unidades administrativas que conforman el organismo, se establecen las disposiciones generales de sus procedimientos y se norma en lo particular la actuación de la Institución en los procedimientos de conciliación, arbitraje, quejas, terminación del régimen ejidal y aportación de las tierras ejidales y comunales a una sociedad civil o mercantil. (Véase RIPA y “Procuraduría Agraria”).

Reglamento Interior del RAN. Ordenamiento administrativo de carácter interno, que tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento del citado Registro, conforme a las atribuciones y facultades que expresamente le confiere la LA, otras leyes y reglamentos, así como los acuerdos e instrucción del titular de la SRA.

En el referido Reglamento se establecen las disposiciones generales para el control de la tenencia de la tierra y seguridad documental de los predios rústicos; la competencia de las diferentes unidades administrativas que lo conforman; su sistema registral; la reglamentación para la expedición de los certificados, títulos y certificaciones, así como de los libros de inscripciones, y las disposiciones del catastro rural nacional y de la asistencia técnica. (Véase RIRAN y “Registro Agrario Nacional”).)

Reglamento interno del ejido. Ordenamiento aprobado por la asamblea de ejidatarios, en el que se establecen, como mínimo, las bases generales para la organización económica y social del núcleo y los requisitos para admitir nuevos ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común y las demás que el ejido considere convenientes para su desarrollo interno. Su modificación corresponde igualmente a la asamblea y en él se podrán establecer otras atribuciones a este órgano supremo del ejido, además de las establecidas en la LA. El reglamento del ejido no debe contravenir a la LA.

La LA menciona en diversas disposiciones a este ordenamiento, relacionado con diversos aspectos, como son:

- Derechos de los ejidatarios, además de los que tienen respecto de sus parcelas, sobre las demás tierras ejidales;
- Adquisición del carácter de ejidatarios;
- Designación en su caso, de comisiones y secretarios auxiliares en apoyo al comisariado;
- Establecimiento de otras facultades y obligaciones del comisariado y consejo de vigilancia;
- Aprovechamiento de los aguajes no asignados en lo particular;
- Usufructo de parcela a un grupo de ejidatarios, cuando no hubieren convenido sus derechos;
- Uso de la parcela escolar;
- Y aprovechamiento y acceso a las tierras de uso común, por ejidatarios y vecindados. (Véase LA arts. 10, 14, 15 fracc. II 23, fraccs. I y XV, 32, 33, fracc. V, 35, 36, fraccs. I y IV, 55, 62, 70 y 74.)

Remoción de órganos de representación y vigilancia en núcleos. Facultad de la asamblea de ejidatarios y comuneros para remover, por voto secreto en cualquier momento, de sus cargos a los integrantes del comisariado ejidal o comunal y del consejo de vigilancia.

Al respecto, la LA señala que la asamblea que tome esta determinación podrá ser convocada por el comisariado y en su caso por el consejo de vigi-

lancia; en el supuesto de que estos dos órganos se negaren a convocar, 25% de los ejidatarios o comuneros debidamente acreditados podrá solicitar a la PA que efectúe la convocatoria correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Tomando en cuenta que la LA no establece causales de remoción, las hipótesis pueden ser previstas en el reglamento interno o estatuto comunal, o derivar la remoción por el incumplimiento de las obligaciones determinadas en la LA. (Véase LA arts. 24 y 40.)

Renuncia de derechos ejidales. Facultad que tiene el ejidatario para dejar de pertenecer al núcleo ejidal, renunciando a sus derechos como integrante en favor del ejido; de acuerdo con la interpretación del Poder Judicial se trata de una renuncia traslativa, equiparable a una cesión, por lo cual debe ser expresa y voluntaria. (Véase LA art. 20, fracc. II.)

Reparto de tierras. Era la acción y efecto de los diversos procedimientos agrarios existentes hasta antes de la reforma al Art. 27 en 1992, que tenía por objeto la dotación de tierras a grupos solicitantes carentes de las mismas. Era el reparto de tierras, junto con la restitución, el medio establecido para hacer justicia al campesino mexicano. (Véase Art. 27 antes de la reforma de 1992 y “Reforma agraria”.)

Representación legal. Es el acto por el que se sustituye a otra persona. En sentido general, es una figura jurídica permitida por la legislación, que implica la actuación a nombre de otro, en el campo del derecho.

La LA dispone que es optativo para las partes comparecer con representante legal en el juicio agrario; no obstante, en caso de que una de ellas se encuentre asesorada y la otra no, el magistrado del tribunal agrario solicitará los servicios de la PA, para que designe un abogado que represente a la parte que no cuenta con asesoramiento legal. La normatividad en la materia confiere facultades a este organismo para la defensa de los derechos de los sujetos agrarios en juicio o fuera de él. (Véase LA arts. 135-136, fracc. I, 179 y “Abogado agrario”, “Procuraduría Agraria”.)

Rescisión del contrato. (Del latín *rescissum*, rasgar, romper, dividir algo.) Privación de efectos de un negocio jurídico; anulación de un acuerdo de voluntades por medio de declaración de una o de las partes, por así determinarlo el contrato celebrado o por resolución judicial o administrativa en virtud de incumplimiento de lo pactado.

En virtud de que la legislación en la materia permite a los sujetos agrarios celebrar cualquier contrato de asociación o aprovechamiento respecto de tierras ejidales o comunales, esta acción la pueden ejercitar los contratantes de mutuo acuerdo por así convenir a sus intereses; o bien solicitar su nulidad ante los tribunales agrarios por incumplimiento de alguna de las partes o por contravenir la LA. (Véase LA art. 45, LOTA art. 18 fracc. II y XI y “Contrato”.)

Reserva de crecimiento. Área ubicada dentro del asentamiento humano del núcleo, para el desarrollo de la zona urbana. La asamblea del ejido o comunidad resolverá su delimitación conforme a las leyes de la materia; para su localización y fraccionamiento se requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Cuando la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, incluirá las superficies necesarias para los servicios públicos del poblado. (Véase LA arts. 65-67 y LGAH art. 2, fracc. XVI y “Asentamiento humano” y “Zona de urbanización”.)

Residencia de la Procuraduría Agraria. Oficina del organismo adscrita a una de sus delegaciones en los estados de la República; esta unidad administrativa es competente para representar a la Institución en municipios determinados, desarrollando las facultades establecidas para dichas delegaciones.

Destacan dentro de sus facultades, la representación legal, asesoría, conciliación y arbitraje en favor de los sujetos agrarios; además de la vigilancia en el respeto de sus derechos, garantizar la legalidad de las asambleas en ejidos y comunidades en que interviene y convocar a las mismas de acuerdo con la normatividad. (Véase LA arts. 136 y 144, fracc. IV; RIPA arts. 8°, 30-31 y “Delegación de la Procuraduría Agraria”.)

Resoluciones presidenciales en materia agraria. En términos de la legislación anterior, eran los fallos emitidos por el Titular del Ejecutivo Federal, como autoridad máxima en la materia, en los procedimientos de restitución o dotación de tierras, creación de nuevos centros de población, confirmación de bienes comunales, expropiación de bienes ejidales y comunales, establecimiento de zonas urbanas en los núcleos, entre las más importantes.

Dichas resoluciones eran publicadas en el DOF y tenían el carácter de definitivas e inmodificables, excepto en cumplimiento de sentencias dictadas por los tribunales jurisdiccionales.

Generalmente los ejidos y comunidades tienen como fundamento de su constitución una resolución presidencial y por excepción una sentencia del Tribunal Superior Agrario, emitida como autoridad sustituta, al resolver expedientes de rezago agrario, en términos de las disposiciones transitorias del decreto que modificó la C del año de 1992 y la LA. (Véase LFRA art. 8º y LA 3º transitorio y “Rezago agrario”).

Restitución en materia agraria. En términos generales, restituir es volver una cosa a quien la tenía anteriormente. En la legislación anterior, la acción de restitución permitía que a los pueblos que habían sufrido el despojo de sus tierras, aguas y bosques que poseían, les fueran devueltos, acreditando la propiedad de dichos bienes y comprobando el referido despojo. Este procedimiento contemplado desde la Ley del 6 de enero de 1915 hasta la LFRA, permitió, con la restitución de los terrenos, la conformación de ejidos y comunidades.

La LA prevé la restitución de los bienes de los ejidos y comunidades, cuando hubieren sido privados ilegalmente de ellos, ejercitando la acción de manera directa o a través de la PA ante el tribunal agrario competente y como procedimiento para el reconocimiento de una comunidad. (Véase LFRA arts. 191-194 y 279-285, LA arts. 49 y 98 fracc. I y LOTA 18 fracc. II y “Acción agraria” y “Resoluciones presidenciales en materia agraria”).

Reversión. En términos generales, es restituir una cosa al estado anterior; la devolución de bienes a su anterior dueño. En el ámbito administrativo se utiliza esta figura para restituir al titular afectado de sus propiedades expropiadas.

En materia agraria, esta acción ejercitada por el FIFONAFE tiene como finalidad devolver los terrenos expropiados a los ejidos y comunidades o a sus integrantes, cuando se destinen a un fin distinto del señalado en el decreto respectivo, o si transcurrido un plazo de cinco años no se ha cumplido con la causa de utilidad pública.

El Reglamento correspondiente de la LA establece el procedimiento previo para que el FIFONAFE demande ante los tribunales agrarios la reversión parcial o total de los bienes expropiados; determinando una etapa de investigación para comprobar las causales señaladas anteriormente y otra de conciliación con la dependencia o entidad favorecida, para obtener por vía administrativa dicha reversión.

Ha sido criterio del Poder Judicial que invariablemente tendrá que ser el citado Fideicomiso quien promueva la reversión, sin considerarla como facultad de los núcleos afectados o de sus integrantes. (Véase LA art. 97; RLAMOPR arts. 90-98 y “Decreto expropiatorio” y “Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal”).

Rezago agrario. En términos generales es la acumulación en un tribunal u órgano administrativo de casos no resueltos.

En materia agraria, se consideraba que conforman el rezago los expedientes que al momento de modificarse el Art. 27 en el año de 1992, se encontraban en trámite por no haberse dictado resolución definitiva con base en la legislación anterior y que substanciados debidamente se debían remitir a los tribunales agrarios competentes para su sentencia.

Asimismo, se ha denominado también como rezago en el ámbito administrativo, a aquellos expedientes que contando con resolución definitiva, ésta no ha sido cumplimentada en sus términos; por lo que se requieren de diversas acciones de las autoridades administrativas competentes para que realicen determinadas actividades para concluir el procedimiento. (Véase DRA 27 y LA art. tercero transitorio, LOTA art. 4º transitorio.)

S

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía y estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como con las metas y objetivos propuestos para el sector agropecuario establecidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo.

En el desarrollo de sus funciones, la SAGARPA desarrolla programas de apoyo económico y asistencia técnica a favor de los sujetos agrarios, por lo que cubriendo éstos los requisitos determinados en las reglas de operación correspondientes, tendrán derecho a esos beneficios. (Véase LOAPF art. 35; *Plan Nacional de Desarrollo*.)

Secretaría de la Reforma Agraria. Dependencia que forma parte del sector central de la administración pública federal y está encargada de auxiliar al Titular del Poder Ejecutivo Federal en lo referente a la regularización y seguridad jurídica de la tenencia de la tierra de nuestro país en el ámbito rural. Sus funciones, principalmente las relacionadas con el reparto de tierras y reconocimiento de comunidades, fueron modificadas por las reformas al Art. 27. La SRA es cabeza del Sector Agrario, que comprende al RAN y al FIFONAFE.

Asimismo, destacan dentro de sus facultades instrumentar los procedimientos de expropiación de tierras ejidales y comunales que le presenten las dependen-

cias y entidades promoventes y aquellos que se refieren a la regularización y enajenación, en su caso, de terrenos baldíos y nacionales y de colonias; además continúa desahogando los asuntos en trámite del rezago agrario para ponerlos en estado de resolución y remitirlos al Tribunal Superior Agrario. (Véase DRA 27 art. 3º transitorio; LOAPF art. 41, LA arts. 94 y 160-162 y RLAMOPR arts. 59-65, 111-133 y 134-158.)

Sector Agrario. Instancia administrativa conformada por la dependencia (SRA) y entidades (RAN y FIFONAFE), que de acuerdo con sus atribuciones realizan funciones, que para el logro de planes y objetivos concretos deben coordinar de manera ordenada, en beneficio de la población objeto de cada una de estas instituciones. (Véase *Ley Federal de Entidades Paraestatales* y “Secretaría de la Reforma Agraria”.)

Sentencia en juicio agrario. (Del latín *sententia*, máxima.) Es la resolución que pronuncia el juez o tribunal jurisdiccional o administrativo para resolver el fondo de un litigio, conflicto o controversia, significa la terminación normal del proceso.

En juicio agrario, en el que se dirimen y resuelven las controversias que se suscitan con motivo de la aplicación de la LA, substanciado el procedimiento el tribunal agrario debe emitir su sentencia concluida la audiencia de ley; el fallo se dictará a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas estrictas sobre la valoración de las pruebas, apreciando los hechos y los documentos en conciencia, fundando y motivando la resolución.

Contra las sentencias definitivas de los tribunales agrarios, sólo procederá el juicio de amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.

En materia de derechos individuales, la calidad de ejidatario o comunero se acredita también con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario. (Véase LA arts. 16 fracc. II, 185 fracc. VI, 189 y 200 y “Ejecución de sentencia”.)

Servicios periciales. Actividad que realiza la PA, a través de su Dirección General de Conciliación, Arbitraje y Servicios Periciales, mediante los estudios, peritajes y dictámenes que emite.

Generalmente este servicio consiste en trabajos técnicos-topográficos, de medición y delimitación de superficies, que sirven como prueba en juicio agrario.

De manera excepcional y cubriendo ciertos requisitos se proporciona este servicio en otras materias relacionadas con la aplicación de la LA y auditorías de los fondos comunes ejidales y comunales, a petición expresa de cualquiera de sus órganos. (Véase LA art. 147 y RIPA art. 21, fracs. VII-IX.)

Servidumbre. Derecho o uso que un inmueble tiene sobre otro, para provecho suyo o de utilidad pública (servidumbre de paso). Derecho impuesto por la administración, cualquiera que esta sea, sobre un bien con objeto de atender una necesidad en beneficio de la colectividad.

En materia agraria son comunes las servidumbres de paso, establecidas para la comunicación interna de las tierras ejidales y comunales, las cuales para su uso, generalmente se rigen por la costumbre y en algunos supuestos por el reglamento interno o el estatuto comunal.

La LA únicamente se refiere a esta figura al señalar que las servidumbres de usos y de paso de las aguas del ejido se normarán por las leyes y reglamentos de la materia. (Véase LA art. 53 y “Reglamento Interno del Ejido”).

Sesión permanente. Esta figura se presenta cuando la asamblea de ejidos y comunidades determina constituirse en reunión “permanente”, con el objeto de desahogar todos los puntos contenidos en el orden del día; generalmente estas asambleas se desarrollan en diversas fechas aunque se trate de una sola, tomando en cuenta la naturaleza, complejidad y número de los asuntos a tratar, o bien el número de los integrantes del núcleo.

La normatividad en la materia únicamente se refiere a esta figura en el RLA, respecto de las asambleas de delimitación, destino y asignación de tierras, en las que permite constituirse en sesión permanente cuando así lo acuerde la mayoría de los presentes, aprobando a propuesta del presidente de la mesa de debates, los periodos de receso. (Véase LA art. 23 y RLA art. 13.)

Sistema de capacitación campesina. Conjunto de acciones que realiza la PA para capacitar a jóvenes campesinos en el conocimiento de los cambios constitucionales y de la Ley en la materia. Su objetivo es difundir entre los sujetos agrarios la naturaleza y alcances de la legislación agraria, así como dar a conocer los programas y procedimientos de la PA.

Sistema registral del RAN. Conjunto de normas y procedimientos establecidos por el RAN, que tienen por objeto la calificación e inscripción de los actos jurídicos y documentos que conforme a la LA y sus reglamentos, deban registrarse, así como su ordenación en folios e integración de los índices.

Dentro de este sistema se norman las actividades de los registradores, se precisan los conceptos y utilización de folio agrario y asientos, se determinan los procedimientos especiales para el ordenamiento de la propiedad rural y los documentos susceptibles de registro; se norma la calificación e inscripción, así como la modificación y cancelación de asientos y se establecen las reglas para el

depósito de las listas de sucesión. (Véase RIRAN arts. 35-88 y “Registro Agrario Nacional”.)

Sistema Único de Información (SUI). Sistema informático establecido en la PA, por medio del cual sus servidores públicos en la estructura territorial comunican los asuntos y acciones que en ejercicio de sus atribuciones atienden, así como su desarrollo y conclusión.

Esta base de datos le permite a la Institución valorar el desempeño y cumplimiento de metas de sus residencias y delegaciones y del personal que las conforman; además de contar con información actualizada de los asuntos de su competencia; independientemente de clasificar dicha información en los rubros que se consideren convenientes y con ello transparentar su actuación.

Sobreseimiento. Resolución judicial por la que se declara que existe un impedimento jurídico o de hecho, que impide la sentencia sobre el fondo del asunto o controversia.

En materia de amparo, el sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad responsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado y procede en los siguientes casos:

- Cuando el agraviado se desista expresamente de la demanda;
- Cuando el agraviado muera durante el juicio y la garantía sea persona;
- Cuando durante el juicio se presente alguna de las causales de improcedencia por las que se deba de negar la protección constitucional;
- Cuando se acredite que no existe el acto reclamado o no se pruebe su existencia;
- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, y
- Cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, no se haya efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días naturales. (Véase LDA arts. 74 y 75.)

Sociedades civiles. Corporaciones privadas con personalidad jurídica, constituidas por dos o más personas a partir de un contrato, para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, que no constituye una especulación comercial. Para su creación, los socios contribuyen mediante la aportación de bienes o desarrollo de servicios.

La comunidad, el ejido o sus integrantes podrán constituir sociedades civiles con la aportación de las tierras de uso común, previo acuerdo de asamblea en el caso de los núcleos o proporcionar el usufructo de sus parcelas para dicha sociedad en el supuesto de ejidatarios y comuneros. (Véase LA arts. 23, 45, 75 y 79 y “Aportación de tierras”.)

Sociedad cooperativa. Forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Conforme a este concepto los ejidatarios y comuneros podrán formar este tipo de sociedades, siempre y cuando así convenga a sus intereses.

Sociedades mercantiles. Personas morales constituidas legalmente con la finalidad de combinar sus recursos y esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico y cuya finalidad constituya una especulación comercial.

La LA faculta a las asambleas de ejidos y comunidades para aportar tierras de uso común a sociedades mercantiles ya constituidas o para crear nuevas, cumpliendo con los requisitos establecidos en la referida ley. En el supuesto de que la sociedad mercantil tenga una orientación rural, el objeto social será preponderantemente la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y los demás actos necesarios para el cumplimiento de su objeto. (Véase Art. 27 fracc. IV; LA arts. 23, fracc. IX, 75, 125-133 y CCF arts. 2688-2735.)

Sociedad de producción rural. Figura asociativa constituida por dos o más productores rurales (núcleos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, otras sociedades, etc.), cuyo objeto es la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la legislación. Para la constitución y administración de la sociedad de producción rural (SPR), se debe contar con el acta constitutiva otorgada ante fedatario público e inscrita en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. (Véase LA arts. 108, 109, 111 y 113.)

Sociedades propietarias de tierras. Son las sociedades mercantiles o civiles que tienen en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales en los términos establecidos por la LA. En caso de manifiesta utilidad, tanto el ejido como la comunidad podrán transmitir el dominio de las tierras de uso común a dichas personas morales.

Las sociedades propietarias de tierras podrán tener en extensión hasta 25 veces los límites de la pequeña propiedad individual. Preponderantemente su objeto será la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales.

El capital social deberá distinguir una serie de acciones con la letra “T”, que serán equivalentes al capital aportado en tierras o al destinado a la adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de las acciones al momento de su aportación o adquisición. (Véase Art. 27, fraccs. IV y VII, y LA arts. 23 fracc. IX, 75, 100 y 125-133 y “Acciones Serie T”, “Aportación de tierras”).

Socio. Genéricamente se llaman socios a las personas que comparten responsabilidades y beneficios de una actividad. En sentido estricto, se entiende por socios a los elementos personales de la estructura jurídica de una sociedad civil o mercantil.

La LA permite la asociación entre los sujetos agrarios y con terceros y por ello los núcleos y los ejidatarios y comuneros podrán tener el carácter de socios en las sociedades de las que sean miembros, con los derechos y obligaciones establecidos en los estatutos de la persona moral así como los que determine la asamblea de la sociedad en la que participen. (Véase LA arts. 45 y 112.)

Solares urbanos. Terrenos destinados a la edificación de casas, superficie lotificada ubicada en la zona de urbanización dentro de las tierras del asentamiento humano del ejido o comunidad.

La LA determina que todo ejidatario tiene derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, para lo cual la asamblea hará la asignación de lotes. Los solares vacantes como propiedad del ejido, podrán ser arrendados o enajenados a las personas que deseen avecindarse en el poblado. Los solares serán de propiedad plena de sus titulares al recibir el documento correspondiente y a partir de ese momento el ejercicio de sus derechos se regulará por la legislación civil en el fuero común. (Véase LA art. 64-68; RLA arts. 47-52 y “Asentamiento humano”, “Zona de urbanización”).

Subasta de derechos agrarios. Sinónimo de remate y almoneda. Conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad realizar la venta forzada de bienes para el cumplimiento de una obligación por su propietario.

La LA dispone la utilización de esta figura cuando no existan sucesores o haya dos o más personas con derecho a heredar y no se pusieran de acuerdo, para lo cual el tribunal agrario pondrá a la venta los derechos ejidales en subasta pública al mejor postor de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo agrario y repartirá el producto por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar o lo entregará al núcleo ejidal o comunal según sea el caso. (Véase LA arts. 18 y 19; LOTA art. 18, fracc. VII.)

Sujeto agrario. Término que designa de manera general a aquellas personas a quienes les es aplicable la legislación agraria. Para la LA y el RIPA son sujetos agrarios y objeto de los servicios de la PA, los siguientes: ejidatarios, comuneros, sucesores de éstos, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avocindados, posesionarios, jornaleros agrícolas, colonos, poseedores de terrenos baldíos o nacionales y campesinos en general. (Véase LA art. 135 y RIPA art. 1º y “Avecindado”, “Colono” “Comunero”, “Comunidad”, “Ejido”, “Sucesor” y “Pequeño propietario”.)

Suplencia de la queja. Potestad conferida al juez para que en los casos señalados en la legislación subsane el error o la insuficiencia en que incurrió el quejoso al formular su demanda. El ejercicio de esta facultad no es discrecional sino una obligación para el juzgador. Esta figura se establece de manera precisa en el juicio de amparo en materia penal, agraria y del trabajo.

En el juicio de amparo los juzgados y tribunales competentes deberán suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos en que sean parte como quejosos o como terceros los núcleos de población ejidal o comunal y los ejidatarios o comuneros o aspirantes a serlo, en los que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad o posesión de sus bienes ejidales o comunales.

En el juicio agrario, los tribunales en la materia están obligados a suplir la deficiencia en sus planteamientos de derecho cuando se trate de ejidos o comunidades o de ejidatarios o comuneros. (Véase LDA arts. 76-bis, 212 y 227 y LA, art. 164.)

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Máxima autoridad judicial, que junto con los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito constituyen el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la integran ministros numerarios y supernumerarios y funciona en Pleno o en Salas, de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dentro de sus principales atribuciones conoce de los siguientes asuntos:

- De las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad;
- Del recurso de revisión cuando se impugne la constitucionalidad de leyes federales, estatales o de un tratado internacional;
- Del recurso de revisión, cuando ejercite la facultad de atracción en asuntos de interés general y trascendentales;
- Del recurso de revisión cuando se plantee la interpretación de un precepto de la C, y

- De las denuncias de contradicción de tesis. (Véase c art. 94 y LOAPF art. 10.)

Suspensión. En materia de amparo esta figura jurídica se refiere a detener los efectos del acto reclamado y es decretada por el juez de distrito, de manera provisional o definitiva o por el Tribunal Colegiado de Circuito como suspensión definitiva; de acuerdo con la normatividad se emite de oficio o a petición de parte.

Los efectos de la suspensión en juicio de garantías son los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas para evitar la consumación de los actos reclamados.

En juicio agrario, el tribunal competente dictará las diligencias precautorias necesarias para proteger los intereses de las partes y, en su caso, podrá acordar la suspensión del acto de autoridad que pudiere afectar a los sujetos agrarios en tanto se resuelve el procedimiento. Dicha suspensión se regulará aplicando supletoriamente la LDA.

Este término, con una connotación diferente se prevé también en el juicio agrario, en el supuesto de que el tribunal agrario ordene la suspensión del juicio cuando se declare incompetente para conocer del litigio por razón de jurisdicción o competencia; asimismo, cuenta con atribuciones para suspender el procedimiento cuando una de las partes se encuentra asesorada y la otra no, en tanto solicita los servicios de un defensor de la PA. (Véase LDA, arts. 122-144 y 170-176 y LA arts. 166, 168 y 179.)

Sustanciar. Conducir un asunto o juicio por vía procesal hasta ponerlo en estado de sentencia. Tramitar un juicio.

La LA establece que el juicio agrario tiene por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias en materia agraria, entendiendo por la primera acción el desahogo de las etapas procesales previstas en la referida legislación, antes de emitir el tribunal agrario la sentencia correspondiente. (Véase LA art. 163.)

T

Tenencia de la tierra. Este término alude a las distintas formas de propiedad en que las personas físicas o morales se vinculan jurídicamente con la tierra, para los efectos de apropiación de los recursos y productos derivados de la misma.

El sistema jurídico mexicano establece en la c tres formas generales de tenencia de la tierra y que son: la propiedad de la nación (o federal), la propiedad social (o de los ejidos y comunidades) y la propiedad particular (propiedad privada o pequeña propiedad). (Véase Art. 27.)

Tercero perjudicado. Persona física o moral a la que se da el carácter de posible afectado en un juicio promovido para solicitar la protección constitucional y a quien se emplaza para que comparezca a manifestar su interés jurídico y alegar lo que a su derecho convenga. Es requisito formal de la demanda de amparo señalar al tercero perjudicado.

En materia de amparo pueden intervenir con el carácter de tercero perjudicado:

- La contraparte del agraviado;
- El ofendido o las personas que tengan derecho a la reparación del daño, y
- La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo. (Véase LDA art. 5º.)

Término. (Del latín *terminus*; límite de una cosa material o inmaterial.) Momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos; se denomina también plazo. Se conoce como término judicial aquel que fija el juez y como legal al que se encuentra expresamente fijado por la ley.

La LA como cualquier otra disposición normativa, establece términos para el ejercicio de acciones por los sujetos agrarios; además de otros términos que se fijan para la duración de funciones de órganos de representación y vigilancia en ejidos y comunidades; o términos para la realización de una actividad por parte de las instituciones. (Véase LA arts. 61, 84, 181, 191, 199, 200, 39, 109 y 25.)

Terminación del régimen ejidal. Facultad de la asamblea del ejido cuando, previo dictamen de la PA, se determina que ya no existen las condiciones para su permanencia.

Este procedimiento inicia con la petición formal a la PA, por el órgano de representación del núcleo, para que emita el dictamen señalado, por el que en su caso se establece que ya no existen las condiciones jurídicas y materiales para que continúe su vida como ente de propiedad social.

La emisión del referido dictamen la realiza el titular de la PA y ordena su publicación en el DOF y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido. Tomada la determinación por la asamblea, este organismo promoverá el procedimiento para efectuar las cancelaciones respectivas en el RAN.

Para la terminación del régimen ejidal, se debe prever la liquidación de las obligaciones subsistentes del núcleo y, en su caso, la asignación de derechos en pleno dominio. Algunas de las causas más recurrentes por las que se pudiera solicitar la referida terminación son la desavencindad de la totalidad de los inte-

grantes o la desincorporación de la mayor parte de las tierras del patrimonio del ejido, vía expropiación o adopción del dominio pleno. (Véase LA art. 23, fracc. XII y 29 y RIPA arts. 76-81.)

Terrenos baldíos. (Véase “Baldíos”.)

Terrenos nacionales. Terrenos de propiedad de la nación, sobre los cuales el Ejecutivo Federal puede ejercitar actos de administración y dominio.

Conforme a la LA, los terrenos nacionales son los baldíos deslindados y medidos que recobra la nación. La SRA efectúa estas actividades y emite la aclaratoria correspondiente; asimismo está facultada para enajenarlos a título oneroso fuera de subasta a los particulares, de acuerdo con el valor que fije el Comité Técnico de Valuación de la propia dependencia, cuando se trate de tierras con vocación agropecuaria o del avalúo que emita el INDABIN cuando los terrenos se puedan destinar a fines turísticos, urbanos o industriales.

Tienen preferencia para adquirir terrenos nacionales sus poseedores que los hayan usufructuado en los últimos tres años. (Véase LA arts. 160-162 y RLAMOPR arts. 99-102 y “Avalúo”, “Comité técnico de valuación”, “Deslinde”.)

Testamento. Acto jurídico, unilateral, personalísimo, revocable, libre y formal, por medio del cual una persona física capaz, dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte.

En materia agraria, el ejidatario o comunero tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a esas calidades, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación a su fallecimiento. (Véase LA art. 17.)

Tierras de grupos indígenas. Terrenos ocupados de hecho o por derecho por grupos que pertenecen a una etnia determinada y que son poseídos y usufructuados generalmente de acuerdo con sus usos y costumbres; por mandato constitucional deben contar con una protección especial.

En los juicios agrarios en que se involucren tierras de grupos indígenas, los tribunales agrarios deberán considerar para su resolución, los usos y costumbres de estas comunidades, en tanto no contravengan lo dispuesto por la LA, ni afecten derechos de terceros; asimismo, se asegurarán que cuenten con intérpretes cuando se haga necesario. (Véase C art. 2º y LA art. 164 y “Comunidad indígena”.)

Tierras de uso común. Son terrenos ejidales o comunales que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad de los núcleos y, por exclusión,

están conformadas por aquellas tierras que no han sido reservadas por la asamblea para el asentamiento humano, ni destinadas y asignadas como parcelas.

La Ley dispone que la propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, con la única excepción permitida por la LA y que se refiere a los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal o comunal, en donde éste podrá transmitir el dominio de estas tierras a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o la comunidad y sus integrantes.

Los derechos sobre las tierras de uso común se presumen concedidos por la asamblea en partes iguales y los certificados que acrediten esos derechos deberán inscribirse en el RAN.

La asamblea del ejido es competente para aprobar los convenios que tengan por objeto el uso o disfrute de las tierras de uso común por parte de terceros; así como ofrecer su usufructo en garantía, con motivo de algún acto jurídico que celebre el ejido o comunidad. (Véase LA arts. 23, fraccs. V y IX, 46, 56, 73-75 y 152.)

Tierras de asentamiento humano. Es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Está compuesta por los terrenos en que se asienta la zona urbana y su fundo legal; es decir, el área para la habitación y los servicios. De conformidad con lo que establece la LA son inalienables, imprescriptibles e inembargables y conforman el área irreductible del ejido, excepto los solares que son propiedad plena de sus titulares, una vez asignados formalmente.

La LA contempla la misma protección de las tierras de asentamiento humano a la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer y la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud. (Véase Art. 27 fracc. VII, LA 63-72 y “Solares urbanos” y “Zona de urbanización”.)

Tierras ejidales. Son los terrenos patrimonio de un ejido, concedidos por alguna de las acciones agrarias dotatorias de tierras o que hubieren adquirido por cualquier otro medio y hayan sido incorporadas al régimen ejidal. Por su destino, se dividen en tierras para el asentamiento humano, de uso común y parceladas; la propiedad sobre estas tierras cuenta con una protección constitucional tanto para la superficie en la que se ubique el asentamiento humano, como para la destinada a actividades productivas.

El RAN deberá registrar cualquier operación que implique la cesión de derechos de sus integrantes sobre las tierras ejidales; los ejidos podrán ejercitar la acción de restitución cuando hayan sido privados de ellas; la adopción del dominio pleno sobre las parcelas no implica cambio alguno en la naturaleza ju-

rídica de las demás tierras; la asamblea del ejido está facultada para resolver el tipo de explotación respecto de las tierras no asignadas en lo individual. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 9º, 11, 44, 49, 83 y 155 fracc. III y “Asentamiento humano”, “Tierras de uso común” y “Tierras parceladas”).

Tierras parceladas. Superficie productiva de las tierras ejidales que fue fraccionada y cuyo derecho de aprovechamiento, uso y usufructo corresponde, de cada parcela, al ejidatario al que se le hubiere asignado ese derecho. La asamblea del núcleo cuenta con facultades para determinar dicho parcelamiento en favor de sus integrantes.

Los ejidatarios podrán otorgar en garantía el usufructo de sus parcelas y celebrar respecto de ellas cualquier contrato de asociación o aprovechamiento e incluso enajenar sus derechos a otros ejidatarios o vecindados. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 44, 56, 76, 77 y 80 y “Tierras ejidales”, “Contrato”).

Titular de derechos agrarios. Ejidatario o comunero al que le corresponde el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas y tierras de uso común, así como los demás derechos que el reglamento interno o estatuto comunal, según sea el caso, les otorgue sobre los demás bienes ejidales y los que les correspondan por contar con esta categoría.

La calidad de ejidatario o comunero se acredita: con el certificado de derechos agrarios, certificado parcelario o de derechos sobre tierras de uso común y con la sentencia o resolución del tribunal agrario. (Véase Art. 27, fracc. VII y LA arts. 14, 16 y 101 y “Estatuto comunal”, “Reglamento interno”, “Tierras de uso común” y “Tierras parceladas”).

Título de propiedad. En términos generales se refiere a la causa, razón o motivo que da derecho a algo y también al documento en el que consta ese derecho. En sentido jurídico es una relación existente entre una o más personas respecto de un bien, así como el instrumento que prueba esa relación.

La LA dispone que el RAN emitirá el título de propiedad respectivo cuando el ejidatario asuma el dominio pleno sobre sus parcelas, documento que será inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Asimismo, la ley de la materia establece que cuando la asamblea efectúe la asignación de solares a ejidatarios y vecindados, el acta respectiva se inscribirá en el RAN y los certificados que expida de cada solar constituirán los títulos de propiedad a favor de su titular, documentos que deben ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la localidad. (Véase LA arts. 68, 69 y 82 y “Dominio pleno”, “Solares urbanos”).

Trabajos topográficos informativos. Levantamientos topográficos que se realizan con la finalidad de verificar linderos o colindancias, determinar y ubicar una superficie, medir un predio, etc. Estos trabajos los realiza un especialista técnico debidamente acreditado; al concluir los mismos generalmente elabora un informe técnico de resultados y, de requerirse, una opinión como perito en la materia.

Los referidos trabajos pueden ubicarse dentro de los servicios periciales que proporciona la PA, siempre y cuando se realicen dentro de un procedimiento conciliatorio, en apoyo a una investigación de excedentes de la propiedad rural, constitución o localización de parcelas con destino específico, superficies aportadas al desarrollo urbano a una sociedad civil o mercantil, identificación de terrenos en posesión precaria, entre otras acciones; a solicitud de los sujetos agrarios o de las unidades administrativas de la propia Institución. (Véase RIPA art. 21 fraccs. VII-VIII y “Servicios periciales”).

Transferencia documental. Entrega-recepción de los archivos agrarios relacionados con la propiedad ejidal y comunal que obraban en poder de la SRA y que fueron trasladados al RAN, con el propósito de establecer un esquema de control y uso que garantice su conservación, preservación y custodia.

También se le conoce como transferencia documental al envío de la SRA al Tribunal Superior Agrario, de los expedientes debidamente integrados pendientes de resolución, considerados como rezago agrario, para la emisión del fallo que los concluya, en términos de las disposiciones aplicables de la LA. (Véase DRA 27 art. 3º transitorio y LA art. tercero transitorio.)

Tribunales Agrarios. Órganos federales instituidos por la C para la administración e impartición de la justicia agraria, dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. Se encuentran integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente. Están conformados por el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. El territorio de la República se dividirá en distritos y en cada uno de ellos habrá el número de Tribunales Unitarios que determine el Tribunal Superior. (Véase Art. 27, fracc. XIX y LOTA arts. 1º, 3º, 5º, 8º y 9º y “Magistrado”, “Tribunal Superior Agrario y “Tribunal Unitario Agrario”).

Tribunal Superior Agrario. Órgano máximo para la administración de justicia agraria, integrado por cinco magistrados, presidido por uno de ellos al que se le denomina Presidente; tiene su sede en el Distrito Federal.

Son facultades del Tribunal Superior Agrario:

- Resolver los recursos de revisión en contra de las sentencias emitidas por los tribunales unitarios establecidas en la LA;
- Resolver los conflictos de competencia entre los tribunales unitarios;
- Establecer la jurisprudencia cuando se cumplan los requisitos determinados por la normatividad;
- Conocer de los impedimentos y excusas de los magistrados, y
- Conocer de las excitativas de justicia.

El Tribunal Superior Agrario cuenta con atribuciones para fijar el número y límite territorial de los distritos y con base en ello establecer el número y sede de los tribunales unitarios; así como resolver respecto de las cuestiones administrativas relacionadas con las renunciaciones y licencias de los magistrados, suplencias, cambios de adscripción y nombramiento, remoción y suspensión de secretarios, actuarios y peritos.

Igualmente, el Tribunal Superior Agrario conocerá de las denuncias o quejas en contra de los servidores públicos de los tribunales agrarios y determinará las sanciones administrativas que deban aplicarse. (Véase LA arts. 169 y 200 y LOTA arts. 3º, 4º, 8º y 9º y “Magistrado”, “Tribunales Agrarios”).

Tribunal Unitario Agrario. Órgano competente para la administración de justicia agraria en una circunscripción territorial determinada. Está a cargo de un funcionario judicial denominado Magistrado.

Los Tribunales Unitarios Agrarios serán competentes para conocer:

- De las controversias por límites entre ejidos y comunidades y de éstos con propietarios;
- De la restitución de bienes a los núcleos o a sus integrantes;
- Del reconocimiento del régimen comunal;
- Del juicio de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que vulneren los derechos de los sujetos agrarios;
- De los conflictos relacionados con las tierras ejidales o comunales;
- De las controversias en materia agraria de integrantes de los núcleos entre sí y entre éstos y los órganos de ejidos y comunidades;
- De controversias en la sucesión de derechos ejidales y comunales;
- De las nulidades por actos y contratos que contravengan las leyes agrarias;
- De las omisiones en que incurra la PA en perjuicio de los sujetos agrarios;
- De la jurisdicción voluntaria en materia agraria;
- De las controversias relativas a los contratos de tierras ejidales;
- De la reversión en materia de expropiación;

- De la ejecución de los convenios conciliatorios formalizados durante el juicio agrario, y
- De los demás asuntos que determinen las leyes aplicables. (Véase LOTA arts 2º-5º y 18 y “Magistrado”, “Tribunales Agrarios”.)

U

Unidad Agrícola Industrial de la Mujer. Parcela localizada en las mejores tierras del ejido, colindantes preferentemente con la zona de urbanización, destinada por la resolución presidencial dotatoria de tierras o sentencia del Tribunal Superior Agrario o la asamblea del núcleo, al establecimiento de una granja agropecuaria de industrias rurales explotada colectivamente por las mujeres del ejido o comunidad mayores de 16 años. La LA establece que está protegida de la misma manera que las tierras reservadas para el asentamiento humano, por lo que es inalienable, imprescriptible e inembargable.

En funcionamiento esta unidad, generalmente se efectúa a través de una figura asociativa, a efecto de obtener los créditos y apoyos gubernamentales necesarios para su desarrollo. Su extinción sólo podrá darse por haberse cumplido el objeto para el que fue creada, establecido en su caso, en los estatutos de la asociación o por expropiación. (Véase LA arts. 63-64 y 71.)

Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud. Parcela destinada para constituir la unidad productiva, para el desarrollo integral de la juventud, en la que además se realizarán actividades culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo, en beneficio de los hijos de ejidatarios, comuneros y vecindados mayores de 16 y menores de 24 años. La administración y los gastos de operación de esta parcela corren a cargo de quienes integran la unidad. La LA establece que está protegida de la misma manera que las tierras del asentamiento humano por lo que es inalienable, imprescriptible e inembargable. (Véase LA arts. 63-64 y 72.)

Unión de ejidos y comunidades. Figura asociativa que contempla la LA, se constituye con dos o más ejidos o comunidades, cuyo objeto es la coordinación de actividades productivas, comercialización, asistencia mutua u otras no prohibidas por la ley.

Para constituir la unión se requiere el acuerdo de la asamblea de cada uno de los núcleos para este efecto, debe elaborarse el acta constitutiva que contenga los estatutos de la figura asociativa otorgada ante fedatario público, la cual se inscribirá en el RAN.

La PA en el ámbito de sus atribuciones, asesora jurídicamente para la constitución de figuras asociativas y emite opinión respecto de la legalidad de sus actos constitutivos. (Véase LA, arts. 108-114 y “Figuras asociativas”).

Unión de Sociedades de Producción Rural. Figura asociativa contemplada en la LA, constituida con la unión de dos o más sociedades de producción rural, su objeto es la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización y otras vinculadas con las actividades económicas de sus socios.

Para su constitución se requiere de la conformidad de cada una de las asambleas de las sociedades que la integrarán, conforme a los estatutos que las rigen. El acta constitutiva de la unión y el estatuto de la nueva persona moral, deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio.

La PA en el ámbito de sus atribuciones, asesora jurídicamente para la constitución de figuras asociativas y emite opinión respecto de la legalidad de sus actos constitutivos. (Véase LA arts. 111-113 y RIPA art. 22 y “Figuras asociativas”, “Sociedad de Producción Rural”).

Uso (usufructo). En la legislación civil es el derecho real que otorga al usuario la facultad de percibir los frutos de una cosa ajena, las que basten a cubrir sus necesidades y las de su familia. Cuando se traspasa a un tercero en forma temporal el derecho de uso y disfrute de la cosa, bajo la forma de un derecho real toma el nombre de usufructo. Al titular de este nuevo derecho se le designa con el nombre de usufructuario y de nudo propietario al titular del derecho de dominio. El usufructuario adquiere la facultad de hacer suyo todo lo que produce el bien, con la obligación de mantener su sustancia.

En materia agraria, estos conceptos se relacionan con los derechos que tienen los ejidatarios, comuneros y en ocasiones posesionarios sobre las tierras ejidales o comunales, que les permiten el uso y usufructo de sus terrenos por contar con un documento o acuerdo de asamblea que amparan estos derechos.

La LA establece que corresponde a los ejidatarios y comuneros el uso y usufructo de sus parcelas; que el uso de las tierras de uso común de los núcleos se regulará por el reglamento interno o estatuto comunal y que el usufructo de las parcelas de los ejidatarios podrá ser otorgado en garantía con motivo de los contratos que celebre. (Véase LA arts. 14, 46, 74, 100 y 107 y “Garantía”, “Tierras parceladas” y “Tierras de uso común”).

Usos. (Véase “Costumbre”).

V

Visitador agrario. Para el ejercicio de sus funciones, la PA cuenta entre otros servidores públicos, con el denominado visitador agrario, quien tiene una formación académica a nivel licenciatura y que ha sido seleccionado, capacitado y evaluado dentro de un servicio profesional de carrera de la propia institución, con el objeto de que cumpla eficientemente con las responsabilidades conferidas.

El visitador agrario desarrolla sus actividades directamente en los ejidos y comunidades que le fueron asignados por la delegación o residencia de la PA a la que se encuentra adscrito y ello le permite atender de manera directa a los sujetos agrarios señalados en la LA y el RIPA de manera oportuna.

Destacan dentro de las acciones que lleva a cabo, la conciliación de intereses en las controversias entre dichos sujetos; su orientación en los trámites y gestiones ante autoridades e instancias de los tres niveles de gobierno; vigila y previene el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los órganos del núcleo y de sus integrantes; asesora a los sujetos agrarios en su organización interna así como en los procesos de asociación entre sí, con otros núcleos o particulares.

La función del visitador agrario coadyuva a resolver los conflictos que se presentan al interior de los ejidos y comunidades y previene otros cuando otorga el debido asesoramiento a sus asistidos; en muchos de los núcleos es el contacto de primera mano que tiene los sujetos agrarios con el gobierno federal para solucionar sus problemas, hacer valer sus derechos o gestionar la obtención de apoyos y otras prerrogativas ante diversas instancias. (Véase RIPA art. 29-31 y “Delegación”, “Residencia”.)

Votación económica. Sistema de conteo de votos, en asamblea de ejidos y comunidades por la que los asistentes manifiestan su conformidad con las propuestas presentadas, y determinar su mayoría para que se conviertan en acuerdos. Los escrutadores designados deben contar los votos tomando en cuenta las manos levantadas.

Votación nominal abierta. Sistema de votación de las asambleas de ejidos y comunidades en el que conforme a la lista de asistencia, se pregunta el sentido de voto a cada ejidatario o comunero, a efecto de determinar la mayoría que pudiera en su caso aprobar el planteamiento. Los escrutadores designados deben anotar el voto junto al nombre. Este sistema de votación se utiliza para las asambleas de formalidades especiales.

Votación nominal secreta con escrutinio público. Sistema de votación en asambleas de ejidos y comunidades por el que conforme a la lista de asistencia, cada ejidatario o comunero es llamado para que deposite el sentido de su voto por escrito, sin necesidad de anotar su nombre; los escrutadores efectúan la contabilidad de los votos de manera inmediata y pública, ante los presentes en la reunión. Este sistema se utiliza preferentemente en las asambleas de elección o remoción de órganos de representación y vigilancia.

Z

Zona urbana. Terreno en donde se ubica un centro de población y su reserva de crecimiento. Su localización y relocalización en caso de que no exista previamente de manera legal, es competencia de la asamblea de ejidatarios y comuneros, la delimitación de esta zona deberá efectuarse con la intervención de las autoridades competentes en materia de desarrollo urbano y conforme a la normatividad aplicable. (Véase LA arts. 23 fracc. VII, 63, 65-67 y LGAH arts. 3, 11-19 y 56 y “Asentamiento humano”.)

Zona de urbanización. Área destinada para la edificación de las viviendas de ejidatarios, comuneros y avocindados, en ella se ubican los solares asignados por la asamblea, así como el establecimiento de servicios urbanos necesarios para la convivencia comunitaria. La asamblea del ejido cuenta con facultades para destinar dentro de la zona de urbanización las superficies necesarias para los servicios públicos; asimismo podrá aportar dichas tierras, con la intervención de la PA al municipio o entidad correspondiente. (Véase LA arts. 23, fracc. VII, 63-68; LGAH arts. 3º, 11-19 y 56 y “Asentamiento humano”, “Junta de pobladores” y “Zona urbana”.)

Zona federal. Propiedad pública cuya titularidad la ejerce el Estado, a través de sus dependencias o entidades competentes; se encuentra incorporada al patrimonio federal; por regla general su administración corresponde a la Secretaría de la Función Pública por conducto del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

La zona federal puede ser marítimo-terrestre, de derechos de vía en materia de comunicaciones, de seguridad nacional, para la conducción de energía eléctrica, para la explotación y conducción de hidrocarburos, además de todos aquellos terrenos que fueron expropiados y que pertenecen al gobierno federal.

La reglamentación aplicable, tomando en cuenta el destino de cada zona federal, determina sus modalidades y limitaciones, así como el hecho de que pueda ser otorgada mediante concesión o permisos.

En terrenos ejidales o comunales pudieran existir zonas federales debidamente delimitadas, en las que los sujetos agrarios deberán observar las disposiciones correspondientes que regulan estas zonas. (Véase LGBN arts. 49-56 y 119.)

Documentos

- Burgoa Orihuela, Ignacio. *Renovación de la Ley de Amparo*, México: IJ-UNAM, 2000.
- García Ramírez, Sergio, *Elementos de Derecho Procesal Agrario*, México: Porrúa, 1993.
- Gallardo Zúñiga, Rubén, *Prontuario Agrario*, México: Porrúa, 2ª ed., 2004.
- Gómez Lara, Cipriano, *Teoría General del Proceso*, México: Oxford, 9ª ed., 2004.
- Hernández Chávez, Alicia, *Hacia un Nuevo Federalismo*. México: FCE, 1996.
- Hinojosa Ortiz, José, *Glosario de Términos*, México: CNIA-SARH, t. II, 1987.
- Nazar Sevilla, Marcos A., *Procuración y Administración de Justicia Agraria*. México: Porrúa, 1999.
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), *Tesaurus Plurilingüe de Tierras*, Roma, 2003.
- Procuraduría Agraria, *El Auxiliar de Visitador*, México, 1993.
- Procuraduría Agraria, *Manual de Operación. Sistema Único de Información*, México, 2001.
- Procuraduría Agraria, *Manual de Visitador*, México, 2004.
- Procuraduría Agraria, *Manual para la Atención de Quejas y Denuncias*, México, 1998.
- Procuraduría Agraria, *Manual para el Procedimiento Arbitral*, México, 1998.
- Procuraduría Agraria, *Marco Legal Agrario*, México, 2004.
- Procuraduría Agraria, Dirección de Capacitación, *Programa de Capacitación*, México, 2005.
- Procuraduría Agraria, *Recomendaciones para Mejorar la Elaboración del Diagnóstico Ejidal*, México, 1994.
- Rivera Rodríguez, Isaías, *El Nuevo Derecho Agrario Mexicano*, México: Mc Graw Hill, 2ª ed., 2003.
- Secretaría de la Reforma Agraria, *Programa Sectorial Agrario 2001-2006*, México, 2001.

Diccionarios

- Diccionario Agropecuario de México*. México: Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario, A. C., 1982.
- Diccionario de la Lengua Española*. Madrid, España: Real Academia Española, t. I, 20ª ed., 1991.

Diccionario Jurídico Mexicano. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas-Porrúa, t. I-IV, 2005.

Luna Arroyo, Antonio y Luis G. Alcerreca, *Diccionario de Derecho Agrario Mexicano*. México: Porrúa, 1982.

Documentos electrónicos

Couture, J. Eduardo, *Diccionarios. Vocabulario Jurídico*, México, CD-ROM, 2003.

Principales Términos Económicos. México: Facultad de Economía-UNAM, CD-ROM, 2000.

Páginas de internet

Cámara de Diputados, *Diccionario universal de términos parlamentarios*, URL: <http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/otras/diccjur/dic%20a.htm#a11> [2005, 3 de agosto].

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, *Terminología Forestal*, URL: <http://www.fao.org/forestry/foris/webview/forestry2/index> [2005, 11 de agosto].

Procuraduría Agraria, *Manual de Normas de Operación del Consejo Técnico Estatal*, URL: <http://www.pa.gob.mx/normatecapa/index.htm>, sección manuales [2005, 11 de agosto].

Procuraduría Agraria, *Manual para el Procedimiento Conciliatorio*, URL: <http://www.pa.gob.mx/publica/pao7ka.htm#f05> [2005, 18 de agosto].

Secretaría de Desarrollo Social, Mejores Prácticas de Política Social, URL: <http://www.sedesol.gob.mx/publicaciones/main.htm> [2005, 3 de junio 2005].

Leyes, códigos, reglamentos, decretos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley de Aguas Nacionales.

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Ley Forestal.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley Federal del Trabajo.

Ley General de Bienes Nacionales.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente.

Código Federal de Procedimientos Civiles.

Código Civil Federal.

Reglamento General de Colonias Agrícolas y Ganaderas.

Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas.

Decreto por el que se reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Glosario de términos jurídico-agrarios

Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 2005
en Perspectiva Digital, S.A. de C.V., Monte Albán 229,

Col. Narvarte, México, D.F.

El tiraje consta de 1,000 ejemplares.